

UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

*CARRERA PROFESIONAL DE DERECHO
Y CIENCIAS POLÍTICAS*



Tesis

**“LA POSESIÓN DE TIERRAS EN CONCESIONES FORESTALES
EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGIÓN UCAYALI,
2016-2017”.**

Para optar el título profesional de Abogado

Tesista:

Bach. José Antonio Morales Rivera

Asesor:

Dr. Félix Ponce e Ingunza

Huánuco – Perú

2018



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Ciclo de Asesoramiento para la Tesis Profesional



RESOLUCIÓN N° 1057-2019-DFD-UDH
Huánuco, 02 de setiembre de 2019.

Visto la Resolución N° 093-2018-DCATP-UDH de fecha 10 de julio de 2018 que declara **APROBAR** el Proyecto de Investigación intitulado **“LA POSESIÓN DE TIERRAS EN CONCESIONES FORESTALES EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGIÓN UCAYALI, 2016 - 2017”**, presentado por el Bachiller **“José Antonio MORALES RIVERA”**;

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 14° numeral 1 del Reglamento de Grados y Títulos del Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas vigente para el caso determina las diversas modalidades al cual el Graduando puede acogerse para obtener el Título Profesional de Abogado.

Que, mediante Resolución N° 1206-2015-R-CU-UDH de fecha 28 de setiembre de año 2015 se aprobó el ciclo de Asesoramiento para la tesis profesional- CATP/DERECHO del Programa Académico de Derecho y Ciencias Políticas, en atención al Art. 31 del Reglamento General de Grados y Títulos de la UDH;

Que, mediante Informe N° 002-2019-UDH/FD-CATP/FPel de fecha 23 de enero de 2019, el Dr. Félix Ponce e Ingunza Asesor del Proyecto de Investigación **“LA POSESIÓN DE TIERRAS EN CONCESIONES FORESTALES EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGIÓN UCAYALI, 2016 - 2017”**, aprueba el informe final de la Investigación;

Que, en cumplimiento al Art. 31 del Reglamento de Grados y Títulos del Programa Académico de Derecho y CC.PP vigente para el caso y a mérito del documento de visto y habiendo el Bachiller previamente presentado los tres ejemplares de la referida Tesis debidamente espiralados, es pertinente emitir la Resolución de Jurado y señalar fecha y hora para su Sustentación;

Estando a lo dispuesto en el Art. 44° de la Nueva Ley Universitaria N° 30220; Inc. n) del Art. 44° del Estatuto de la Universidad de Huánuco; Reglamento de Grados y Títulos aprobado con Resolución N° 466-2016-R-CU-UDH del 23 de mayo de 2016 y la facultad que indique;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- *DESIGNAR al Jurado Calificador para examinar al Bachiller en Derecho y Ciencias Políticas, don José Antonio MORALES RIVERA, para obtener el Título Profesional de ABOGADO por la modalidad de Trabajo de Investigación Científica (Tesis), llevado a cabo en el Ciclo de Asesoramiento para la Tesis profesional; a los siguientes docentes:*

Mg. Flor De María Sánchez Dávila	: Presidente
Abg. Wilder S. Leandro Hermosilla	: Secretario
Abg. Hugo O. Vidal Romero	: Vocal



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS
Ciclo de Asesoramiento para la Tesis Profesional



RESOLUCIÓN N° 1057-2019-DFD-UDH
Huánuco, 02 de setiembre de 2019.

Artículo Segundo.- Señalar el día viernes 06 de setiembre de 2019 a horas 11:30 a.m. dicha Sustentación, en la Sala de Simulación de Audiencias Judiciales de la Universidad de Huánuco, sito en el 4to. Edificio 1er. Piso de la ciudad universitaria La Esperanza

Artículo Tercero.- Difúndase publicando e invitando a la comunidad académica para que presencian dicha sustentación.

Regístrese, comuníquese y archívese.



UNIVERSIDAD DE HUÁNUCO
FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

Dr. FERNANDO CORCINO BARRUETA
DECANO

**ACTA DEL PROCESO DE CALIFICACIÓN POR LA MODALIDAD DE PRESENTACION
Y SUSTENTACION DE UNA TESIS**

En la ciudad de Huánuco, siendo las 11:30 AM. horas del día SEIS (06) del mes de SEPTIEMBRE del año dos mil diecinueve se reunieron en el SALA DE SIMULACION DE AUDIENCIAS DE LA UDH. los miembros Ratificados del Jurado Examinador, designados por Resolución N° 1057-2019-DFD-UDH de fecha 02 de setiembre de 2019, al amparo de la nueva Ley Universitaria N° 30220 inc "n" del Art. 44 del Estatuto de la Universidad de Huánuco, Reglamento de Grados y Títulos, para proceder por la modalidad de Presentación y Sustentación de una Tesis del Graduado **José Antonio Morales Rivera** el postulante al Título de Abogado, procedió a la exposición de la Tesis, absolviendo las interrogantes que le fueron formuladas por los miembros designados del Jurado, de conformidad con las respectivas disposiciones reglamentarias; realizado el exposición, el Jurado procedió a la calificación.

JURADOS CALIFICADORES

PUNTAJE

Mg. Flor De María Sánchez Dávila	Presidente	<u>13</u>
Abg. Wilder S. Leandro Hermosilla	Secretario	<u>10</u>
Abg. Hugo O. Vidal Romero	Vocal	<u>13</u>

CALIFICATIVO :

12
En números


DOCE
En letras

RESULTADO :


Aprobado

por

Mayoría


Mg. Flor De María Sánchez Dávila
Presidente


Abg. Wilder S. Leandro Hermosilla
Secretario


Abg. Hugo O. Vidal Romero
Vocal

DEDICATORIA

A mi madre... por su abnegada labor para darme educación. A mi padre y hermanos por su apoyo. Siempre.

José Antonio

AGRADECIMIENTOS:

A Dios; por guiarme siempre por el sendero correcto. A mis maestros de pregrado de la Universidad de Huánuco; por haber contribuido en mi formación profesional. A mi asesor de tesis; por sus instrucciones en el desarrollo del presente trabajo y por haber compartido su amplia experiencia en Epistemología. A los funcionarios y servidores públicos del SERFOR (Puesto de Control de la provincia de Padre Abad; por facilitarme datos importantes sobre las concesiones otorgadas en esta provincia y su situación actual. A los funcionarios y trabajadores de la Agencia Agraria - Padre Abad; por facilitarme información respecto a los trámites para la obtención de Constancia de Posesión y Título de propiedad en zonas rurales. A los Fiscales de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Padre Abad; por haberme facilitado el acceso a las carpetas fiscales con archivo definitivo. A la Federación Regional de Productores Agrarios y Medio Ambiente de la Región de Ucayali – FREPAMARU; por compartir información respecto al trámite que vienen realizando ante el Gobierno Regional de Ucayali para la exclusión de predios superpuestos por los Bosques de Producción Permanente, Concesiones Forestales y Áreas de Conservación Regional de Ucayali y, también por facilitarme datos sobre el número aproximado del total de moradores posesionarios en áreas forestales concesionadas con fines maderables a nivel de la provincia de Padre Abad. A las autoridades y moradores de los caseríos Nuevo Esteros y El Blanco, del distrito y provincia de Padre Abad - Ucayali; por haber cooperado con la encuesta. Y, a otras personas anónimas quienes de una u otra forma contribuyeron para la concreción de la presente tesis.

José Antonio

ÍNDICE

	Pág.
DEDICATORIA	II
AGRADECIMIENTO	III
ÍNDICE	IV
RESUMEN	IX
ABSTRACT	X
INTRODUCCIÓN	XI
Capítulo I	21
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	21
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA	21
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	28
1.2.1. Problema general	28
1.2.2. Problemas específicos	28
1.3. OBJETIVO GENERAL	29
1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	29
1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	29
1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN	31
1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN	31
Capítulo II	32
2. MARCO TEÓRICO	32
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	32
2.2. BASES TEÓRICAS	35
2.2.1. Base teórico general	36
Teoría del Positivismo del Derecho	36
2.2.2. Bases teóricas específicos sobre la variable independiente:	
La posesión de tierras	38
2.2.2.1. Teorías y Doctrinas sobre la Posesión	39
2.2.2.2. Doctrinas y el <i>nomen iuris</i> de la posesión en el Perú	40
2.2.2.3. La posesión precaria	40
2.2.2.4. La posesión ilegítima	41
2.2.2.5. La posesión ilegítima de buena fe	41

2.2.2.6. La posesión ilegítima de mala fe	42
¿Existe posesión en bienes de dominio público?	42
Situación jurídica de los poseedores de tierras en áreas concesionadas	45
2.2.2.7. Delitos que atacan el derecho posesorio – Usurpación. 46	
¿Es tutelable por el Derecho Penal el ejercicio de la posesión en bienes de dominio público?	48
2.2.3. Bases teóricas específicas sobre la variable dependiente:	
Concesiones forestales	49
Capitalismo Neoliberal	50
2.2.3.1. Antes y después de las concesiones forestales	51
2.2.3.2. Otros títulos habilitantes en áreas forestales de dominio público	57
2.2.3.3. Los BPP y las concesiones forestales con fines maderables en la provincia de Padre Abad	59
2.2.3.4. Exclusión y compensación de áreas de concesiones forestales	62
2.3. MARCO NORMATIVO REFERENTE	69
2.4. DEFINICIONES CONCEPTUALES	78
2.5. HIPÓTESIS GENERAL	79
2.5.1. Sub hipótesis	80
2.6. VARIABLES	80
2.6.1. Variable dependiente	80
2.6.2. Variable independiente	80
2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES	81
Capítulo III	82
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	82
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN	82
3.1.1. Enfoque	83
3.1.2. Alcance o nivel	83
3.1.3. Diseño	83
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA	84
3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	85

3.3.1. Para la recolección de datos	85
La encuesta	85
El análisis documental	87
3.3.2. Para la presentación de datos	87
3.3.3. Para el análisis e interpretación de datos	87
Capítulo IV	88
4. RESULTADOS	88
4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS	88
4.1.1. Cuadro de ítems de la encuesta	88
4.1.1.1 Resultados de la encuesta en cuadros y gráficos con su respectivo análisis e interpretación	89
4.1.2. Cuadro de análisis de carpetas fiscales	101
Capítulo V	106
5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS	106
5.1. CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS CON LA BASE TEÓRICA	106
5.2. CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS CON LAS HIPÓTESIS	107
5.2.1. Contrastación con la hipótesis general	107
5.2.2. Contrastación con las sub hipótesis	111
5.3. CON LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN	114
CONCLUSIONES	115
RECOMENDACIONES	117
REFERENCIAS Y CONSULTAS BIBLIOGRÁFICAS	120
ANEXOS	124
MATRIZ DE CONSISTENCIA (anexo 01)	125
CUESTIONARIO DE ENCUESTA (anexo 02)	126
FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL (Anexo 03)	128

ÍNDICE DE CUADROS

	Pág.
CUADRO N°01 (MARCO NORMATIVO REFERENTE)	69
CUADRO N°02 (OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES)	81
CUADRO N°03 (POBLACIÓN DE ESTUDIO)	84
CUADRO N°04 (MUESTRA DE ESTUDIO).....	85
CUADRO N° 05 (Cuadro de ítems de la encuesta).....	88
CUADRO N° 06 (pregunta N° 01).....	90
CUADRO N° 07 (pregunta N° 02).....	91
CUADRO N° 08 (pregunta N° 03).....	93
CUADRO N° 09 (pregunta N° 04).....	96
CUADRO N° 10 (pregunta N° 05).....	97
CUADRO N° 11 (pregunta N° 06).....	98
CUADRO N° 12 (pregunta N° 07).....	100
CUADRO N° 13 (CUADRO DE ANÁLISIS DE CARPETAS FISCALES)	101

ÍNDICE DE GRÁFICOS

	Pág.
<i>Gráfico N°01.</i> Muestra el porcentaje de cuántos cuentan y no cuentan con algún documento para acreditar su posesión.....	90
<i>Gráfico N°02.</i> Muestra en porcentaje los tipos de documento con las que cuentan y de dónde la obtuvieron	91
<i>Gráfico N°03.</i> Muestra en porcentaje los problemas más frecuentes entre posesionario o terceros	94
<i>Gráfico N°04.</i> Muestra el porcentaje de denuncias por usurpación entre particulares ante el Ministerio Público	96
<i>Gráfico N°05.</i> Muestra en porcentaje las razones (según la percepción de los encuestados) por las que fueron archivadas sus denuncias.	98
<i>Gráfico N°06.</i> Muestra en porcentaje de cuántos no lograron acceder al órgano jurisdiccional	105

RESUMEN

La presente tesis intitulada “La posesión de tierras en concesiones forestales en la provincia de Padre Abad, región Ucayali, 2016-2017”; se enfoca básicamente en identificar, describir, analizar y determinar los efectos y consecuencias socio-jurídicas que genera este fenómeno social, para luego, a partir de los resultados de estudio obtenidos, proponer alternativas concretas de solución que puedan tener en consideración las autoridades e instituciones pertinentes al momento de abordar esta problemática; toda vez que, dicho fenómeno social -por ser de relevancia jurídica- involucra derechos materiales y relaciones intersubjetivas entre posecionarios, la empresa concesionaria y el Estado. Para tales efectos; utilizamos el **método exegético jurídico** del marco normativo conexos al tema y la **metodología de investigación de campo** a través de las técnicas específicas de **encuesta** aplicada a los posecionarios de tierras en áreas forestales concesionadas, y, el **análisis documental** que consistió en el estudio de carpetas fiscales archivadas sobre casos de usurpación entre particulares suscitados en dichas áreas. De los resultados de la encuesta se pudo determinar que ninguno cuenta con un título posesorio o de propiedad que le brinde seguridad jurídica posesoria, pese a que algunos son posecionarios, inclusive, desde antes de que las áreas forestales que ocupan fueran declarados bosques de producción permanente (BPP) sobre los cuales se efectuaron las concesiones forestales con fines maderables. Respecto del análisis documental, se logró evidenciar que todas las carpetas fiscales analizadas fueron archivadas de manera definitiva después de la Investigación Preliminar correspondiente; ya que los fiscales responsables de cada caso no pudieron determinar el carácter delictivo de los hechos denunciados, porque los supuestos agraviados ni los denunciados cuentan con un título posesorio o de propiedad para acreditar la titularidad del área materia de usurpación; de manera que ninguno pudo acceder al órgano jurisdiccional para la heterocomposición de dichos conflictos. Por consiguiente, queda determinado que: los efectos socio-jurídicos que genera la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas es la **inseguridad jurídica posesoria** y, eventualmente, tal situación, genera como consecuencia socio-jurídica la **privación de la tutela jurisdiccional** en casos de usurpación entre particulares.

Términos claves: Concesiones forestales, posesión de tierras, inseguridad jurídica posesoria, usurpación entre particulares, privación de tutela jurisdiccional.

ABSTRACT

The present thesis entitled "The possession of land in forest concessions in the province of Padre Abad, Ucayali region, 2016-2017"; it focuses basically on identifying, describing, analyzing and determining the socio-legal effects and consequences generated by this social phenomenon, and then, based on the results of the study, proposing concrete solutions that can be considered by the authorities and institutions relevant when addressing this problem; since, said social phenomenon -because of legal relevance- involves material rights and intersubjective relations between possessors, the concessionaire company and the State. For such effects; we use the legal exegetical method of the normative framework related to the subject; and the methodology of field research through the specific survey techniques applied to land owners in concessioned forest areas, and the documentary analysis that consisted of the study of archived fiscal files on cases of encroachment among individuals raised in those areas. From the results of the survey it could be determined that none has a possessory or property title that provides possessory legal security, although some are possessors, including, since before the forest areas they occupy were declared forests of permanent production (BPP) on which forestry concessions were made for timber purposes. With respect to the documentary analysis, it was possible to show that all the fiscal files analyzed were permanently archived after the corresponding Preliminary Investigation; since the prosecutors responsible for each case could not determine the criminal nature of the facts denounced, because the alleged victims or the same defendants do not have a possessory or property title to prove ownership of the area of usurpation; so that none could access the jurisdictional body for the heterocomposition of said conflicts. Therefore, it is determined that: the socio-legal effects generated by the possession of land in concessioned forestry areas is the legal insecurity possessory and, eventually, such a situation, generates as a socio-legal consequence the deprivation of jurisdictional protection in cases of usurpation.

Keywords: Forest concessions, land ownership, legal insecurity of possession, usurpation between individuals, deprivation of jurisdictional protection.

INTRODUCCIÓN

La posesión de tierras (con *animus domini*) siempre ha sido una de las fuentes más primigenias del desarrollo individual y colectivo del ser humano. En el estado de naturaleza - aun cuando no nacía el Estado - los hombres eran naturalmente libres, y como tal, por la sola ocupación se hacían dueños de vastos territorios libres que no pertenecían a nadie; pero, cuando el ser humano forma grandes sociedades política y jurídicamente organizadas nace un ente superior al poder individual: el Estado; y, voluntariamente deciden someterse al poder de éste¹. De pronto es el Estado quien rige la vida de las personas en sociedad; incluyendo la forma y las restricciones para ocupar tierras. Para el ejercicio de tal *imperium*, los individuos le confieren las facultades coactivas, coercitivas y punitivas; poderes legitimados por un ordenamiento jurídico establecido; las mismas que se materializan a través de sus gobernantes y autoridades.

En el Perú; el Estado es dueño de todo el territorio nacional y demás bienes que no pertenecen a los particulares; la Constitución Política (Arts. 54, 66 y 73) y demás normas conexas así lo establece; y como tal, es quien administra las formas del uso de las tierras demaniales; ya sea adjudicando en propiedad a título gratuito u oneroso a los particulares en áreas susceptibles de ocupación, u otorgando otros derechos reales sobre otras para su usufructo; o, también puede establecer restricciones y prohibiciones sobre algunas áreas que no son susceptibles de ocupación, reservándolo para fines comunes del Estado.

Las tierras de la amazonía peruana siempre fueron consideradas como un lugar remoto y poco poblado; es así que - desde inicios de la época Republicana hasta las primeras décadas del siglo XX - las políticas del Estado estaban orientadas a fomentar el incremento de la población y emprender su desarrollo. Pero con el paso del tiempo, el Estado fue restringiendo el acceso a las tierras tanto en la extensión, las formas de uso y prohibiendo su ocupación

¹ Esta forma de surgimiento del Estado, y con ello el poder público, es la que se conoce como “El Contrato Social” o un pacto social que las personas celebran de manera implícita para delegar poder al Estado y someterse voluntariamente a ello, aceptando los deberes que éste le imponga para obtener derechos. Los filósofos (como Platón, Thomas Hobbes y John Locke) en sus ensayos sobre filosofía política, abstraen la visión del contrato social para sustentar sus teorías sobre el origen del *imperium* del Estado; pero es el filósofo suizo, Jean Jacobo Rousseau, quien utiliza un lenguaje jurídico propio para describir este pacto social entre las personas y el Estado, denominando así su obra “*El contrato social*” (1762).

sobre algunas áreas; y, finalmente, en la actualidad ya no existe “tierras de libre disponibilidad” que pueden ser susceptibles de ocupación con fines agropecuarios, puesto que todas las tierras de dominio público -fuera de las Áreas Naturales Protegidas- bien son áreas forestales de producción o de protección, donde se prohíbe la ocupación a los particulares con fines agropecuarios. Para tal efecto, a lo largo del tiempo, se emitieron diferentes dispositivos legales que regularon el acceso a las tierras del Estado y su aprovechamiento de los recursos forestales en esta región del país. Entre ellas, la Ley de Colonización e Inmigración del año 1893, tenía por finalidad la protección y fomento de la inmigración, principalmente de extranjeros europeos; a quienes se garantizaba la adjudicación de terrenos agrícolas de manera gratuita. Posteriormente, en 1898, se aprueba la Ley Orgánica de Tierras de Montaña, que no diferenciaba entre tierra y su contenido (suelo, agua, flora, fauna, e incluso los nativos), y como tal era entregado a los particulares mediante contratos de venta, en concesión², adjudicación gratuita y por contrato de colonización. Similar panorama se dio con la Ley General de Tierras de Montaña 1220, del año 1909, que autorizaba la transferencia de tierras del Estado bajo las modalidades de venta, denuncia, adjudicación gratuita y concesión; pero que estableció los límites de su uso, de manera que todo aquel que deseaba adquirir dominio sobre terrenos de montaña - debía expresar claramente el empleo o explotación a que intenta someterlos, prohibiéndose después de la adjudicación dar un uso diferente. Este modelo estuvo vigente hasta el año 1974, año en el que se publicó el Decreto Ley N°20653, Ley de Comunidades Nativas de Promoción Agropecuaria de las Regiones de Selva y Ceja de Selva; normativa que priorizó la adjudicación gratuita de predios rurales tanto para personas naturales y jurídicas con fines agropecuarios, y se fijó los límites de extensión para cada uno.

En el año 1975, con el objetivo de fomentar el acceso ordenado y uso adecuado de las tierras, se aprueba el **Reglamento de clasificación de tierras**, mediante Decreto Supremo N°062/75-AG., normativa que establece la

² Aquí se debe entender por “concesión” al otorgamiento de tierras a los particulares para su aprovechamiento con fines básicamente agrícolas y no como concesiones forestales propiamente dichas, puesto que esta figura recién aparece en el año 2000 con la promulgación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N°27803.

clasificación de las tierras según su **capacidad de uso mayor** (CUM); ya sea para la agricultura, la ganadería, para producción forestal, y tierras de protección. Permitiéndose, a partir de la dación de dicho reglamento, el acceso a la propiedad únicamente de aquellas tierras aptas para la agricultura y la ganadería, sin perjuicio de otorgación de otros derechos reales a los particulares sobre las áreas de aptitud forestal para su aprovechamiento. Si bien la mencionada norma fue derogada en el año 2009, con la promulgación del Decreto Supremo N°017-2009-AG., el régimen de clasificación de tierras según su CUM se mantiene vigentes con una sutil modificación³.

En la selva peruana, más del 90% de la extensión territorial son tierras de aptitud Forestal (ya sea para producción o de protección), y como tal son de propiedad del Estado. Estas tierras no pueden ser susceptibles de ocupación con fines agropecuarios, puesto que están reservadas para la explotación de los recursos forestales (preferentemente maderables) o están destinadas para la conservación de los ecosistemas forestales y la biodiversidad. Las tierras cuya CUM son para producción forestal o para protección, tienen su propia legislación que tiene por finalidad regular un aprovechamiento sostenible o garantizar su conservación. Entre las normativas más relevantes y de mayor duración en materia forestal fue la Ley forestal y de Fauna Silvestre, aprobada por Decreto Ley N°21147, en el año 1975, durante el gobierno del General Juan Velasco Alvarado. Esta Ley estableció que los recursos forestales son de propiedad del Estado, donde los particulares podían acceder para la explotación maderable y productos diferentes a la madera con fines industriales y/o comerciales a través de **Contratos de Extracción Forestal**. Para la extracción de madera se otorgaba áreas de hasta 100 mil hectáreas para personas jurídicas y por periodos renovables de 10 años; y para pequeños extractores (personas naturales) de áreas menores a mil hectáreas y por periodos renovables no menores a 2, ni mayores de 10 años. Si bien en estos tipos de contratos se exigía cumplir con los programas de reforestación, no había un plan de manejo forestal

³ Los cinco (05) grupos de tierras según su CUM y sus respectivos símbolos, establecido en el reglamento vigente (Decreto Supremo N°017-2009-AG), son: 1) Tierras Aptas para el Cultivo en Limpio (A); 2) Tierras Aptas para Cultivo Permanente (B); 3) Tierras Aptas para Pastoreo (P); 4) Tierras Aptas para Producción Forestal (F); y 5) Tierras de Protección (X).

que garantizara una explotación sostenible y sostenida de los recursos forestales.

En el año 2000, se promulga la nueva Ley forestal y de Fauna Silvestre N°27803. Normativa que derogó el Decreto Ley N°21147, y que buscó superar la explotación irracional de los bosques que se había instaurado a través de contratos de extracción con la ley anterior; para tal efecto, declara como “Patrimonio Forestal de la Nación” a los recursos forestales mantenidos en su fuente y las tierras del Estado cuya CUM es forestal, ya sea de producción o de protección, con o sin cobertura forestal; prohibiéndose además, el cambio de uso con fines agropecuarios y el otorgamiento de títulos de propiedad o constancias de posesión a los ocupantes dentro de estas áreas.

Respecto a las modalidades de acceso por los particulares - para el manejo y aprovechamiento de los recursos forestales maderables y no maderables en tierras de dominio público con bosques naturales primarios - introdujo un sistema de otorgamiento de derechos de explotación sobre la base de **concesiones**, y solo para personas jurídicas (empresas privadas). Las concesiones forestales con fines maderables se efectúan en áreas forestales de producción clasificadas como bosques de producción permanente (BPP). El proceso para la suscripción del contrato en el marco de la mencionada Ley y su Reglamento se realizaba mediante procesos públicos de subasta o concursos públicos⁴. A través de subasta pública se podía acceder de unidades de aprovechamiento de 10 mil a 40 mil hectáreas, y mediante proceso de concurso públicos de mil a 10 mil hectáreas; en ambos casos por periodos renovables de 40 años. Para acceder a este tipo de concesiones era y - es obligatorio también con la Ley forestal vigente - contar con documentos de gestión como los Planes de Manejo Forestal (PMF), Plan Operativo Anual (POA) para la extracción, entre otras obligaciones que la Ley y su Reglamento respectivo establece para asegurar la explotación sostenible del recurso maderable.

⁴ Con la normativa forestal vigente (Ley Forestal y de Fauna Silvestre N°29763 del año 2011 y su respectivo Reglamento) el proceso para la otorgación de concesiones forestales con fines maderables se realiza mediante concurso público y procedimiento abreviado. (Art. 80 del Reglamento para la Gestión Forestal – Decreto Supremo N° 018-2015-MINAGRI).

Los BPP forman parte del ordenamiento de la superficie forestal dentro del patrimonio forestal de nación, y se definen como áreas con bosque natural primario o secundario que por sus características bióticas y abióticas son aptas para la producción permanente y preferentemente maderable. Los BPP se aprueban por resolución ministerial del Ministerio del Ambiente⁵, las cuales son inscritas en los Registros Públicos como bines inmuebles del Estado para garantizar su intangibilidad. Sobre estas áreas se establecen las concesiones forestales con fines maderables. Una vez suscrito el contrato de concesión forestal, dicho instrumento también es inscribible en la SUNARP para garantizar el derecho otorgado al concesionario. Además, según la norma forestal vigente (Ley N°27963), el Estado no puede otorgar otros derechos reales sobre las áreas forestales concesionadas.

En la región Ucayali; los BPP fueron aprobados el 7 de enero del año 2002, mediante Resolución Ministerial N° 026-2002-AG, y desde ese entonces se han suscrito varios contratos de concesiones forestales con fines maderables, entre ellas en la provincia de Padre Abad. Cuando se creó los BPP muchas veces también abarcaba las tierras de dominio privado legalmente reconocidos con anterioridad, por lo que posteriormente tuvo que ser redimensionados por el ex INRENA. El problema radica cuando cientos de personas han ingresado a ocupar tierras en estas áreas -con fines agropecuarios- posterior a la creación de BPP y su adjudicación en concesión a empresas privadas para la explotación de madera. Peor aún, con el paso del tiempo, más personas van ingresando en dichas áreas; por lo que este fenómeno social es latente en esta parte de la región. La mayoría de ellos son familias migrantes de otras regiones del país, especialmente de la sierra, quienes llegan a esta parte de la región en busca de nuevas oportunidades y formas de vida; pero, al no encontrar áreas de “libre disponibilidad” de antaño para la actividad agropecuaria, muchos de ellos llegan a posesionarse dentro de los BPP que fueron concesionadas a empresas privadas; y, para no afectar los intereses económicos de los titulares concesionarios: se van posesionándose en áreas ya explotadas de los recursos maderables.

⁵ En el marco de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N°27308 (derogada), los BPP se aprobaba mediante resolución ministerial del Ministerio de Agricultura.

¿Cuáles son los efectos y consecuencias jurídicas que emergen de la posesión de tierras en estas áreas? ¿Cuál es la situación legal de los poseedores de tierras en tales áreas? ¿El Estado reconoce y ampara la posesión de tierras sobre estas áreas? ¿Cuál es el número de poseedores de tierras en estas áreas? ¿Cuáles son los conflictos de relevancia jurídica que surgen de la posesión de tierras en estas áreas? ¿Tienen derecho a la tutela jurisdiccional efectiva - los poseedores de tierras en estas áreas - para la resolución de los conflictos sobre actos de usurpación entre particulares?

Responder estas interrogantes son los objetivos medulares sobre la cual se desarrolla el presente trabajo de investigación. Toda vez que, después de haber realizado una exhaustiva investigación de los antecedentes del tema, solo encontramos algunos estudios relacionados a la problemática; principalmente desde una perspectiva forestal y medio ambiental -ajeno a lo socio-jurídico- y, por ende, con objetivos de estudio diferentes al nuestro. Solo por haberse realizado tales estudios en el mismo espacio que la presente investigación; ineludiblemente, percibieron el fenómeno social de la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas; consecuentemente, solo se limitan a mencionar tal problemática como un tema secundario y no plantean alternativas de solución concretas al respecto. También encontramos publicaciones de artículos, informes de talleres internacionales y entre otras investigaciones relacionados al tema que solo evidencian la existencia de la problemática. Algunos, incluso, solo sugieren salidas muy lógicas y fáciles al respecto; como el fortalecimiento institucional y normas más drásticas para superar la problemática de la posesión de tierras en concesiones forestales y en los bosques del Estado en general. De modo que, no encontramos alternativas de solución saludables tanto para la gestión sostenible de los bosques, los intereses de los titulares concesionarios y de los poseedores sobre estas áreas que la mayoría son personas que se dedican a la agricultura de subsistencia.

Para que nuestra investigación tenga el nivel de científico, después de haber descrito el problema y formulado las preguntas, planteamos como **objetivo general** de estudio: identificar, describir y analizar los efectos y consecuencias jurídicas que emergen de la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas por el Estado a empresas privadas en la provincia de Padre Abad, región Ucayali. Como **objetivos específicos** tenemos: 1)

Diagnosticar, analizar y determinar la situación legal de los poseedores de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad; 2) Determinar si el Estado reconoce y ampara la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad; 3) Calcular el número de poseedores de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad; 4) Identificar los conflictos de relevancia jurídica que surgen de la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad; y 5) Deducir y determinar si los poseedores de tierras en áreas forestales concesionadas tienen derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para la resolución de sus conflictos sobre actos de usurpación de sus posesiones por otros particulares, en la provincia de Padre Abad – región Ucayali.

Luego asumimos como **Hipótesis general** que: Los efectos y consecuencias jurídicas que emergen de la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, región Ucayali - referida básicamente a la ocupación de tierras con fines agropecuarias en áreas explotadas de los recursos maderables por el concesionario - lo cual involucra relaciones intersubjetivas y derechos materiales; ocasionan la inseguridad jurídica posesoria y el desamparo de la tutela jurisdiccional para la resolución de sus conflictos por usurpación entre particulares. Como **hipótesis específicos** asumimos que: 1) Los poseedores de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, región Ucayali; no tienen y no pueden obtener un título que garantice su posesión; por ende, su situación jurídica está enmarcada en un tipo de posesión ilegítima o precaria frente al Estado; 2) El Estado no reconoce ni ampara la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, región Ucayali; por lo tanto, no cuentan con la seguridad jurídica posesoria; 3) El número de poseedores de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad – región Ucayali, es relativamente alto; 4) Los conflictos de relevancia jurídica que surgen de la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad – región Ucayali; son los problemas de linderos y usurpación entre poseedores y terceros. 5) Los poseedores de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad – región Ucayali, no tienen derecho a la tutela jurisdiccional efectiva consagrado en la Constitución Política del Estado y demás normas conexas,

para la resolución de sus conflictos sobre actos de usurpación de sus posesiones entre particulares, porque no pueden acceder al órgano jurisdiccional.

Luego; para someter a comprobación - las hipótesis formuladas - en la realidad social, el trabajo de campo no solo consistió en la recolección de información genuina a través de técnicas específicas de la encuesta y el análisis documental; sino que, además del análisis exegetico de los dispositivos legales conexos sobre la problemática en estudio, también se ha recurrido a las diferentes instituciones públicas y privadas para recabar información concerniente al tema; entre ellas, el SERFOR, Agencia Agraria Padre Abad, Ministerio público, Poder Judicial, SUNARP, Municipalidad Provincial de Padre Abad, empresas concesionarias, Federación Regional de Productores Agrarios y Medio Ambiente de la Región de Ucayali (FREPAMARU), DEVIDA, etc. Para que, después de procesar y efectuar el análisis e interpretación deductivo inferencial correspondiente de los datos obtenidos, finalmente, validar o rechazar las hipótesis planteadas.

Por cuestiones metodológicas nuestro trabajo de investigación en su conjunto está constituido de V capítulos:

El capítulo I; contiene la descripción del problema, formulación del problema, el objetivo general y los objetivos específicos, justificación de la investigación, limitaciones de la investigación y la viabilidad de la investigación.

El capítulo II; constituye el marco teórico, la cual está constituida por los antecedentes de la investigación. Asimismo, en este capítulo desarrollamos el marco teórico, de manera que el presente estudio tenga el amparo de teorías filosóficas y jurídicas que inspiran el Derecho Peruano. También este capítulo contiene las definiciones conceptuales, las que permitirán comprender las principales terminologías afines al tema de estudio. En este capítulo también se formulan las hipótesis tanto generales y específicos, las cuales no solo se formuló como una mera suposición de posibles respuestas a los problemas formulados, sino que se ha propuesto en base al conocimiento teórico general y el conocimiento empírico sobre casos particulares relacionados al tema de estudio. Por último, este capítulo contiene las variables de estudio (independiente y dependiente) y su respectiva operacionalización.

El capítulo III; contiene la metodología aplicada en la investigación, la población de estudio, muestra de estudio, las técnicas e instrumentos utilizadas para la recolección de datos, para la presentación de datos y, el análisis e interpretación de datos.

El capítulo IV; Se presentan los resultados de la investigación, en cuadros estadísticos y gráficos respecto a los datos cuantitativos, y en cuadro categorial respecto a los datos cualitativos; con sus respectivos análisis e interpretación.

El capítulo V; comprende la discusión de los resultados obtenidos, contrastándose con la base teórica, las hipótesis y con los objetivos de la investigación. Y, por último, tenemos las conclusiones y las recomendaciones.

Lista de abreviaturas y siglas:

AG Agricultura (esta abreviatura aparece en las resoluciones ministeriales del sector Agricultura).

ARFFS Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (que son los Gobiernos Regionales.)

BPP Bosques de Producción Permanente.

CC Código Civil Peruano.

CP Código Penal Peruano.

CORAH Proyecto Especial de Control y Reducción de Cultivos Ilegales en el Alto Huallaga

CUM Capacidad de Uso Mayor (de la tierra).

DEVIDA Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas.

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. (*Food and Agriculture Organisation*).

FREPAMARU Federación Regional de Productores Agrarios y Medio Ambiente de la Región de Ucayali.

INRENA Instituto Nacional de Recursos Naturales.

LOPJ Ley Orgánica del Poder Judicial.

MINAGRI Ministerio de Agricultura y Riego.

MINAM Ministerio del Ambiente.

MP Ministerio Público.

ONG Organización no Gubernamental.

ONU Organización de las Naciones Unidas.

OSINFOR Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre.

SAC Sociedad Anónima Cerrada.

SERFOR Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (ex INRENA).

SUNARP Superintendencia Nacional de los Registros los Públicos.

UIT Unidad Impositiva Tributaria.

Capítulo I

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La posesión de un bien, ya sea mueble o inmueble, como todo acto humano de relevancia jurídica, siempre será el eje donde emanan ciertas problemáticas conexas; y como tal, merecen el estudio de aspectos que aún no han sido materia de investigación ni regulados de manera taxativa y específica por el Derecho; esto, por la propia naturaleza tan variada y compleja del actuar humano y; sobre todo el modo, las circunstancias, el tiempo y el lugar donde el ser humano realiza estas acciones, hacen que muchas veces ciertos fenómenos sociales escapen de la voluntad del legislador, de regular las relaciones intersubjetivas entre las personas, la sociedad y el Estado.

El ser humano siempre está en busca de una fuente que le genere bienestar y sustento económico para el suyo propio y su familia, y una de ellas, es la posesión de tierras. De hecho, en la Edad Media, donde imperaba el feudalismo, poseer más extensión de tierras era sinónimo de riqueza. Hoy, la posesión de tierras más que un sinónimo de riqueza representa una necesidad para las personas que se dedican a la agricultura; es por ello que, este sector de la sociedad, siempre tratarán de ocupar y posesionarse de terrenos que creen que no pertenece a nadie⁶, y en ese afán, muchos de ellos pueden llegar a posesionarse en áreas que de alguna manera están restringidas por el Estado.

El fenómeno social de la posesión de tierras (con fines básicamente agrícolas y pecuarias) en áreas forestales concesionadas a empresas privadas (con fines maderables) por parte del Estado⁷, es una problemática

⁶ En nuestro país no existen bienes sin dueño; si no es de los particulares es del Estado. Nuestra Constitución Política de 1993 así lo establece:

Art. 54.-El territorio del Estado es inalienable e imprescriptible. Comprende el suelo, subsuelo, el dominio marítimo, y el espacio aéreo que lo cubre.

(...)

Art. 73.- Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. (...)

⁷ La concesión de los recursos naturales, por el Estado a empresas privadas, tiene base constitucional:

El art. 66.- [establece] Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y

sui generis, dado que es un fenómeno relativamente reciente; por ende, hay escasos estudios al respecto; esto, porque la concesión de áreas forestales de dominio público a empresas privadas por el Estado: es también una figura relativamente reciente⁸.

A nivel mundial, el Estado es el responsable en la gestión en casi el 80% de los recursos forestales en tierras de dominio público, seguido por el sector empresarial con el 12% y las comunidades nativas con el 8%. Principalmente en los países de Latinoamérica - como Guyana, Perú, Bolivia y Chile - la explotación de los recursos forestales son efectuadas por empresas privadas por medio de un contrato de concesión. (FAO, 2009).

Las concesiones forestales cubren alrededor del 76 por ciento de todos los bosques públicos del mundo. En la Federación de Rusia, las concesiones representan casi la totalidad de sus bosques públicos; en África, el 87 por ciento; en Asia, el 76 por ciento; y en América del Sur, el 66 por ciento. (FAO, 2016).

La incidencia del fenómeno de ocupación de tierras en áreas forestales concesionadas es un problema latente en los países que utilizan este sistema de otorgación de derechos de explotación forestal en tierras del Estado. Las causas más comunes que genera este fenómeno social son el crecimiento demográfico, la agricultura migratoria y la expansión de la frontera agrícola.

En el taller internacional realizado en la ciudad de Porto Velho, Estado de Rondônia (Brasil), del 13 al 16 de septiembre de 2016; cuyo tema fue: *“¿Cuál es el futuro de las concesiones forestales y de modelos alternativos*

de su otorgamiento a los particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.

⁸ Las concesiones forestales se otorgan a partir de la promulgación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N°27603 del año 2000 y sus respectivos Reglamentos en el año 2001. (Actualmente derogados por la nueva Ley N°29763 del año 2011; la misma que entró en vigor recién en el año 2015 con la aprobación de sus 4 Reglamentos). Anterior a las concesiones forestales, la modalidad de acceso para explotación de los recursos forestales - en tierras de dominio público - se otorgaba a los particulares mediante **contratos de extracción Forestal**, principalmente a los medianos y pequeños extractores. La normativa forestal que regía la actividad forestal y regulaba este tipo de contratos fue el Decreto Ley 21147, del año 1975.

de asignación para la gestión de los bosques públicos?” -evento organizado por la FAO y el Servicio Forestal Brasileño (SFB), y ONGs internacionales afines a la gestión forestal, donde participaron 103 representantes de 25 países⁹ de diferentes continentes del mundo- se ha evidenciado el problema de ocupación o posesión de tierras en áreas forestales concesionadas con la exposición de los representantes de cada país sobre las experiencias y enseñanzas aprendidas con las concesiones forestales. El representante de Indonesia, por ejemplo, expuso que uno de los principales desafíos que afronta su país es la ocupación del área forestal concesionada por una creciente población. Por su parte el representante de Brasil, si bien -al exponer sobre los principales resultados y desafíos del sistema de concesiones forestales en su país- no mencionó el problema de la ocupación de áreas concesionadas por terceros, afirmó que “las concesiones forestales aumenta la protección de las áreas asignadas, previniendo el aprovechamiento maderero ilegal y la conversión del bosque a otros usos, por ejemplo, agricultura y ganadería”, pero sin embargo, manifestó que “un área asignada fue invadida después de que una empresa forestal decidió terminar el contrato de concesión forestal. No se tomaron medidas para prevenir este daño”. Del cual podemos inferir que, las normativas en materia forestal y conexos en este país son rigurosos para evitar la ocupación de las áreas concesionadas y para proteger los intereses del concesionario, pero que son flexibles sobre la ocupación de áreas forestales de dominio público donde no hay derecho otorgado al concesionario.

En el Perú, los bosques naturales cubren casi los 3/4 de la superficie nacional. El 93,5% de ellos, aproximadamente, se encuentran ubicados en la región amazónica, constituyendo los bosques húmedos tropicales, con diferentes especies maderables de valor comercial. Todos los recursos forestales cualquiera sea su ubicación en el territorio nacional, tanto en tierras de dominio público y privado son de propiedad del Estado, la Constitución Política y las normativas forestales le atribuyen ese dominio.

⁹ La audiencia incluía expertos y profesionales de gobiernos, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, donantes y organizaciones internacionales.

Para definir las alternativas de uso de los recursos forestales, el Estado Peruano, a través de sus organismos correspondientes¹⁰ efectúa la zonificación forestal¹¹, lo cual implica la delimitación de las tierras forestales, básicamente, según la calidad ecosistémica de los bosques más que por su ubicación geográfica. En base a la zonificación forestal se determinan las unidades de ordenamiento forestal¹² según su ubicación y el valor socio-económico que pueden desempeñar los bosques; es así, una de las unidades de ordenamiento forestal son los “bosques de producción permanente”¹³ (BPP), las cuales están destinadas -como indica el nombre- para la producción y explotación de recursos forestales preferentemente maderables, las mismas que pueden ser objeto de **concesión forestal con fines maderables**¹⁴ a empresas privadas por el Estado - a través de los Gobiernos Regionales - de unidades de aprovechamiento de 5 mil a 40 mil hectáreas para cada titular de la concesión y por periodos renovables de 40 años. En este tipo de concesiones, el titular concesionario - entre otras obligaciones establecidas en el contrato para el aprovechamiento sostenible del recurso maderable supervisadas por el OSINFOR¹⁵ - paga

¹⁰ A propuesta del SERFOR (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre) en coordinación con la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS), el Ministerio del Ambiente aprueba la zonificación forestal mediante una resolución ministerial.

¹¹ La zonificación forestal (ZF) constituye un proceso obligatorio técnico y participativo de delimitación de tierras forestales, que se realiza en el marco del enfoque ecosistémico, para luego definir las alternativas de uso de los recursos forestales y de fauna silvestre (Art. 26 de la Ley N°29763). La ZF es la base técnica vinculante sobre la cual se determinan las diferentes unidades de ordenamiento forestal establecidas en la Ley (Art. 26 del Reglamento para la Gestión Forestal – Reglamento de la Ley N°29763).

¹² Las unidades de ordenamiento forestal son instrumentos de gestión territorial para el acceso ordenado a los recursos forestales, que establece el SERFOR en coordinación con los gobiernos regionales y gobiernos locales, teniendo en cuenta las políticas de ordenamiento territorial y la zonificación regional y local.

¹³ Los bosques de producción permanente se establecen por resolución ministerial del Ministerio del Ambiente, a propuesta del SERFOR, en bosques de las categorías I y II, con fines de producción permanente de madera y otros productos forestales diferentes a la madera, así como de fauna silvestre y la provisión de servicios de los ecosistemas (Art. 29 de la Ley N°29763).

¹⁴ Aparte de este tipo de concesión, actualmente en el Perú, bajo este sistema también se otorgan concesiones forestales para productos diferentes a la madera que se actúan también en BPP, concesiones forestales para la conservación y concesiones para el ecoturismo, las cuales se efectúan en bosques de protección.

¹⁵ Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre. Se encarga de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre,

una retribución económica a favor del Estado por el derecho de aprovechamiento de los recursos maderables.

Es preciso dejar en claro que la concesión que otorga el Estado a empresas privadas, en esta categoría de bosques (BPP), es netamente para su aprovechamiento de los recursos maderables, del cual se deduce: los bienes diferentes a la madera (el suelo, el subsuelo, el recurso hídrico, la fauna silvestre, etc.) que forman parte dichas áreas concesionadas, siguen en el poder y dominio absoluto del Estado; por ende, el título habilitante otorgado al concesionario no le da derecho exclusivo sobre dichas áreas, sino, solamente para usufructuar los recursos maderables; empero, el Estado no puede otorgar otros derechos reales a terceros sobre la mismas áreas mientras se mantiene vigente la concesión, toda vez que, la finalidad de estos sistemas es que el concesionario realice la explotación de los recursos forestales con un manejo adecuado, de manera que vuelva a aprovechar en el futuro sobre las mismas áreas explotadas.

El fenómeno social, la ocupación y posesión de tierras dentro de las concesiones forestales con fines maderables, se da justamente en áreas que ya fueron explotadas del recurso maderable por la empresa concesionaria; es por ello que muchas veces pasa como “desapercibido” esta problemática; básicamente por dos razones: uno, porque el titular de la concesión muchas veces no denuncia estos actos porque no afecta sus intereses económicos, y otro, porque este tipo de concesiones (concesiones forestales con fines maderables) se efectúa en **bosques de producción permanente**, que están constituidas por bosques de las categorías I y II¹⁶; de los cuales, los bosques que pertenecen a la categoría I son áreas destinadas para la explotación intensiva y mecanizada, puesto que no son espacios geográficos que representan sistemas ecológicos

y de los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, otorgados por el Estado a los particulares (Art. 18 de la Ley N°29763).

¹⁶ Art.27, inciso a), numeral 1, de la Ley N°29763. Bosques de categoría I.- Son áreas de bosque natural primario o secundario cuyas condiciones bióticas y abióticas permiten el aprovechamiento sostenible de recursos forestales y de fauna silvestre, donde es posible la extracción de madera bajo sistemas intensivos o mecanizados, la extracción de productos no maderables y de fauna silvestre y el aprovechamiento económico de servicios de los ecosistemas.

frágiles o muy ricos en biodiversidad que ameriten de una protección especial, y por ende, no urge una intervención inmediata del Estado para desalojar a los poseionarios en estas áreas; diferente sería si la posesión fuese en áreas forestales que tienen especial protección (por ejemplo: las zonas de protección y conservación ecológica¹⁷, o las áreas naturales protegidas por el Estado); pues en estos casos no habría contemplaciones para tolerar la posesión o invasión de estas áreas; las normativas vigentes al respecto se aplican con rigurosidad.

En la provincia de Padre Abad, jurisdicción del departamento de Ucayali; las concesiones forestales con fines maderables abarcaban una superficie total de 150,401 hectáreas de bosques de producción permanente; donde operaban seis empresas concesionarias. Actualmente operan solo dos de ellos: Von Humboldt Forest SAC., que tiene otorgado en su favor una superficie de más de 44 mil has desde el año 2002, y La Empresa Forestal El Aguajal SAC. (EFASAC) una extensión de más de 17 mil has, también desde el año 2002. El resto están suspendidos y con procesos administrativos en su contra por infracción a la Ley Forestal y su Reglamento. El fenómeno de posesión de tierras en áreas concesionadas en la provincia de Padre Abad es similar que en otros lugares del país: cientos de personas impulsados por la agricultura migratoria y de expansión de frontera agrícola, vienen posesionándose en áreas que ya fueron explotadas de los recursos maderables por el titular de la concesión. Mayormente esta ocupación de tierras son por personas de otros lugares del país, especialmente de la región sierra, en donde que, entre otros factores, la creciente población demográfica restringe cada vez más la extensión de los predios para el uso agrícola, de manera que muchos se ven obligados a migrar a la vasta región selvática en busca de nuevas oportunidades y formas de vida, pero, al no encontrar áreas de “libre disponibilidad” de antaño para la actividad agropecuaria, casi por defecto, ingresan a zonas forestales que fueron concesionadas a empresas

¹⁷ Son ecosistemas frágiles que, por su baja resiliencia o capacidad de retorno a sus condiciones originales, resultan inestables ante eventos de naturaleza antropogénica. Constituyen áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad en las que se restringen o limitan los usos extractivos (Art. 27, inciso b, de la Ley N°29763).

privadas para la explotación de madera. Desde la perspectiva normativa vigente esta clase de posesión de tierras en áreas concesionadas son ilegales, por ser contrarias a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763 y sus Reglamentos; es más, estarían cometiendo delitos contra el medio ambiente tipificados en la ley penal sustantiva, puesto que para darle el uso agrícola a estas tierras es necesario la tala y la quema de los bosques¹⁸. De continuar esta situación, por falta de voluntad política del Estado para regular esta clase de posesiones, y por un sistema normativo deficiente y excluyente, que no se ajusta a la realidad de las zonas que presentan esta problemática: “La Posesión de Tierras en Concesiones Forestales en la Provincia de Padre Abad – región Ucayali”, seguirán ocasionando una serie de problemas de relevancia jurídica que produce este fenómeno social; básicamente la inseguridad jurídica posesoria, y los problemas de linderos entre posesionarios que se convierten en actos de usurpación en la modalidad despojo parcial por la violencia que se ejerce tanto al inmueble (tierra) y al posesionario, además de amenazas; actos que al ser denunciados ante el Ministerio Público, éstas son archivadas en esta instancia al parecer porque no cuentan con un título legítimo que le brinde la seguridad jurídica posesoria¹⁹, (la cual determinaremos con el trabajo de campo respectivo); de manera que tales posesionarios no pueden acceder al órgano jurisdiccional para obtener la **tutela jurisdiccional efectiva**²⁰ consagrado en nuestra Carta Magna y demás normas conexas; es por ello, en muchos conflictos de esta naturaleza suele primar la “ley del más fuerte”, o que los supuestos agraviados “tomen justicia por sus propias manos”,

¹⁸ El Art. 310 – C, inciso 1, del Código Penal; tipifica como formas agravadas la tala y quema de bosques o formaciones boscosas del (art. 310) en áreas concesionadas.

¹⁹ La Agencia Agraria de cada provincia (órgano descentralizado del Ministerio de Agricultura), como órgano competente para otorgar constancias de posesión en zonas rurales, en este caso, no puede expedir dicho título en áreas concesionadas y en ningún área forestal de dominio público. El Art. 37 La Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763, concordante con el segundo párrafo del art. 123 del Reglamento para Gestión Forestal (Reglamento de la Ley referida), prohíbe taxativamente el cambio de uso de las tierras de CUM forestal o protección y la otorgación de títulos posesorios, bajo responsabilidad de los funcionarios involucrados.

²⁰ Carrión Lugo (citado por Hinostroza Minguez), señala que “el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es inherente a toda persona por el solo hecho de serlo. Constituye la manifestación concreta de por qué la función jurisdiccional es, además de un poder, un deber del Estado, en tanto no puede excusarse de conceder tutela jurídica a todo el que se lo solicite”.

terminando en consecuencias fatales. Situación que es inadmisibles en un Estado Democrático de Derecho como es el nuestro.

El presente trabajo de investigación está enfocado básicamente para superar esta problemática; para lo cual se va a determinar la situación jurídica de los poseedores en áreas forestales concesionadas; establecer algunos lineamientos para su formalización, a fin de que obtengan seguridad jurídica de sus posesiones. Las cuales permitirán la reducción de los conflictos de naturaleza posesoria que se suscitan en dichas áreas y, eventualmente, facilitaran la heterocomposición de tales conflictos (especialmente de actos de usurpación entre particulares) ante las autoridades e instancias correspondientes.

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

2.2.1. Problema general

¿Cuáles son los efectos y consecuencias socio-jurídicas que emergen de la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, región Ucayali, 2016-2017?

2.2.2. Problemas específicos

¿Cuál es la situación legal de los poseedores de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, región Ucayali, 2016-2017?

¿El Estado reconoce y ampara la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, región Ucayali, 2016-2017?

¿Cuál es el número de poseedores de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, región Ucayali, 2016-2017?

¿Cuáles son los conflictos de relevancia jurídica que surgen de la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, región Ucayali, 2016-2017?

¿Tienen derecho a la tutela jurisdiccional efectiva - los poseedores de tierras en áreas forestales concesionadas - para la resolución de los conflictos sobre actos de usurpación entre particulares, en la provincia de Padre Abad, región Ucayali, 2016-2017?

1.3. OBJETIVO GENERAL

Identificar, describir y analizar los efectos y consecuencias jurídicas que emergen de la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad - región Ucayali, 2016-2017.

1.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- A.** Diagnosticar, analizar y determinar la situación legal de los poseedores de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad - región Ucayali, 2016-2017.
- B.** Determinar si el Estado reconoce y ampara la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad - región Ucayali, 2016-2017.
- C.** Calcular el número de poseedores de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad - región Ucayali, 2016-2017.
- D.** Identificar los conflictos de relevancia jurídica que surgen de la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad - región Ucayali, 2016-2017.
- E.** Deducir y determinar si los poseedores de tierras en áreas forestales concesionadas tienen derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para la resolución de sus conflictos sobre actos de usurpación entre particulares, en la provincia de Padre Abad, región Ucayali, 2016-2017.

1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Todo egresado universitario, no puede ser ajeno a las problemáticas más inmediatas que lo rodean; las cuales requieren de un estudio y profundo análisis para luego proponer alternativas de solución que

contribuyan el desarrollo de la sociedad dentro del marco de un Estado de Derecho moderno e inclusivo. El presente trabajo de investigación socio-jurídico, nace de la experiencia indirecta de casos particulares pero típicos que se generan en áreas forestales de dominio público (concesionadas o no), donde está prohibido la ocupación de tierras con fines agropecuarios y el otorgamiento de títulos posesorios o de propiedad en estas áreas; esto es: problemas de linderos entre posesionarios e invasiones por terceros sobre las posesiones muy extensas de otro particular, las cuales se producen mediante actos de violencia y amenazas; las mismas que -por su naturaleza- configurarían delitos de usurpación en la modalidad de despojo parcial; pero que al ser denunciados estos supuestos delitos ante el Ministerio Público, éstas son archivadas en esta instancia a diferencia de casos similares suscitados en predios de dominio privado que sí logran acceder al órgano jurisdiccional respectivo ¿Las razones?; es materia de trabajo de campo a través de las técnicas pertinentes que se desarrollan *infra*.

Nuestro trabajo no solo se justifica sobre el caso particular; sino, el fenómeno social de estudio genera otras interrogantes, de aquellos aspectos que no fueron abordados por otras investigaciones precedentes; las cuales desarrollaron desde una perspectiva ajena a lo socio-jurídico y con objetivos distintos al nuestro, de manera que solo se limitan a describir la existencia del fenómeno social materia de estudio como un tema secundario, y como tal, no proponen alternativas concretas de solución al respecto. Por lo que, el presente trabajo está enfocado no solo a describir y explicar el fenómeno social de estudio para el logro de los objetivos propuestos, sino, proponer alternativas de solución saludables tanto para gestión sostenible de los recursos forestales, los intereses de los titulares concesionarios y, de los posesionarios quienes muchas veces dependen únicamente de los terrenos que poseen en estas áreas para dedicarse a la actividad agropecuaria, básicamente de subsistencia. Las mismas que, además, pueda servir de orientación y alcance a las autoridades competentes e instituciones involucradas al momento de abordar esta problemática; y, a los operadores del derecho para resolver mejor las incertidumbres jurídicas, los conflictos de intereses y delitos que surgen de

la posesión de tierras en áreas concesionadas en la provincia de Padre Abad, de la región Ucayali.

1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN

Las limitaciones que dificultaron el desarrollo del presente trabajo de investigación, entre otros factores, fue la escasa investigación precedente sobre este fenómeno social y jurídico, de manera que hubiera servido de consulta sobre algunos aspectos que se pudo tener en consideración para un mejor estudio del presente trabajo de investigación.

Otra de las dificultades fue la poca información en cuanto a los datos estadísticos que deben tener las instituciones correspondientes sobre la incidencia de esta problemática.

1.7. VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

Fue viable la realización del presente trabajo de investigación, toda vez que el autor conoce la problemática materia de estudio. Además, por haber tenido como domicilio habitual en la localidad donde se llevó a cabo la presente investigación, conoce las fuentes de donde se pudo recabar información genuina sobre la problemática en estudio, para su posterior procesamiento, análisis e interpretación.

En cuanto a la logística, tampoco presentó mayores problemas, ya que el investigador contó con los materiales necesarios para la ejecución del proyecto de investigación.

En cuanto a los métodos y técnicas que todo trabajo de investigación científica debe hacer uso, fue de igual modo posible, ya que se contó con el apoyo de un asesor experto en la materia que permitió desarrollar el presente proyecto de investigación y consecuentemente su ejecución. Asimismo, fue viable el acceso a las fuentes bibliográficas, tanto físicas y virtuales, que sirvieron de consulta y sustento teórico y metodológico.

Desde el punto de vista financiero, también fue factible la realización del presente trabajo, puesto que realizar este tipo de estudios, a nivel provincial, implica un gasto posible de solventar, por lo que no estuvo más allá de las capacidades económicas del investigador.

Capítulo II

2. MARCO TEÓRICO

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

Hay escasos estudios relacionados al tema propuesto. Además, tales estudios no han abordado específicamente dicha problemática, pero, de alguna u otra forma dan un pequeño esbozo al respecto de manera más general y desde una perspectiva distinto al que desarrollamos²¹.

Tesis: *Análisis situacional de las Concesiones Forestales de las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad de la Región de Ucayali, Zafra 2002-2010.* Sherly Susan Alvarado del Castillo y Johnny Jack Reátegui Vásquez (2014). Universidad Nacional de Ucayali - Perú; cuyos autores describen:

“Las invasiones constituyen un problema recurrente en las concesiones forestales principalmente en las que se encuentran ubicadas en la provincia de Padre Abad y muchas veces los concesionarios no denuncian porque los invasores son cocaleros por lo tanto tienen temor a represalias, asimismo son invadidos por parceleros debido a que estas concesiones tienen accesibilidad por vía terrestre y las concesiones se encuentran próximas a centros poblados por lo que permanentemente se encuentran presionados por la expansión de los centros poblados y la creciente migración de población de la sierra”.

El presente trabajo ha sido desarrollado desde una perspectiva medio ambiental y ecología forestal; solo porque la población de estudio coincidió con el nuestro, ineludiblemente evidenciaron la problemática, por lo que solo se limitan a mencionar como un tema secundario, y como tal, el estudio no describe la problemática desde el punto de vista socio-jurídico; tampoco plantea alternativas de solución al respecto. Además, si bien mencionan

²¹ Al describir el problema de estudio, hemos dejado claro que: el tema propuesto, está referida, básicamente, a la posesión de tierras con fines agrícolas en áreas forestales concesionadas con fines maderables, pero que ya fueron explotadas de sus recursos maderables por el titular concesionario. Y por supuesto, desde el punto de vista socio-jurídico.

que los “invasores”²² son personas que se dedican a la siembra ilegal de la planta de coca, éstos constituyen un porcentaje mínimo por la constante intervención del CORAH para erradicar compulsivamente las plantaciones ilícitas de tal arbusto, de manera que muchos han cambiado sus actividades ilegales con cultivos de productos alternativos impulsados por DEVIDA. Prueba de ello se pueden apreciar en estos lugares parcelas mayormente con plantaciones de cacao, plátanos para fines comerciales, y otros productos de pan llevar para el autoconsumo, además de ganadería en pequeña escala.

Tesis: *El manejo inadecuado y la explotación irracional de bosques.* Lic. Jhonny Taborga Arandia (2005) - Universidad Mayor de San Andrés – Bolivia. El autor, al referirse a la problemática de ocupación de tierras en áreas forestales concesionadas y los bosques de dominio público en general, infiere:

“Una de las primeras conclusiones tiene que ver con la falta de seguridad jurídica, la cual no solamente limita las inversiones, sino que determina desconfianza e inseguridad en los actores, siendo necesario el saneamiento del derecho propietario y así otorgarle seguridad jurídica al productor maderero, a los campesinos y a los colonizadores. El nuevo régimen forestal conceptualiza un sistema de regulación que tiende no solamente a la fiscalización, sino a efectivizar un manejo sostenible de los recursos forestales, buscando eliminar a la informalidad, incluyendo el control del desmonte, la preservación de servidumbres ecológicas con cobertura boscosa y usos no consuntivos de áreas forestales (...) cualquier acción del gobierno referida al uso, distribución y redistribución de la tierra antes que lo social y económico debe considerar lo ecológico, si es que existe la voluntad de conservar nuestros recursos forestales”.

Al igual que la anterior tesis, el autor ha desarrollado el tema desde el punto de vista ajeno al que efectuamos; por ende, no hay conclusiones sustanciales desde una perspectiva socio-jurídica. Si bien sugiere el saneamiento del derecho propietario de los campesinos que ocupan tales

²² Denominación despectiva a los poseionarios post concesión.

áreas para otorgar seguridad jurídica, no especifica de qué forma puede efectuarse dicho saneamiento, o en todo caso cuáles serían los lineamientos que las autoridades competentes deben tomar en consideración para tales efectos; puesto que, el reconocimiento del derecho posesorio en áreas forestales concesionadas no es tan fácil como parece, toda vez que, involucra los intereses económicos del concesionario, pone en riesgo la preservación de los ecosistemas forestales, implica la colisión de las normativas forestales con las normas sobre saneamiento físico legal de predios rurales, etc.

Tesis: *¿Posesión precaria es una posesión ilegítima?* Edilberto José Rodríguez Tanta (2014). Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Lambayeque – Perú.

Traemos a colación este tema de investigación, a efectos de que coadyuve al logro de uno de nuestros objetivos: determinar la situación legal de los posesionarios en áreas forestales concesionadas.

El autor de la tesis sugiere: “(...) que el posesionario precario es un posesionario ilegítimo y otros que consideran que se trata de figuras distintas, y que para mayor abundamiento la figura del precario no tiene mayor antecedente, sino el establecido en el Código Civil de 1984; es posible modificar la regulación normativa para considerar la regulación única del posesionario ilegítimo, y clasificándolo en buena fe, mala fe y precario, y de este modo resolver de manera definitiva tales controversias”.

No compartimos la idea del autor en este aspecto, puesto que la única clasificación de ilegítimo está pensado para aquellos posesionarios de bienes (inmuebles) privados, del cual no tiene derecho a poseer, ya sea porque otro es el propietario o hay otro con mejor derecho sobre el bien; pero qué pasa si el bien no pertenece a los particulares, es decir, pertenece al Estado; por ejemplo el vasto territorio selvático, muchas veces inexplorada; aquí lógicamente el que entra en posesión de una cierta extensión de tierra cree que es el dueño, porque supone que no le pertenece a nadie, pero sabemos que en nuestro país no existen bienes sin dueño: el Estado es el dueño de todos los bienes que no pertenecen a

los particulares, nuestra Constitución así lo establece (Art. 54 y 73); por lo tanto, los poseсионarios en alguna parte del territorio nacional que no cuentan con un título (una constancia de posesión, título de propiedad o cualquier otro documento otorgado por una autoridad competente) son poseсионarios precarios, no frente a otro particular, sino precario frente al Estado; y solo el Estado – como dueño de todo el territorio nacional que no pertenecen a los particulares – puede “reivindicar” y desalojar al “ocupante precario” si considera que la ocupación no es susceptible de apropiación; por ejemplo las áreas forestales concesionadas.

Por otro lado; si bien es cierto que la clasificación de la posesión ilegítima en: ilegítima de buena fe y de mala fe – según nuestro Código Civil, exige la existencia de un título; desde mi punto de vista, también opera solo para bienes de los particulares, mas no para bienes de dominio público, pues aquí todo documento o título expedido por una autoridad, competente o no, y todo tipo de documento celebrado que otorguen derechos posesorios o de propiedad - en áreas que no son susceptibles de ocupación - deviene en nulo de plano; sería ilógico discutir sobre la legitimidad de dichos documentos, o si es de mala fe o de buena fe, si el inmueble (tierra) no podía ser objeto de ocupación. Desde esta perspectiva, el posecionista sin título en áreas de dominio público, pero que es susceptible de apropiación: es precario frente al Estado, con la salvedad de que puede obtener un título por adjudicación por parte del Estado; pero aquellas posesiones en áreas de dominio público que no está permitido la ocupación, por ejemplo, las áreas concesionadas o las áreas naturales protegidas por el Estado, así tengan título o no, los posecionistas, son también precarios frente al Estado, pero a diferencia del anterior, el Estado, en uso de sus facultades como “propietario” puede reivindicar y desalojar al “ocupante precario” en cualquier momento.

2.2. BASES TEÓRICAS

Puesto que el presente trabajo de investigación está orientado a diagnosticar la situación legal de los posecionistas en áreas forestales concesionadas, para luego determinar si tales posecionistas tienen amparo legal por parte del Estado y, si en un Estado de Derecho como el nuestro

pueden obtener tutela jurisdiccional para la defensa de sus intereses posesorios, específicamente de actos de usurpación entre particulares; y sobre todo la falta de una necesaria regulación por el Derecho para brindar seguridad jurídica a los posesionarios; desde esta perspectiva, es necesario ampararnos a una de las tantas teorías que tratan de explicar el origen y la razón del Derecho como ente regulador de las relaciones intersubjetivas entre las personas, la sociedad y el Estado. No somos partidarios de alguna teoría en concreto, más bien, creemos que cada teoría es fundamental y puede ajustarse y servir de sustento según la naturaleza del fenómeno socio-jurídico que el investigador haya elegido para su estudio.

En esta línea de ideas, el presente trabajo de investigación, por ser un fenómeno socio-jurídico relativamente reciente y que aún no está regulado de manera taxativa por el Derecho: por su naturaleza se ajusta a la “Teoría del Positivismo del Derecho”. A continuación, veamos de manera sucinta los fundamentos más relevantes de esta teoría.

2.2.1. Base teórico general

Teoría Del Positivismo Del Derecho. El matemático y filósofo francés Augusto Comte, es considerado como el fundador del Positivismo; quien en su obra “*Curso de Filosofía Positiva*” (1830-1842), expone la *Ley de los tres estados*²³; donde admite como única

²³ El autor afirma que, desde una perspectiva interpretativa histórica, el ser humano como sociedad en su conjunto pasa por tres estados teóricos (o tres etapas de evolución cognoscitiva) diferentes: el estado teológico o ficticio; el estado metafísico o abstracto, y por último el estado científico o positivo. El primero es el estado teológico, de carácter mágico- religioso, aquí el ser humano – en su desconocimiento de la ciencia - atribuye como agente causal de todos fenómenos naturales al poder divino (Dios) y dioses paganos. El segundo es el estado metafísico, considera que es una prolongación del estado teológico, aquí los seres humanos creen en las supersticiones (por ejemplo: la reencarnación), pero también es consciente de un Dios abstracto, de hecho, todo los fenómenos naturales y sociales tienen explicación mediante categorías puramente abstractas, por ejemplo: el contrato social, la igualdad de las personas, etc.; se le considera a este estado como una transición donde el ser humano sigue buscando conocimientos absolutos hasta llegar al estado positivo. El tercero es un estado fijo y definitivo, es el estado científico o positivo (una concepción racional experimental de las cosas), pretende explicar todos los hechos mediante una aclaración material de las causas, donde la imaginación está subordinada a la observación y experimentación guiadas por la teoría, ateniéndose a lo positivo de estos, a lo que está

forma de realización y progreso de la humanidad al estado científico, o positivo; dejando otrora lo supersticioso, que para conocer el mundo y todos los fenómenos que se suscitan en ella, deben ser estudiadas científicamente para poder explicar las causas y efectos mediante la observación, la experimentación y comprobación; y de esta manera establecer leyes generales sobre ciertos fenómenos para prever, controlar y dominar, no solo a la naturaleza, sino, también a los fenómenos sociales con el objetivo de asegurar el progreso y el orden social.

Siguiendo la línea de la escuela positivista de Comte, surgieron muchos filósofos, autores de teorías en las distintas ramas del conocimiento en base a esta corriente filosófica; pero lo que aquí nos incumbe es aplicar el positivismo en las ciencias jurídicas; así que encontramos al jurista austriaco Hans Kelsen como el máximo exponente del *Iuspositivismo*²⁴, o Derecho Positivo (o Positivism Jurídico). Kelsen, en su obra "*La teoría pura del Derecho*"; en líneas generales, considera que la ciencia jurídica para mantenerse dentro de lo científico debe dejar de lado elementos extraños como la justicia (por pertenecer a lo moral), los juicios que no sean normativos; es decir, que el Derecho desde el punto de vista científicista debe ser suficiente en sí misma, dejando de lado la injerencia de las demás ciencias; es por ello por lo que se denomina teoría "pura" del Derecho.

Aunque con el paso el tiempo – y habiendo surgido muchos críticos y detractores del Positivism – siguen vigentes el pensamiento de Comte, Kelsen y otros autores defensores de esta corriente filosófica, pero como toda teoría o ciencia no es estático, sino que, con el paso del tiempo sufren mutaciones (al menos en su aplicación práctica) y se van concibiendo de acuerdo a la realidad

dado o establecido. Ésta es la base sólida del conocimiento humano. El conocimiento se hace científico hasta que se organiza y generaliza, sometiéndose a comprobación como base de toda ciencia.

²⁴ Corriente filosófico-jurídica, que considera, que el único derecho válido es el que ha sido creado por el ser humano. El hombre ha creado el Estado y en él ha constituido los poderes en los que se manifestará la soberanía; el Poder Legislativo es quien originariamente crea el derecho, mediante las leyes.

social presente; es así que hoy en día se habla del “Positivismo Analítico”, lo cual implica que el Derecho no es suficiente en sí misma, sino, puede y debe complementarse, en primer lugar: de otras ciencias que provea al Derecho de ciertos elementos que aparecen como racionalmente indispensables, ante todo, para la justificación racional de la obligación jurídica, más allá del mero *factum* del poder coactivo; y en segundo lugar: de la Axiología; es decir, de una instancia de apelación ética, desde la cual sea posible juzgar crítica o valorativamente los contenidos del Derecho Positivo.

Como ya se mencionó, no somos partidarios de alguna teoría en concreto; pero la razón de traer a colación el Positivismo es simple y llanamente porque la naturaleza de la problemática materia de estudio, amerita de una regulación por el Derecho y, en nuestro país, si un fenómeno social no está regulado por el Derecho no puede ser objeto de protección o amparo legal; es decir, nuestro país ha seguido la línea del Positivismo – aunque se nutre de las demás corrientes filosóficas y teorías jurídicas contemporáneas – es así que todo fenómeno socio-jurídico de relevancia está regulado taxativamente por el ordenamiento jurídico; es decir, está positivado, está establecido, está dado, está escrito; pues eso es el sentido del Positivismo²⁵; de otra manera no tendría el carácter de imperativos en una sociedad actual en la que vivimos.

Así lo entiende también Cisneros (2000) al referirse al Derecho Positivo: “Es un conjunto de normas puesta por los seres humanos, a través del Estado, mediante un procedimiento formalmente válido, con la intención o voluntad de someter la conducta humana al orden disciplinario por el acatamiento de esas normas”.

2.2.2. Bases teóricas específicos sobre la variable independiente: La posesión de tierras. Por otro lado; también es necesario traer a colación algunas teorías y doctrinas sobre la posesión, para

²⁵ Del latín *positivus* (puesto explícitamente); no significa que es contrario a lo negativo, sino, designa a lo que está establecido, lo que es útil, seguro, inequívoco, lo patente, lo incuestionable, que no ofrece ninguna duda, lo que implica la presencia o exigencia de algo.

determinar la situación legal de los posecionarios que vienen ocupando áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad – región Ucayali.

2.2.2.1. Teorías y Doctrinas sobre la Posesión. No vamos a embarcarnos hasta el Derecho Romano Antiguo para analizar el nacimiento de la posesión como una figura jurídica reconocida en un cuerpo legal, o recurrir al Derecho Comparado para discutir sobre las diferentes maneras de concebir esta figura en el ordenamiento jurídico de otros países; pues ello implicaría ahondarnos demasiado en el tema, ya que existe mucha literatura con opiniones diversos al respecto. Lo que pretendemos es analizar la figura de la posesión según la concepción actual y de acuerdo con lo establecido en nuestro Código Civil vigente.

Según Aníbal Torres (2006) "la posesión es el poder de hecho o señorío, con o sin derecho, que una persona ejerce sobre un bien o derecho, sin importar si el poseedor tiene o no *animus domini* (voluntad dominical, o sea voluntad de poseer como dueño) o *animus possidendi* (voluntad de poseer)" (p. 335). Por lo tanto, para ser poseedor debe de manera física ejercerse la posesión de hecho respecto al bien, independientemente de cualquier título y subjetivismos; mediante formas de usar, disfrutar, habitar, labrar la tierra, criar animales, cosechar, etc.

Rodríguez (2014), interpreta: "El derecho real de posesión emana del hecho, en cambio la propiedad es un poder de derecho, cuando se quiera determinar e identificar al poseedor basta establecer la situación de hecho, sin requerir mayores análisis si tal circunstancia de hecho se relaciona con una situación jurídica" (p. 23).

Sánchez (2008) por su parte, estableció tres momentos que se distinguen en toda relación posesoria: "a) Deseo por la cosa, esto es el interés, b) Dirección de la voluntad hacia

la cosa; y c) Realización de esta voluntad mediante el establecimiento de una relación exterior hacia la cosa” (p. 75).

2.2.2.2. Doctrinas y el nomen iuris de la Posesión en el Perú.

El vigente Código Civil Peruano (1984), ha retirado todo elemento subjetivo, y en su artículo 896 establece que la posesión es el ejercicio de “hecho” de uno o más poderes inherentes a la propiedad²⁶. Por lo tanto, se prescinde de que si el poseedor tiene o no ánimo de adueñarse del bien o simplemente de poseer. No importa si el poseedor es propietario, un simple arrendatario, un poseedor precario o ilegítimo: todos tienen la calidad de posesionarios; porque todos tienen relación física con el inmueble y, ese hecho es la que la norma a positivado como figura jurídica, y como tal son tutelables de cualquier acto tendiente a perturbar o despojar a quien mantiene el dominio fáctico sobre el bien inmueble.

2.2.2.3. La posesión precaria.

Según el artículo 911 de nuestro Código Civil vigente, la posesión precaria es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido; este artículo contiene dos supuestos: a) Ausencia de título. - se trata del poseedor que entró de hecho en la posesión, no tiene título alguno, como es el caso del que entra clandestinamente en la posesión, el usurpador, el ladrón, el hurtador, etc. b) Título fenecido. - el título fenece por decisión judicial, por disposición de la ley; por cumplimiento del plazo o condición resolutorios, por mutuo disenso, por nulidad, resolución, rescisión, revocación, retractación, etc. (Rodríguez, 2014, p. 40)

²⁶ Muchos jurisconsultos cuestionan esta definición contenido en el art. 986 del C.C., porque aparentemente lo equipara con el valor de otro derecho: la propiedad; toda vez que la posesión tiene un valor autónomo y tutelable por el derecho independientemente de otros derechos reales que pueda recaer en el inmueble materia de posesión.

Por su parte, Lama More (como se citó en Rodríguez, 2014) en su libro “La posesión y la posesión precaria”, asegura que:

La ocupación precaria es una variante de la posesión ilegítima de mala fe y para sustentar su posición cita al IV Pleno Jurisdiccional Civil realizado en la ciudad de Tacna, a fines de agosto de 2001, en donde se acordó por unanimidad que es precario quien posee un bien con título manifiestamente ilegítimo. (p. 41)

Con ello cobra mayor fuerza la iniciativa de modificar el art. 911 del Código Civil, sugerido por algunos juristas, para establecer únicamente la posesión ilegítima y sus variantes, el precario, de mala fe y de buena fe.

2.2.2.4. Posesión ilegítima. Nuestro Código Civil no desarrolla taxativamente este concepto, pero si la variante posesión ilegítima de buena fe, y de manera tácita la figura de posesión ilegítima de mala fe. Por consiguiente, podemos colegir de la misma norma que ilegítimo es aquella posesión que se ejerce sobre el bien con un título obtenido de quien no tenía derecho para conceder, o también podemos decir que es ilegítima toda aquella posesión con un título obtenido contrario a derecho.

2.2.2.5. La posesión ilegítima de buena fe. Según nuestro Código Civil vigente, la posesión ilegítima es de buena fe cuando el poseedor cree en su legitimidad, por ignorancia o error de hecho o de derecho sobre el vicio que invalida su título.

Según Max Arias (1991), la posesión ilegítima para ser considerado de buena fe, se tendría que tener en cuenta los siguientes elementos:

- 1) un fenómeno psicológico, como es la creencia, certidumbre o convicción en la legitimidad de la

posesión viciada. El poseedor afirma una realidad que no existe y su creencia es absoluta; 2) la necesaria existencia de un título alrededor del cual gira la posesión misma (causa generadora del derecho); esto es, un acto jurídico por el cual se transmite la posesión de un bien, ya sea en propiedad, usufructo, arrendamiento, etc.; 3) un vicio (de forma o fondo) que afectando al título, lo invalida, imposibilitando la transmisión de la posesión; y 4) el error de hecho o derecho cometido por el poseedor, ignorante del vicio que invalida el título. (Citado por Rodríguez, 2014, p. 43-44).

2.2.2.6. La posesión ilegítima de mala fe. La posesión ilegítima de mala fe tampoco no ha sido conceptualizada de manera taxativa por nuestro Código Civil, pero se puede deducir que es la que se ejerce sobre un bien, a sabiendas del vicio que invalida el título; o en todo caso se convertirá en poseedor ilegítimo de mala fe, desde el momento que toma conocimiento de que la posesión que venía ejerciendo sobre el bien, en virtud de un título, es en contravención al derecho.

En conclusión; según el Código Civil Peruano, para ser considerado una posesión ilegítima ya sea de buena fe o mala fe, se requiere necesariamente de la existencia de un título. En nuestra opinión consideramos que ilegítimo es aquello que se posee en contravención al derecho, con o sin título. Para determinar si el posesionario ilegítimo es de buena fe o mala fe, no es imprescindible la existencia de un título, por la misma naturaleza meramente subjetiva que se suele discutir en esta clase de posesiones.

¿Existe posesión en bienes de dominio público? Nuestro código civil vigente, tampoco aclara si la posesión solo puede efectuarse sobre bienes de dominio privado, por lo que cabe la posibilidad de posesión en bienes demaniales o

de dominio público. Aunque la cuestión es ampliamente debatida en la doctrina, toda vez que la definición de la posesión -en nuestro Código Civil y la de otros países- es simétrico al de propiedad.

Gonzales B. Gunther (2003) en su obra *Curso de Derechos Reales*, afirma que:

Con respecto a la categoría de bienes públicos, los denominados “bienes de dominio privado del Estado” o “bienes patrimoniales”, no caben dudas de que sobre éstos sí procede la posesión, la tutela posesoria, e incluso la *usucapión*. Recuérdese que este tipo de bienes se rigen por las normas de la legislación civil. (p. 239, pie de página)

Sacco y Caterina, (citado por Gonzales, 2003) plantean la siguiente aseveración: “¡si la posesión es reflejo de la propiedad, y sobre los bienes demaniales no hay propiedad privada, entonces tampoco hay posesión!”. Sin embargo, el mismo autor citante reflexiona: que la criticada definición legal contenida en nuestro Código Civil (art. 896) - que establece a la posesión como un reflejo fáctico de la propiedad - no puede dar pie para determinar que no existe posesión sobre bienes de dominio público; ya que en realidad el citado artículo – por el contexto – quiere decir algo distinto, esto es, que la posesión es un poder de hecho sobre los bienes (corporales), un control fáctico sobre estos, por lo que el *nomen iuris* sobre la posesión tiene un valor autónomo -y no un simple reflejo- de la propiedad o de otros derechos reales. (p. 239)

Si bien es cierto, que todos los bienes de dominio público tienen la calidad de inalienables, inembargables e imprescriptibles; ello no implica que todos tengan las mismas características, tampoco no en todos ellos puede ser posible

la posesión y la tutela por el derecho como tal, al menos de actos de despojo por otro particular.

Gonzales B. Gunther (2003) observa al respecto:

En efecto, aparte de los bienes de dominio público “en estricto” (recursos naturales, mar, bosques, áreas naturales protegidas, etc.), cabe distinguir una subcategoría, denominada por el art. 73 de la Constitución como bienes de “uso público” como son las calles, parques, plazas, los puentes, las carreteras, las playas, etc., sobre los cuales no se puede tener un uso exclusivo porque son de utilidad general. Si tenemos en cuenta esta clasificación, algunos de los bienes demaniales “en estricto” sí son susceptibles de una apropiación fáctica exclusiva y excluyente (ejemplo: aguas, bosques, áreas naturales protegidas), sobre las cuales se asienta una posesión tutelable exclusivamente entre los particulares –a fin de evitar la violencia-, pero no ante la administración Estatal, quien puede expulsar impunemente al poseedor del control sobre el bien de dominio público. En cambio, en los bienes de uso público no existe propiedad privada, ni tampoco uso exclusivo, por lo que la posesión se halla vedada en ellos. (p. 240)

Y el mismo concluye:

En resumen, en los bienes de uso público no hay posesión, ni tutela posesoria entre los particulares, y menos aún son susceptibles de usucapión. Además, la Administración (el Estado), puede llevar acabo la desocupación en cualquier momento. Aquí el contacto físico mantenido con la cosa queda degradado en una relación de mera “tenencia”, sin ningún remedio o instrumento de protección. Por el contrario, en algunos

bienes de dominio público (“en estricto”) sí cabe una “posesión relativa”, con una tutela limitada exclusivamente a las relaciones entre particulares. El art. 599, 1 del C.P.C. ratifica esta interpretación cuando establece que la tutela posesoria (interdictal) no abarca a los bienes de uso público, por lo que *contrario sensu*, sí comprende a los bienes de dominio público que no sean de uso público, y con mayor razón a los “bienes de dominio privado del Estado”, o también llamados “bienes patrimoniales”. (p. 241)

Situación jurídica de los posecionarios de tierras en áreas concesionadas. Considerando que sí es posible la figura jurídica de posesión en bienes de dominio público para efectos de la tutela solo entre particulares; queda determinar qué tipo de posesión es la que ejercen los ocupantes de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad.

Por el momento, tomando en cuenta que nuestro Código Civil vigente exige necesariamente de la existencia de un título para la figura jurídica de posesión ilegítima (de buena fe o de mala fe), descartamos la calificación de posecionarios ilegítimos, aunque la posesión que ejercen sobre dichas áreas es contraria a las normativas forestales y otros dispositivos legales conexos.

Quedando solamente la figura jurídica de posesión precaria, con la cual se puede calificar a los posecionarios de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad²⁷, puesto que se encuentran ocupando áreas

²⁷ Realizamos esta conclusión anticipada (generalizando a todos los posecionarios de tierras en áreas forestales concesionadas de la provincia de Padre Abad) tomando en cuenta que la gran mayoría han ingresado a ocupar estas áreas después de que fueron declarados como BPP y posteriormente otorgados en concesión a empresas privadas para la explotación de madera, donde las normativas forestales prohíben taxativamente la otorgación de títulos posesorios o de propiedad por parte de las autoridades competentes; sin embargo, puede que exista algunos posecionarios con título, siempre en cuando si son posecionarios desde antes de que las áreas que ocupan fueron declarados como BPP y que hayan

forestales de dominio público clasificados como BPP que fueron concesionadas a empresas privadas para la explotación de madera, donde no es posible obtener ningún documento oficial de carácter posesorio o de propiedad en dichas áreas después de la creación de BPP (año 2002); pero que tal calidad de poseesionarios **precarios es frente al Estado** y no frente a otro particular; puesto que todos tienen la misma condición de precarios.

2.2.2.7. Delitos que atentan el derecho posesorio - Usurpación²⁸.

Entre los delitos contra el patrimonio tipificados en el Código Penal Peruano (C.P.), la usurpación, como tipo penal, tiene por finalidad proteger la posesión de un bien inmueble; de aquellas conductas o actos tendientes a la turbación, desposesión o afectación de un derecho real que una persona ejerce sobre el inmueble. Pero que dichas conductas, para que se constituya delito, tiene que realizarse por medio de la violencia (contra el poseedor o contra el bien inmueble), la amenaza, el engaño, abuso de confianza, o por medio de actos ocultos. Si no concurren estos elementos no estaríamos frente a un delito, sino, solo constituirían actos antijurídicos expeditos para la intervención del Derecho Civil, mediante los interdictos de retener y recobrar.

tramitado y obtenido su respectiva constancia de posesión o título de propiedad de sus posesiones. La misma que podremos determinar de manera definitiva con los resultados obtenidos del trabajo de campo.

²⁸ Delito tipificado en el artículo 202 del Código Penal, la cual establece: Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años:

1. El que, para apropiarse de todo o parte de un inmueble, destruye o altera los linderos del mismo.
 2. El que, por violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, despoja a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real.
 3. El que, con violencia o amenaza, turba la posesión de un inmueble.
 4. El que, ilegítimamente, ingresa a un inmueble, mediante actos ocultos, en ausencia del poseedor o con precauciones para asegurarse el desconocimiento de quienes tengan derecho a oponerse.
- La violencia a la que hace referencia en los numerales 1 y 3 se ejerce tanto sobre las personas como sobre los bienes.

Debemos precisar que, la tipificación de usurpación como delito, protege la posesión, no el derecho de propiedad o posesión con título; es decir, el ejercicio de tener u ocupar materialmente el inmueble. Recordemos que la posesión es el ejercicio de “hecho”, no de derecho; por lo que el delito solo puede incidir en las manifestaciones de dominio sobre un determinado bien (inmueble).

Es ampliamente aceptado que el delito de usurpación protege el bien jurídico posesión del agraviado, mas no el derecho de propiedad (...), sin embargo, de manera excepcional, bajo determinados supuesto, el juez sentenciador puede prescindir de la restitución de la posesión a favor del agraviado; esta decisión dependerá de caso concreto y de sus propias características -tomando en cuenta la calidad del sujeto activo y el sujeto pasivo; [empero] esta discrecionalidad para el juez sentenciador no implica una actividad probatoria destinada exclusivamente a determinar los derechos que emanan del inmueble objeto de usurpación, sino que la misma debe surgir por las características del caso en concreto. [Sentencia de casación N° 38-2010, del 17 de febrero de 2011, fundamento jurídico séptimo (Sala Penal Permanente)].

Damianovich y Rojas (1978), [citado por Castillo y Loja, 2004], afirman que:

La tutela penal se aplica a la posesión real y efectiva, ejercida con prescindencia del derecho o título; por ello comprende tanto la posesión legítima como la ilegítima, sea ésta de buena o mala fe o viciosa. De esta forma, el análisis deberá centrarse en la relación que exista entre la persona y el bien inmueble, pasando a un

segundo plano el estudio del título en el cual eventualmente pueda reposar la misma. (p. 144)

Entonces podemos colegir, que el sujeto pasivo del delito de usurpación puede ser cualquier poseedor del inmueble, sin importar su condición de legítimo, ilegítimo de mala fe, ilegítimo de buena fe y el precario; ya que el Código Penal al tipificar el delito de usurpación solo se limita a establecer como el bien jurídico protegido la posesión de manera genérica, por lo tanto, comprende a cualquier poseedor sin importar su calidad.

¿Es tutelable por el Derecho Penal el ejercicio de la posesión en bienes de dominio público?

Nuestro Código Penal, al tipificar el delito de usurpación tampoco aclara que el bien jurídico protegido de posesión es solo sobre los bienes inmuebles de dominio privado, por lo que no podría por qué excluirse de la tutela del tipo penal en cuestión a la posesión que un particular ejerce sobre bienes de dominio público²⁹, de aquellas conductas típicas de usurpación comisionado por otro particular, pero no del Estado; toda vez que, siendo el Estado dueño de los bienes demaniales y dueño del poder público, puede desalojar impunemente a los posesionarios ilegítimos o precarios de bienes de dominio público; de manera que pese haber utilizado la violencia no constituiría delito, sino: solo actos de administración. A excepción de los bienes de dominio privado del Estado, puesto que, al regirse por el Derecho Civil, al igual que los particulares, no podría proceder con el desalojo utilizando la violencia si la posesión que el particular ejerce ya tiene cierto tiempo, de manera que

²⁹ A excepción de bienes del Estado de “uso público”, que siendo de dominio público, *per se* no pueden ser objeto de posesión exclusiva y excluyente por un solo particular, por ejemplo: las plazas, las calles las playas, los hospitales; toda vez que son de uso general para todos los ciudadanos del Estado, donde nadie puede alegar posesión y la tutela por usurpación por otro particular.

tendría que hacer valer su derecho por la vía judicial al igual que un particular; pero si reacciona rápidamente para recuperar el dominio del inmueble, puede desalojar al poseedor ilegal haciendo uso de la fuerza pública al igual que un particular lo haría haciendo uso de la fuerza individual para defender su posesión de manera extrajudicial que la ley civil autoriza (art. 920 del C.C.); siempre en cuando los actos de violencia tendientes a recuperar la posesión o dominio del inmueble sean razonables y proporcionales a los bienes jurídicos en juego.

Por otro lado, si los actos de usurpación que el particular comete sobre bienes del Estado en general, donde el agraviado es el mismo Estado, constituye una agravante; tal como se encuentra establecido en el art. 204, inciso 4, del Código Penal. Para que el Estado tenga la calidad de sujeto pasivo por los actos de usurpación cometidos por los particulares, siempre será cuando es el mismo Estado el denunciante, y ello depende de la calidad de los bienes del Estado en general; por ejemplo, la usurpación en los bienes de dominio privado del Estado, o los bienes uso público, por su propia naturaleza, donde, tolerar a los usurpadores implicaría un desmedro del patrimonio Estatal en caso de bienes de “dominio privado” del Estado y; en caso de los bienes de “uso público” se pondría en riesgo los servicios permanentes que requiere todos los ciudadanos del Estado. Pero, sobre algunos de los bienes de dominio público “en estricto”, como por ejemplo las tierras eriazas de la costa, o las tierras de aptitud forestal del Estado en la profundidad de la selva, por su misma naturaleza y ubicación -pese a que son de dominio público- el Estado puede, incluso, adjudicar en propiedad a los usurpadores.

2.2.3. Base teórico específico sobre la variable dependiente: Concesiones forestales.

Capitalismo Neoliberal. Traemos a colación este modelo económico y político adoptado por nuestro país desde la década de los 90s, para explicar por qué la explotación de nuestros recursos forestales está concedida a empresas privadas para su aprovechamiento.

Al hablar del Capitalismo Neoliberal, nos referimos al sistema económico que impera en la mayoría de los países democráticos. Sus características más básicas son la libertad de empresas, inversión del capital extranjero, la privatización de empresas públicas, la explotación de los recursos naturales por los particulares por medio de concesiones con un ingreso irrisorio para el Estado por el pago del derecho de aprovechamiento; y, sobre todo la mínima intervención del Estado para regular las actividades comerciales de todas las empresas privadas nacionales y transnacionales en sus diversas formas; desplazando así al Estado de Bienestar que se intentaba establecer a la luz del modelo económico Keynesiano³⁰.

Existen muchos detractores y defensores de este régimen económico y político adoptado por muchos países del mundo, pero lo que es evidente, si bien es cierto fue una alternativa de solución para el impulso económico de los países que se encontraban sumergidos en una crisis, hoy en día, el supuesto crecimiento económico basado en este modelo económico beneficia más a la sociedad capitalista y muy poco al clase proletariado; como dijera en uno de sus discursos Rafael Correa, expresidente de la República del Ecuador: “Si en una sociedad, cuando todos mejoran, el que menos tiene mejora 10 y el que más tiene mejora 10 mil, esa

³⁰ Modelo económico que surge de la mano de John Maynard Keynes, un economista británico cuya intención era diseñar un modelo que superara el liberalismo clásico y propuso un sistema intervencionista. La primera vez que se presenta esta concepción económica fue en 1936 con la obra *Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero*. En ella, el autor defendía la economía social de mercado, pero con la activa intervención del Estado con políticas fiscales proporcionales a los ingresos de la sociedad capitalista, para luego favorecer a los más necesitados mediante la inversión en infraestructura pública y servicios sociales básicos; propiciando con ello, un sistema de carácter progresivo y la justa redistribución de la riqueza. Al Estado con este régimen económico se le conoce como “Estado de bienestar”, aunque es utópico hablar de ello.

diferencia hace sentir en peor estado relativo – económicamente hablando – al que menos tiene en relación al rico. – y sentenció: - La desigualdad mata sociedades”. Las estadísticas mundiales respaldan a los detractores del régimen económico basado en el Capitalismo Neoliberal: la pobreza en vez de disminuir ha aumentado. El porcentaje del crecimiento económico solo es en números, y se calcula en base a los ingresos *per cápita* de unos cuantos privilegiados que mejoran sus condiciones económicas con este modelo económico.

2.2.3.1. Antes y después de las concesiones forestales. En nuestro país, a partir del año 2002 - con la promulgación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N°27308, del año 2000 y su respectivo Reglamento en el año 2001 - el derecho de explotación de los recursos forestales maderables con fines industriales o comerciales en tierras de dominio público y otros recursos o servicios forestales diferentes a la madera, solo se otorgan a empresas privadas a través de contratos de concesión forestal. Sistema que también fue adoptado por la normativa forestal vigente (Ley Forestal y de Fauna silvestre N°29763 aprobado en el año 2011, la cual entró en vigor recién en el año 2015 con la promulgación de sus 4 Reglamentos).

Anterior a ello, entre las normativas más relevantes en materia forestal, el primero fue el Decreto Ley N°14552, que data 1963, dispositivo legal que crea el Servicio Forestal y de Caza (adscrito al Ministerio de Agricultura) como órgano encargado de la protección, conservación, fomento y aprovechamiento racional y permanente de los bosques y de la vida silvestre. Estableció entre las modalidades de acceso para el aprovechamiento de los recursos forestales por los particulares (tanto para personas naturales y jurídicas) mediante licencias, contratos de exploración y de extracción.

En el año 1975, entra en vigor la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, aprobado mediante Decreto Ley N°21147 durante el gobierno de Juan Velasco Alvarado³¹. Normativa que declaró que los recursos forestales y de fauna silvestre son de dominio del Estado, la misma que estableció un régimen en el que se reservaba los mejores bosques para la actividad empresarial del Estado (que nunca llegó a constituirse) y, el resto estaba destinado para ser otorgados a los particulares para la explotación de madera y productos diferentes a la madera (con fines industriales y/o comerciales) mediante **contratos de extracción forestal** a cargo del Ministerio Agricultura. Los contratos de extracción para la explotación de madera se podían otorgar de superficies de hasta 100 mil hectáreas y por periodos renovables de 10 años para personas jurídicas (CC. NN. y campesinas, empresas de propiedad social, sociedades agrícolas de interés social, cooperativas y empresas privadas, a quienes se le requería - previa a la suscripción del contrato -presentar el estudio de factibilidad técnica-económica y programas de reforestación (el cual era considerado como plan de manejo forestal). También mediante los contratos de extracción se podía otorgar derechos de explotación a pequeños extractores de madera, de áreas no mayores a 1,000 hectáreas y por periodos renovables de no menores de 2, ni mayores de 10 años; quienes debían realizar labores de extracción en forma directa sin intermediarios. Las condiciones para la suscripción del contrato -a diferencia del anterior- no era necesario la presentación del estudio de factibilidad técnica-económica; solo se le exigía cumplir con los programas de reforestación para mantener vigente el derecho otorgado.

³¹ Ley que rigió la actividad forestal durante más de 25 años, hasta la promulgación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N°27308 en el año 2000, la cual entro en vigor en el 2001 con la aprobación de su Reglamento.

Si bien el tipo de contratos de extracción menores de mil hectáreas se implementó con la finalidad de favorecer a pequeños extractores - constituido por personas naturales – a quienes no se le exigía un **plan de manejo forestal** para una explotación sostenible de los recursos forestales; con el pasar de los años iban surgiendo mayores problemas que atentaban los ecosistemas forestales del país: muchos de ellos se habían convertido en una suerte de “subcontratistas” de grandes aserraderos y acopiadores de madera quienes les facilitaban capitales de trabajo y manos de obra, de manera que los más beneficiados resultaban los grandes empresarios madereros a costa de una explotación indiscriminada de los recursos maderables. Sumado a ello, muchos de los contratos se utilizaron para “blanquear” madera extraída de zonas no autorizadas; problemáticas que se tornaba imposibles de controlar por las autoridades forestales, toda vez que los miles de estos tipos de contratos otorgados - a personas naturales - se encontraban dispersos a lo largo de la amazonia peruana. Situación que dio lugar para que las instituciones respectivas del Estado, en colaboración con especialistas en materia forestal, emprendan un proyecto normativo orientado hacia una política de aprovechamiento sustentable de los recursos forestales.

En junio del 1997, se aprueba Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, mediante Ley N°26821³², normativa que sentó algunas condiciones bases que se debía cumplir para explotación de los recursos naturales en general (renovables y no renovables); y establece que por leyes especiales se deben precisar las condiciones, términos, criterios y plazos para el

³² Conforme lo ordenado en el art. 66 de la Constitución Política de 1993, esta Ley estableció las condiciones que se debía cumplir para la otorgación de derechos de aprovechamiento de los recursos naturales del Estado a los particulares.

otorgamiento de los derechos, para cada tipo de recursos naturales. Pero, para al otorgamiento de derechos de aprovechamiento de los recursos forestales por medio de concesiones (estipulado en art.33 de la mencionada norma) no se llegó a implementar la ley especial respectiva, sino, recién en el año 2000 con la promulgación de Ley Forestal y de Fauna Silvestre N°27803 y su Reglamento en el año 2001 (que se detallan *infra*); razón por la que recién a partir del año 2002 se suscribieron los contratos de concesión para la explotación de los recursos forestales.

Con la promulgación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 27308 (del año 2000)³³ y su Reglamento (Decreto Supremo N° 014-2001-AG), se buscó establecer una política de aprovechamiento sostenible de los recursos forestales; para ello, ratificó el dominio del Estado sobre los recursos forestales, tanto en tierras demaniales y privadas declarándolo como “Patrimonio Forestal de la Nación”. En cuanto a la otorgación de derechos de aprovechamiento a los particulares en áreas forestales de dominio público introdujo un sistema de otorgamiento de derechos de explotación forestal (maderables y no maderables) a empresas privadas a través de contratos de **concesión forestal**³⁴. Las concesiones forestales con fines maderables se efectúan en bosques clasificados como BPP. El proceso para la suscripción del contrato -dentro del marco de la mencionada Ley y su Reglamento respectivo- se realizaba por dos modalidades: Por subasta o concursos públicos. Por subasta se podía acceder a unidades de aprovechamiento de 10,000 a 40,000 hectáreas. Por concursos públicos se podía acceder a unidades de aprovechamiento de 5,000 a

³³ Ley que derogó a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre del año 1975 (aprobado mediante Decreto Ley N°21147).

³⁴Sistema que también fue adoptado por la Ley Forestal vigente, Ley Forestal y de Fauna Silvestre N°29763 (en adelante LFFS N°29763).

10,000 unidades de aprovechamiento. En ambos casos, se otorgaron por un periodo de 40 años renovables, bajo una retribución económica a favor del Estado por el derecho de aprovechamiento³⁵. Además, para acceder a estos sistemas se deben contar con documentos de gestión como los Planes de Manejo Forestal, Plan Operativo Anual, entre otras obligaciones que la Ley y su Reglamento exige para cada tipo de concesiones forestales.

Respecto a los recursos forestales fuera del dominio público, la mencionada Ley estableció dos formas de acceso para su aprovechamiento de los recursos forestales para fines industriales o comerciales: Mediante **autorizaciones** otorgaba derechos de extracción en tierras privadas. En tierras de comunidades nativas mediante **permisos** de extracción. La misma que exige – para este último – contar con Plan de Manejo General Forestal (PGMF) para garantizar un aprovechamiento sostenible.

Pese a que la normativa en cuestión incorporó cambios sustanciales en materia forestal, algunos especialistas y parlamentarios del Congreso criticaron dicha Ley y sugirieron en implementar una nueva; puesto que en la actual coyuntura del cambio climático que atravesamos, donde todos los países del mundo están comprometidos en disminuir la contaminación ambiental causante del efecto invernadero, los bosques juegan un papel importante en ese aspecto, ya que son los encargados de la retención del CO₂ y la emisión de oxígeno, de manera que no pueden ser tratados únicamente con fines extractivos. Además, la

³⁵ Para este tipo de concesiones el pago por derecho de aprovechamiento comprende los siguientes: a) Por superficie: Constituye un pago por mantener vigente el derecho sobre el área total concesionada, cuya tarifa básica por hectárea es equivalente a 0.01% de la UIT. El pago del derecho de vigencia es anual y se cancela hasta el término del año calendario, de acuerdo con las condiciones establecidas por la ARFFS. Este pago es condición para movilizar productos al año siguiente y se realiza independientemente de la ejecución del aprovechamiento forestal. b) Por recurso otorgado: Constituye un pago en razón al valor al estado natural de las especies maderables aprovechadas y volumen movilizado. (Art. 114 del Reglamento para Gestión Forestal, Reglamento de la LFFS N°29763).

normativa en cuestión desde la perspectiva social fue poco inclusivo, ya que no reconocía ningún derecho a los agricultores sobre algunas áreas forestales que ya no contaban con las características para mantenerse como Zonas de producción permanente, tampoco no se respetaba las tierras de las CC.NN. sin título alguno asentados dentro del patrimonio forestal y de poblaciones indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial.

Razón por la cual se trabajó en nuevo proyecto normativo (plan año 2009-2011 para la Ley, y plan 2011-2013 para sus Reglamentos respectivos³⁶) encabezado por el MINAGRI con la participación de los diferentes actores de la sociedad (incluido los representantes de las CC. NN).

Producto de ello, el 22 de julio del 2011 se promulgó la actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre N°29763, la cual entró en vigor recién el 30 de setiembre del año 2015 con la aprobación de sus cuatro Reglamentos. Esta nueva Ley, si bien adopta la mayoría de las disposiciones de la normativa anterior, incorpora entre sus principios: gobernanza, consulta previa, inclusión social, interculturalidad, enfoque ecosistémico, mejoramiento continuo y transparencia, tomando en cuenta las lecciones aprendidas con la normativa anterior. En cuanto a la otorgación de derechos de aprovechamiento de recursos forestales tanto en tierras de dominio público y privado se incluye otros tipos de contratos lo que en conjunto denomina “Títulos habilitantes”. Respecto a las concesiones con fines maderables solo ha realizado un pequeño cambio en cuanto a las modalidades de acceso para la suscripción del contrato, eliminando el de subasta, manteniendo el de concurso público y ha incorporado la modalidad de procedimiento abreviado.

³⁶ Empero, recién en el año 2015 se aprobaron dichos reglamentos.

2.2.3.2. Otros títulos habilitantes en áreas forestales de dominio

público. Lo novedoso de la actual normativa forestal es la incorporación de nuevas formas de otorgación de derechos reales a personas naturales en áreas forestales del Estado, entre ellas, los contratos de cesión en uso: 1) **Cesión en uso en bosques residuales o remanentes**, y 2) **Cesión en uso para sistemas agroforestales**³⁷. El primero otorga derechos de aprovechamiento de recursos forestales no maderables y solo de manera complementaria la extracción de madera en bosques del Estado, a favor de pobladores locales asentados sobre las zonas adyacentes a los **bosques residuales o remanentes**³⁸ que cuentan con título o constancia de posesión. El segundo, otorga derechos de usufructo a las personas naturales que se encuentran ocupando áreas forestales del de dominio público -con fines agropecuarios- clasificadas como **zonas de tratamiento especial** para producción agroforestal o silvopastoril³⁹, o **zonas de recuperación**⁴⁰ de acuerdo a la zonificación forestal, donde se puede desarrollar agroforestería en una superficie de solo 20% como máximo del total del área concedido⁴¹. En ambos casos se otorgan por 40 años renovales, bajo pago por vigencia del contrato y por derecho de aprovechamiento de los recursos forestales.

La incorporación del contrato de cesión en uso para sistemas agroforestales en la normativa forestal vigente fue

³⁷ Los sistemas agroforestales son una forma de uso de la tierra que consisten en el manejo asociado de especies forestales y agropecuarias en una misma parcela en el espacio y en el tiempo. Incluyen prácticas de integración, preservación y manejo de especies leñosas perennes en sistemas productivos agrícolas anuales o perennes. (Art. 7 del Reglamento para la gestión de las plantaciones forestales y los sistemas agroforestales, Reglamento de la LFFS N°29763).

³⁸ Bosques que forman parte de subcategorías de zonas de tratamiento especial, establecido en el art 27, inciso “d”, numeral 3, de la LFFS N°29763).

³⁹ Subcategoría de zonas de tratamiento especial, establecida en el art 27, inciso “d”, numeral 2, de la LFFS N°29763.

⁴⁰ Categoría de zonificación forestal establecida en el art. 27, inciso “C”, de la LFFS N° 29763.

⁴¹ Entre otras obligaciones establecidas en el art. 25.2 del Reglamento para Gestión Forestal, Reglamento de la LFFS N°29763).

como una alternativa para formalizar a los posecionarios ubicados en áreas forestales de dominio público clasificadas como **zonas de tratamiento especial** para producción agroforestal o silvopastoril, o **zonas de recuperación** de acuerdo a la zonificación forestal. Para acceder a estos tipos de contratos se exige, como uno de los requisitos, acreditar la posesión continua, pública y pacífica del terreno ocupado antes de la publicación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre vigente, Ley N° 29763, (promulgado el 21 de julio del 2011 y publicada al día siguiente). Lo cual implica, que las personas que ocupen zonas forestales detalladas *supra* a partir del 22 de julio de 2011 simplemente no tienen derecho a nada. Además, esta norma excluye para la otorgación de contratos de cesión en uso para sistemas agroforestales a personas que se encuentran ocupando otras áreas forestales de dominio público que pertenecen a **“zonas de producción permanente”** y **“zonas de protección y conservación ecológica”**⁴².

Los BPP, justamente, son unidades de ordenamiento forestal que se efectúan (como parte de las subcategorías) dentro de las zonas forestales clasificadas como “zonas producción permanente”, para luego ser otorgados en concesión a empresas privadas para la explotación de los recursos forestales preferentemente maderables. Sobre los BPP el Estado no otorga ningún título posesorio, título de propiedad o cualquier otro derecho real con fines agropecuarios⁴³ -(a diferencia que en **zonas de tratamiento**

⁴² Categorías de zonificación forestal según el artículo 27, inciso “a” y “b”, de la LFFS N°29763.

⁴³ El artículo 37 de LFFS N°29763 (vigente), prohíbe el cambio de uso actual de tierras de capacidad de uso mayor forestal y de protección, con o sin cobertura vegetal, para fines agropecuarios. Además, prohíbe el otorgamiento de títulos de propiedad, certificados o constancias de posesión sobre tales áreas, bajo responsabilidad de los funcionarios involucrados.

“Ello no impide el otorgamiento de derechos reales mediante contratos de cesión en uso, en forma excepcional y sujetos a los más rigurosos requisitos de sostenibilidad ambiental, en áreas zonificadas como de tratamiento especial, en el marco de la presente Ley y su reglamento. Esta disposición se

especial para producción agroforestal o silvopastoril o **zonas de recuperación** donde se pueden otorgar derechos de **cesión en uso** para sistemas agroforestales descritas *supra*)- toda vez que los BPP por sus propias características están destinados para la producción básicamente maderable; más aún cuando ya fueron adjudicadas en concesión no pueden otorgarse otros títulos habilitantes u otros derechos reales sobre las mismas áreas⁴⁴.

2.2.3.3. Los BPP y las concesiones forestales en la provincia de Padre Abad. Los BPP en la provincia de padre Abad y en las demás provincias de la región Ucayali, fueron aprobados mediante Resolución Ministerial N° 026-2002-AG, y desde ese entonces se han suscrito varios contratos de concesiones forestales con fines maderables, entre ellas, en la provincia de Padre Abad, las mismas que abarcaban una superficie total de 150,401 hectáreas de BPP; donde operaban seis empresas concesionarias. Actualmente operan solo dos de ellos: Von Humboldt Forest SAC., que tiene otorgado en su favor una superficie de más de 44 mil hectáreas desde el año 2002, y La Empresa Forestal El Aguajal SAC. (EFASAC) una extensión de más de 17 mil hectáreas, también desde el año 2002. El resto dejaron de operar al haberse declarado la caducidad del título habilitante⁴⁵ por el OSINFOR, o algunos siendo extinguidos⁴⁶ se encuentran con plan de cierre⁴⁷ y con

establece sin perjuicio de los derechos y tierras de las comunidades nativas y campesinas" (agrega el último párrafo del mencionado artículo).

Empero, sobre las zonas de producción permanente y zonas de protección y conservación ecológica, no se otorgan ningún derecho real.

⁴⁴ Conforme establece el art. 51, párrafo quinto, de la LFFS N° 29763.

⁴⁵ El art. 44 del Reglamento para la Gestión Forestal (Reglamento de la LFFS N°29763, establece las causales de caducidad de título habilitante.

⁴⁶ El art. 45 del reglamento mencionado en la referencia anterior, establece las causales de extinción de los títulos habilitantes.

⁴⁷ El plan de cierre es el documento elaborado por la ARFFS luego de extinguida la concesión, y que tiene por objeto determinar las obligaciones asumidas por el titular del título habilitante, incluyendo las

procesos administrativos sancionadores en su contra, por infracción a la ley forestal y su reglamento respectivo⁴⁸.

Los posesionarios que se encuentran ocupando áreas forestales clasificadas como BPP que aún no son otorgados en concesión, o algunos que siendo concesionadas fueron revertidos al poder del Estado por haberse extinguido el título habilitante y, los posesionarios que se encuentran ocupando áreas de BPP donde la concesión se mantiene vigente, todos ellos, prácticamente tienen la misma situación jurídica, en el sentido de que no tienen la seguridad jurídica posesoria de las tierras que ocupan, ya que como se mencionó *supra*, por ser estas áreas, tierras de aptitud forestal (concesionadas o no), está prohibido la ocupación con fines agropecuarios y la otorgación de títulos posesorios o de propiedad o cualquier otro derecho real por el Estado; por lo que todos los posesionarios en estas áreas se encuentran en calidad de precarios frente al Estado. Pero, en esta oportunidad, nuestra población de estudio se circunscribe solo respecto a los posesionarios en áreas concesionadas.

Algunas de las diferencias, entre los posesionarios en BPP sin concesionar y los posesionarios de BPP concesionadas, son que estos últimos estarían en calidad de invasores o usurpadores del titular concesionario, aunque normalmente no son denunciados por el ccesionario, puesto que las ocupaciones se efectúan en áreas que el

pecuniarias pendientes, a fin de requerir su pago al deudor y, de ser el caso, ejecutar las garantías o efectuar el cobro coactivo. (art. 76 del Reglamento para Gestión Forestal, Reglamento de la LFFS N°29763).

⁴⁸ El SERFOR fiscaliza y sanciona las infracciones a la legislación forestal y de fauna silvestre vinculadas a los procedimientos administrativos a su cargo, conforme a la presente Ley Forestal (vigente) y su reglamento. El SERFOR actúa en primera instancia administrativa, siendo la segunda y última instancia el Ministerio de Agricultura. (Art. 145 del Reglamento para la Gestión Forestal, Reglamento de la LFFS N°29763).

concesionario ya explotó. Además, si los posesionarios en áreas concesionadas fuesen denunciados por el delito contra los bosques o formaciones boscosas - mediante las conductas típicas de la tala y quema (previsto en el art. 310 del C.P.) constituirían una agravante por haberse efectuado en áreas concesionadas (conforme lo tipificado en el art. 310-C, inciso 1, del C.P.); pero tales aspectos, en esta oportunidad, tampoco forman parte de la presente investigación, toda vez que respecto a los conflictos de relevancia jurídica que se genera en estas áreas se limita solamente a los relaciones intersubjetivas sobre actos de usurpación entre particulares (posesionarios o terceros).

Otro de los aspectos que es menester precisar es: que si bien los posesionarios en áreas concesionadas ocupan áreas que el titular concesionario ya explotó de los recursos maderables, ello no implica que sobre dichas áreas el concesionario ya no tiene ningún derecho, sino que mantiene su dominio en todo el área, explotados y por explotar; toda vez que la naturaleza de este tipo de contratos es que las empresas concesionarias realicen la explotación forestal con un adecuado manejo forestal de manera que vuelvan a aprovechar en el futuro sobre las mismas áreas, razón por la cual estos tipos de concesiones se otorgan por largos periodos de tiempo (40 años renovables). Además, el Estado le impone al concesionario la calidad de “custodios forestales” sobre el área otorgado, de manera que son los responsables directos de los actos que atentan la integridad de las áreas forestales otorgadas a su favor; empero, en algunos casos, el mismo concesionario ha propiciado la posesión de terceros sobre sus concesiones, tomándose la licencia -sin estar autorizados- de otorgar documentos de naturaleza posesoria, como son las “Actas de Colindancia” o similares, principalmente a los posesionarios más antiguos, quienes muchas veces tienen acaparado vastos

extensiones de tierra, y en su ignorancia, creen que el documento expedido por el concesionario le otorga el derecho posesorio sobre las tierras acaparadas; de manera que este hecho agrava más los problemas de linderos y de invasión por terceros (nuevos ingresantes a las áreas concesionadas) quienes al tomar posesión de áreas con bosque primario, donde no hay evidencias de posesión por otros posesionarios, muchas veces llegan a afectar una parte de la posesión de los más antiguos quienes tratan de repeler tal “invasión” creyendo tener derecho sobre las áreas invadidas en mérito del documento expedido por el concesionario forestal, lo que desencadena actos de violencia y amenaza de ambas partes, las mismas que al no poderse solucionar con la intermediación de las autoridades locales, los supuestos agraviados concurren ante el MP para denunciar tales actos como delitos de usurpación, las mismas que según información de los mismos actores involucrados son archivados en esta instancia. Las razones o motivos para que el Fiscal responsable decida disponer tal archivamiento: es materia de trabajo de campo en la presente investigación a través de las técnicas pertinentes.

2.2.3.4. Exclusión y compensación de áreas de concesiones forestales. Pese a que las áreas forestales ya fueron otorgadas en concesión hay una posibilidad de que se pueda excluir áreas de concesiones forestales por superposición de derechos, es decir, cuando sobre la misma área concesionada exista otro derecho reconocido por el Estado. Una vez excluido una determinada área de las concesiones forestales el Estado compensa al titular concesionario con otro de igual dimensión y de similares características.

Según el art.77 del Reglamento para la Gestión Forestal (Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N°29763), procede la exclusión cuando se acredita

la propiedad de comunidades nativas y comunidades campesinas, áreas naturales protegidas por el Estado, áreas de propiedad privada u otras formas de uso otorgadas o reconocidas por el Estado dentro de las áreas concesionadas. El trámite se realiza a solicitud de parte ante la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS), que son los Gobiernos Regionales, quien evalúa la solicitud y, de ser el caso, realiza la verificación de campo correspondiente y emite la resolución respectiva.

Es menester precisar, para que proceda la exclusión de áreas de propiedad privada de las concesiones forestales tiene que acreditarse con el título posesorio o de propiedad respectivo, y para ello, los poseedores en estas áreas tendrían que haber estado ya en posesión desde antes de la creación de BPP (que en la provincia de Padre Abad y demás provincias de la región Ucayali fue el 7 de enero del año 2002, mediante Resolución Ministerial N° 026-2002-AG) y, tendrían que haber tramitado y obtenido el título posesorio o de propiedad respectivo, también antes de la fecha de la creación de BPP; pues de lo contrario no habría la posibilidad de contar con dicho documento; toda vez que, después de la creación de BPP, éstos son inscritos en la SUNARP (en el Registro de Propiedad Inmueble) como bienes de dominio del Estado para garantizar su intangibilidad y reservándolo solo para la producción permanente y preferentemente maderable; las mismas que por ser áreas de aptitud forestal automáticamente forman parte de las tierras de CUM forestal, donde la normativa forestal vigente prohíbe el cambio de uso a fines agropecuarios y la otorgación de constancias de posesión o títulos de propiedad sobre estas áreas; peor aún, cuando estas áreas fueron adjudicados en concesión a empresas privadas para la explotación de madera no se pueden otorgar otros derechos reales sobre las mismas áreas.

Si bien es cierto, que algunos poseсионarios en áreas concesionadas en la provincia de Padre Abad vienen ocupando tierras desde antes de la creaci3n de BPP, pero que no formalizaron sus posesiones, fatalmente, despu3s de la fecha de la creaci3n de BPP est3n imposibilitados de obtener una constancia de posesi3n y consecuentemente el t3tulo de propiedad de sus posesiones, lo que les hubiera brindado seguridad jur3dica posesoria y, eventualmente les hubiera permitido tramitar la exclusi3n de las tierras que poseen del 3rea concesionado. De tal suerte, su situaci3n jur3dica es similar que la gran mayor3a de los poseсионarios en 3reas concesionadas en la provincia de Padre Abad, quienes han ingresado posterior a la creaci3n de los BPP y su ulterior adjudicaci3n en concessi3n a empresas privadas para la explotaci3n de madera.

Si bien no hay una normativa que ampara a los poseсионarios en 3reas concesionadas o BPP en general que no cuentan con ning3n documento; en virtud de la de la Resoluci3n Jefatural N3 082-2003-INRENA que aprob3 la Directiva de Exclusi3n y Compensaci3n de 3reas en las concesiones forestales con fines maderables, y la Resoluci3n Ministerial N3 0586-2004-AG, modificada por Resoluci3n Ministerial N3 0670-2005-AG., en su art3culo 23, facultaba al ex INRENA realizar el redimensionamiento de los BPP, de aquellas 3reas cuyo sustento t3cnico determine que no corresponde a bosques naturales primarios con caracter3sticas bi3ticas y abi3ticas aptas para el aprovechamiento preferentemente de madera y de otros recursos forestales y de fauna silvestre; dentro de ese marco normativo, se ha excluido 3reas y redimensionado los BPP a nivel nacional, mediante resoluciones jefaturales del ex INRENA y resoluciones ministeriales del MINAGRI, entre ellas en la regi3n Ucayali, pese a que algunas 3reas ocupadas por los poseсионarios no contaban con alg3n

documento para acreditar la posesión antes de la creación de BPP, puesto que al efectuarse la exclusión de oficio por el ex INRENA solo bastó que tales áreas habían sido transformadas por la actividad agropecuaria, por lo que no habían sentido seguir manteniéndose como BPP.

Respecto a los BPP concesionadas o no en la provincia de padre Abad la exclusión solo se realizó a solicitud de parte (quienes tenían títulos posesorios para acreditar su posesión), pero que aún no se realizó de oficio por el ex INRENA como otros lugares del país para excluir áreas ocupadas por posecionarios sin título, situación que no pudo dejar de lado las autoridades locales y representantes más inmediatos de los posecionarios sobre estas áreas, quienes se organizaron y conformaron un “Comité de Exclusión de Bosques de Padre Abad”, con la finalidad de realizar los trámites pertinentes ante las autoridades forestales para excluir áreas ocupadas por posecionarios en BPP concesionadas o no; pero siendo la situación similar de miles de posecionarios a nivel de la región de Ucayali, quienes no solo se encuentran ocupando áreas de BPP, sino, también otras áreas forestales de dominio público; por lo que se sumaron a la causa emprendida por la Comité de Exclusión de Bosques de Padre Abad, de manera que extendió su competencia a nivel de la región cambiándose de razón social como “Federación Regional de Productores Agrarios y Medio Ambiente de la Región de Ucayali”– FREPAMARU; institución que vino realizando los trámites respectivos ante el Gobierno Regional de Ucayali que es la ARFFS⁴⁹ para la

⁴⁹ Anteriormente, dentro del marco de la derogada Ley Forestal y de Fauna silvestre N°27308, el redimensionamiento de BPP y la exclusión de áreas de concesiones forestales con fines maderables lo realizaba el INRENA, toda vez que la institucionalidad en materia forestal estaba centralizada en esta entidad, pero con la vigente Ley Forestal y de Fauna Silvestre N°29763, tal institucionalidad es descentralizada: El servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), la misma que reemplazó al INRENA, rige a nivel nacional. La Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS) que son los Gobiernos Regionales; a nivel regional. La Unidad de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre; a nivel local.

exclusión de predios superpuestos por los BPP, áreas de conservación regional, concesiones forestales con fines maderables, concesiones para la conservación y ecoturismo de Ucayali. Para tal efecto, han presentado el expediente respectivo de cada caserío reconocido mediante Resolución Municipal Provincial o Distrital con anterioridad a la creación de BPP y otras áreas forestales mencionadas, con su respectivo padrón de moradores y el plano catastral, para acreditar la posesión no de manera individual de cada poseionario (puesto que no cuentan ningún documento para acreditar su posesión), sino, como caseríos reconocidos por la autoridad municipal antes de la creación de BPP.

Fruto del trabajo de la comitiva del FREPAMARU, se logró que, finalmente, el Gobierno Regional de Ucayali -a través de Consejo Regional- emita la **Ordenanza Regional N° 010-2018-GRU-CR**, con fecha 22 de junio del año 2018, promulgada el 27 de junio de 2018 y publicada en el diario oficial “El Peruano” el 15 de agosto del año 2018; Ordenanza que declara de interés público regional el procedimiento de exclusión y formalización de predios superpuestos por los bosques de producción permanente, áreas de conservación regional, concesiones forestales con fines maderables, concesiones de conservación y concesiones de ecoturismo en la región Ucayali; además dicha ordenanza crea la Comisión Técnica Legal, responsable de desarrollar el régimen temporal del procedimiento de exclusión de predios superpuestos de las áreas mencionadas por el plazo de 5 años, y establece el procedimiento de exclusión según las particularidades de cada área mencionada.

De manera que ahora compete a la ARFFS, entre otras atribuciones, excluir las áreas de concesiones forestales con fines maderables y el Oredimensionamiento de BPP dentro de circunscripción territorial.

Respecto a la exclusión de áreas de BPP concesionadas o no, tal Ordenanza Regional, establece dos formas de otorgación de derechos reales según la antigüedad de la posesión: 1) La otorgación de **constancias de posesión** y ulterior entrega de títulos de propiedad, de manera extraordinaria, para los posesionarios que se encuentran ocupando áreas de BPP antes de fueran declaradas como tal, (es decir, antes de la creación de BPP, mediante resolución ministerial); para tal efecto, ordena a la Dirección Regional de Agricultura implementar en su Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, el procedimiento para emitir la constancia que acredite que el solicitante ha iniciado su ocupación y ha realizado explotación económica en el área, estableciendo un (1) año como plazo mínimo de ocupación cumplido hasta antes de la fecha de creación del BPP, la cual fue el 7 de enero del año 2002, mediante Resolución Ministerial N° 026-2002-AG. Y 2) La otorgación de **contratos de Cesión en Uso en BPP**, para tales efectos ordena a la Dirección de Gestión Forestal y Fauna Silvestre implementar en su Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA, el procedimiento para el otorgamiento de contratos de cesión en uso, de conformidad con la normativa forestal vigente que regula estos tipos de contratos, previa constancia de ocupación y explotación económica, estableciendo un (1) año como plazo mínimo de ocupación cumplido hasta el 25 de noviembre de 2010, de conformidad con las normas vigentes de titulación de predios agrarios. Este otorgamiento de derechos reales de sesión en uso en virtud de la Ordenanza Regional mencionada, es también de manera extraordinaria; recordemos que la normativa forestal vigente (Ley Forestal y de Fauna Silvestre N°29763) en sus arts. 63 y 64 regula la otorgación de contratos de sesión en uso solo en algunas áreas forestales de dominio público clasificadas como

“zonas de tratamiento especial”, o en “zonas de recuperación”; pero no en “zonas de producción permanente” -al cual pertenecen los BPP como parte de sus subcategorías- y tampoco en “zonas de protección y conservación ecológica”.

De manera que la Ordenanza Regional en cuestión, solo brinda una solución parcial respecto a los posecionarios en áreas de BPP, concesionadas o no, hasta antes del 25 de noviembre del año 2010; por ende, la problemática materia de estudio seguirá latente, toda vez que quedan excluidos de tal regulación cientos de posecionarios en áreas concesionadas (solo a nivel de la provincia de Padre Abad) quienes ingresaron a tomar posesión de estas áreas a partir de la fecha mencionada *supra* y, que con el paso del tiempo, más personas van ingresando a ocupar áreas concesionadas explotadas, todos ellos, seguirán sin el amparo legal para formalizar sus posesiones, lo cual genera la inseguridad jurídica posesoria y consecuencias socio-jurídicas como la privación del acceso al órgano jurisdiccional para la resolución de los conflictos que se suscitan en estas áreas, concretamente de actos de usurpación entre particulares.

2.3. MARCO NORMATIVO REFERENTE

CUADRO N°01

VARIABLES	NORMAS LEGALES	ARTÍCULOS INTERPRETADOS
SOBRE LOS BIENES DEL ESTADO	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ	<p>Art.54.- Establece que el territorio del Estado es inalienable e imprescriptible.</p> <p>Art.73.- Establece que los bienes del dominio público son inalienables e imprescriptibles.</p> <p>* Razón por la cual en nuestro país no existen bienes sin dueño, ya que los bienes que no pertenecen a los particulares es del Estado. Incluso los bienes privados abandonados por más de 20 años pasan al poder del Estado, y como tal, es el Estado quien puede otorgar derechos, establecer restricciones o prohibiciones sobre los bienes de dominio público.</p> <p>Art.66.- Establece que los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación y que el Estado es soberano en su aprovechamiento. Además, señala que por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a los particulares. Y aclara que la concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.</p> <p>Este es la disposición constitucional base para incorporar - en la normativa forestal – la regulación sobre el otorgamiento de títulos habilitantes en áreas forestales de dominio público para el aprovechamiento de los recursos forestales por los particulares, entre ellas, las concesiones forestales.</p>
	Ley Forestal y de Fauna Silvestre (LFFS) N° 29763	En el numeral 8, del Art. II, del Título Preliminar; (en concordancia con la norma Constitucional) ratifica que el Estado es quien ejerce el dominio eminencial sobre los recursos del “Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre de la Nación” , así como sobre sus frutos y productos en tanto no hayan sido legalmente obtenidos.

SOBRE EL PATRIMONIO FORESTAL DE LA NACIÓN	LFFS N° 29763	Art.4.- Establece los bienes y servicios que conforman el Patrimonio forestal y de fauna silvestre de la Nación.
SOBRE LA ZONIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO FORESTAL DENTRO DEL PATRIMONIO FORESTAL	LFFS N° 29763	<p>Art. 25.- Establece los objetivos de la zonificación y del ordenamiento forestal nacional, las mismas que definen las alternativas de uso del recurso forestal y de fauna silvestre.</p> <p>Art. 27.- Establece las Categorías de zonificación forestal.</p> <p>Art. 28.- Clasifica los bosques que constituyen las Unidades de ordenamiento forestal, entre ella, los BPP.</p> <p>Art. 29.- Establece las categorías de bosques que integran los bosques de producción permanente (BPP).</p>
	Reglamento para la Gestión Forestal, Reglamento de la LFFS N°29763.	<p>- El título IV regula sobre la zonificación forestal.</p> <p>- El título V regula sobre ordenamiento Forestal.</p>
SOBRE LA INSTITUCIONALIDAD EN MATERIA FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE	Reglamento para la Gestión Forestal, Reglamento de la LFFS N°29763	<p>Art. 10.- Establece las autoridades competentes para la gestión del patrimonio forestal y de fauna silvestre, como instituciones descentralizadas, en el marco de lo dispuesto en los artículos de los capítulos I, II y III, del título II, de la LFFS N°29763:</p> <p>a. El SERFOR (ex INRENA) como la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, de competencia a nivel nacional.</p> <p>b. El Gobierno Regional como la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (ARFFS) dentro de su ámbito territorial.</p> <p>c. El Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) como el organismo encargado de supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, y de los servicios de los ecosistemas forestales y otros ecosistemas de vegetación silvestre, otorgados por el Estado a través de títulos habilitantes, entre ellas, las concesiones forestales con fines maderables.</p>

<p>SOBRE LAS CONCESIONES FORESTALES Y OTROS TÍTULOS HABILITANTES EN TIERRAS DE DOMINIO PÚBLICO</p>	<p>LFFS N° 29763</p>	<p>Art. 51.- Define el concepto de Concesión forestal.</p> <p>Art. 56.- Regula sobre las concesiones forestales con fines maderables.</p> <p>Art. 57.- Trata sobre concesiones para productos forestales diferentes a la madera.</p> <p>Art. 58.- Regula respecto a las concesiones para ecoturismo.</p> <p>Art. 59.- Sobre concesiones para conservación.</p> <p>Art. 53.- Establece, entre otros, que los concesionarios son responsables por la integridad de la concesión otorgada. Además, le atribuye la calidad de “custodios forestales” del área adjudicado. Concordante con el art. 204.1 del Reglamento para la Gestión Forestal (reglamento de la presente Ley).</p> <p>Art. 61.- Establece los deberes y responsabilidades generales aplicables a los titulares de títulos habilitantes en general.</p> <p>Art. 63.- Trata sobre la procedencia del otorgamiento de cesión en uso para sistemas agroforestales.</p> <p>Art. 64.- Establece sobre el otorgamiento de cesión en uso en bosques residuales o remanentes.</p> <p>Art.112.- Concesiones para plantaciones en tierras bajo dominio del Estado.</p>
	<p>Reglamento para la Gestión Forestal, Reglamento de la LFFS N° 29763</p>	<p>Art.80.- establece que las concesiones forestales con fines maderables se otorgan a personas jurídicas mediante los siguientes procedimientos:</p> <p>a. Concurso público. b. Procedimiento abreviado.</p> <p>Art. 81.- Regula las etapas del proceso de concurso público para los contratos de concesiones forestales con fines maderables.</p> <p>Art. 82.- Establece el procedimiento abreviado para concesiones forestales con fines maderables.</p> <p>Art. 69.- Establecen las condiciones mínimas para ser concesionario.</p> <p>Art. 71.- Establece las condiciones para la suscripción del contrato de concesión.</p> <p>Art. 73.- Establece que la vigencia del contrato de las concesiones es de 40 años, periodo que se amplía por cinco años, cada vez que el informe</p>

		<p>de auditoría emitido por el OSINFOR así lo recomienda, mediante la suscripción de una adenda. La renovación por otros 40 años se realiza al final de la vigencia de la concesión, con opinión previa del OSINFOR.</p> <p>Art. 75.- Establece que para el inicio de actividades de las concesiones forestales con fines maderables deben contar Planes de Manejo aprobados:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plan General de Manejo Forestal (PGMF); y, - Plan Operativo (PO). <p>Art. 114.- Establece los pagos por el derecho de aprovechamiento en concesiones forestales con fines maderables.</p> <p>Art. 44.- Estipula las causales de caducidad de los títulos habilitantes.</p> <p>Art. 45.- Establece las causales Extinción de los títulos habilitantes y actos administrativos.</p> <p>Art.77.- Regula sobre exclusión y compensación de áreas de concesiones.</p> <p><i>*Recientemente se emitió la Ordenanza Regional (de Ucayali) N° 010-2018-GRU-CR, con fecha 22 de junio del año 2018, promulgada el 27 de junio de 2018 y publicada en el diario oficial “El Peruano” el 15 de agosto del año 2018; la cual regula de manera extraordinaria la exclusión de predios sin título superpuestos por BPP concesionadas o no, y otras áreas forestales de dominio público a nivel de la región Ucayali.</i></p>
<p>SOBRE LA CLASIFICACIÓN DE TIERRAS POR SU CAPACIDAD DE USO MAYOR</p>	<p>DECRETO SUPREMO N° 017-2009-AG, Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor</p>	<p>Art. 8 (inciso b), define que la Clasificación de las Tierras según su Capacidad de Uso Mayor (CUM) es un sistema eminentemente técnico-interpretativo cuyo único objetivo es asignar a cada unidad de suelo su uso y manejo más apropiado.</p> <p>Los cinco (05) grupos de CUM establecido por el presente reglamento, son:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tierras Aptas para Cultivo en Limpio (Símbolo A) - Tierras Aptas para Cultivos Permanentes (Símbolo C) - Tierras Aptas para Pastos (Símbolo P)

		<ul style="list-style-type: none"> - Tierras Aptas para Producción Forestal (Símbolo F) - Tierras de Protección (Símbolo X) <p>* Las (3) primeras, también pueden destinarse para la protección cuando así convenga, en concordancia a las políticas e interés social del Estado, y privado, sin contravenir los principios del uso sostenible.</p> <p>* La última clasificación (X), están constituidas por tierras que no reúnen las condiciones edáficas, climáticas ni de relieve mínimas requeridas para la producción sostenible de cultivos en limpio, permanentes, pastos o producción forestal; por ejemplo, los escenarios glaciarcitos (nevados), formaciones líticas, tierras con cárcavas, zonas urbanas, zonas mineras, playas de litoral, centros arqueológicos, ruinas, cauces de ríos, etc.</p>
	<p>LFFS N° 29763 (Establece las clases de tierras según su CUM dentro del patrimonio forestal de la nación).</p>	<p>Art. 8.- Establece que las tierras de CUM forestal son aquellas que, por su valor intrínseco, características ecológicas y edáficas, tienen capacidad para la producción permanente y sostenible de bienes y servicios forestales, o potencial para la forestación o reforestación.</p> <p>*A esta clase de tierras pertenecen las zonas de producción permanente y su subclasificación en unidades de ordenamiento forestal, entre ellas, los BPP; las mismas que son objeto de concesiones forestales con fines preferentemente maderables.</p> <p>Art. 9.- Establece que las tierras de CUM para protección son aquellas que, por sus condiciones biológicas de fragilidad ecosistémica y edáfica, no son aptas para el aprovechamiento maderable u otros usos que alteren la cobertura vegetal o remuevan el suelo. Las tierras de protección se destinan a la conservación de las fuentes de agua, nacientes o cabeceras de cuencas, riberas de ríos hasta del tercer orden, y a la protección contra la erosión. En ellas es posible la recolección y aprovechamiento de productos forestales no maderables, el manejo y aprovechamiento de la fauna silvestre, así como</p>

		<p>usos recreativos y actividades educativas o de investigación científica, en la medida en que no se afecte su existencia ni sus funciones protectoras.</p> <p>*Sobre estas áreas se pueden otorgar concesiones para el ecoturismo y concesiones para la conservación.</p>
<p>SOBRE LA PROHIBICIÓN DEL CAMBIO DE USO DE LAS TIERRAS DE CUM FORESTAL Y EL OTORGAMIENTO DE TÍTULOS POSESORIOS O DE PROPIEDAD</p>	<p>LFFS N° 29763</p>	<p>Art. 37. Prohíbe el cambio de uso actual de las tierras que son de CUM forestal y de CUM para protección, con o sin cobertura vegetal, a fines agropecuarios.</p> <p>Prohíbe, además, el otorgamiento de títulos de propiedad, certificados o constancias de posesión en tierras de dominio público con CUM forestal o de protección con o sin cobertura forestal, bajo responsabilidad de los funcionarios involucrados.</p> <p>Solo se pueden otorgar derechos en cesión en uso (para sistemas agroforestales) en ciertas áreas de este tipo de tierras clasificadas como zonas de tratamiento especial para producción agroforestal o silvopastoril, o zonas de recuperación de acuerdo con la zonificación forestal establecido en el Art. 27 de LFFS N°29763. En consecuencia, en BPP, no se puede otorgar ni siquiera este derecho real de cesión en uso (para sistemas agroforestales), puesto que estas áreas pertenecen a una subclasificación de bosques dentro de zonas de producción permanente.</p>
<p>SOBRE LA POSESIÓN</p>	<p>Código Civil</p>	<p>Art. 896.- Define a la <u>posesión</u> como el ejercicio de hecho (sobre el bien) de uno o más poderes inherentes a la propiedad.</p> <p>Art. 911.- Define que la <u>posesión precaria</u> es la que se ejerce sin título alguno o cuando el que tenía ha fenecido.</p> <p>Art. 906.- Establece que la <u>posesión es ilegítima de buena fe</u> es cuando el poseedor cree en su legitimidad, por ignorancia o error de hecho o de derecho sobre el vicio que invalida su título.</p> <p>*Nuestro Código Civil, no conceptualiza la <u>posesión ilegítima de mala fe</u>; empero, en base a lo establecido</p>

		<p>en el Art. 906, podemos deducir que es aquella posesión que se ejerce sobre el bien inmueble a sabiendas de la ilegitimidad del título.</p> <p>*Respecto a la situación jurídica de los poseionarios en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, se ha determinado que son poseionarios precarios, no frente a otros particulares, sino frente al Estado; toda vez que, al ocupar tierras en áreas forestales de dominio público clasificados como BPP, las mismas que fueron otorgados en concesión a empresas privadas para la explotación de madera: no tienen título alguno para justificar o acreditar sus posesiones.</p>
<p>SOBRE DELITOS RELACIONA- DOS A LA OCUPACIÓN DE TIERRAS EN AREAS CONCESIO- NADAS</p>	<p>Código Penal</p>	<p>Art. 310.- Tipifica como <u>delitos contra los bosques o formaciones boscosas</u>, la tala y la quema del bosque, sin contar con permiso, licencia, autorización o concesión por la autoridad competente.</p> <p>Art. 310-C, inciso 1; incluye entre los supuestos que constituyen <u>formas agravadas</u> del delito tipificado en el artículo anterior, si se comete al interior de las concesiones forestales.</p> <p>*Empero, no diferencia el tipo de concesiones forestales, puesto que, no sería igual realizar actos de la tala y quema del bosque en concesiones forestales con fines maderables que en las concesiones forestales para la conservación y el ecoturismo. Puesto que, las concesiones con fines maderables se efectúan BPP, que son áreas que no representan ecosistemas frágiles, donde la explotación económica por el concesionario se da justamente mediante la tala del bosque. Pero que las demás concesiones forestales se efectúan en zonas con ecosistemas frágiles que ameritan de conservación, donde la explotación económica del área concedido al ccesionario no constituye la tala del bosque.</p>

SOBRE LAS INFRACCIONES RELACIONADAS A LA OCUPACIÓN DE TIERRAS EN ÁREAS CONCESIONADAS.	LFFS N° 29763	Art. 146.- El inciso (e), considera a la invasión de tierras dentro del patrimonio forestal, como uno de los criterios a tomar en cuenta en el Reglamento respectivo de la presente Ley, al momento de tipificar las conductas que constituyen Infracciones en materia forestal.
	Reglamento para la Gestión Forestal, Reglamento de la LFFS N° 29763	Art. 207.3.- Tipifica los actos que constituyen infracciones muy graves vinculadas a la gestión del Patrimonio Forestal regulado por el presente Reglamento; del cual, los primeros (4) incisos se pueden atribuir también a los posecionarios o invasores en áreas concesionadas, toda vez que estas áreas al ser de aptitud forestal forman parte del Patrimonio Forestal de la Nación. Tales incisos son: a. Provocar incendios forestales. b. Realizar la quema de los recursos forestales que forman parte del Patrimonio. c. Realizar el cambio de uso de la tierra, sin contar con autorización. d. Realizar el desbosque, sin contar con autorización.
SOBRE EL DELITO DE USURPACIÓN	Código Penal	Art. 202.- Establece una sanción con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años al quien comisiona el delito de usurpación por las siguientes modalidades: 1. El que, para apropiarse de todo o parte de un inmueble, destruye o altera los linderos del mismo. 2. El que, por violencia, amenaza, engaño o abuso de confianza, despoja a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real. 3. El que, con violencia o amenaza, turba la posesión de un inmueble. 4. El que, ilegítimamente, ingresa a un inmueble, mediante actos ocultos, en ausencia del poseedor o con precauciones para asegurarse el desconocimiento de quienes tengan derecho a oponerse. La violencia a la que hace referencia en los numerales 1 y 3 se ejerce tanto sobre las personas como sobre los bienes.

		<p>*Respecto a actos de usurpación entre particulares que se suscitan en áreas forestales concesionadas a provincia de Padre Abad, mayormente, se configuran en la modalidad de despojo parcial (del inciso 2), ya sea entre posecionarios vecinos o por tercero (nuevos ingresantes a áreas forestales concesionadas) contra los posesiones más antiguos, toda vez que, algunos posecionarios más antiguos suelen tener acaparado grandes extensiones de tierra en etas áreas, el cual muchas veces son “invadidas” por otros particulares mediante la violencia y la amenaza.</p>
SOBRE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA	CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ	<p>Art.139 (inciso 3).- Establece como uno de los principios y derechos de la función jurisdiccional: La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional.</p> <p>*La tutela jurisdiccional efectiva, en Estado de Derecho, implica, que toda persona tiene el derecho de acceder al órgano jurisdiccional para la resolución de sus conflictos. Derecho que le son privados a los posecionarios de tierras en áreas forestales concesionadas, para la resolución de sus conflictos por actos de usurpación entre particulares, por ser posecionarios precarios frente al Estado.</p>
	TUO. De la Ley Orgánica del Poder Judicial	<p>Art. 7°.- Establece que en el ejercicio y defensa de sus derechos, toda persona goza de la plena tutela jurisdiccional, con las garantías de un debido proceso.</p> <p>Que dentro de ese marco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Es deber del Estado, facilitar el acceso a la administración de justicia. - Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio y defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso.
	Código Procesal Civil	<p>Art. I.- También establece el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva.</p>

Fuente: Normativas nacionales consignadas en el presente cuadro.

Elaboración: El tesista.

2.4. DEFINICIONES CONCEPTUALES

Concesión forestal. Mediante la concesión forestal, el Estado, a través de los gobiernos regionales, otorga a los particulares, el derecho para el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales (maderables y no maderables) en áreas de dominio público por un tiempo determinado. Si bien las concesiones forestales en general se efectúan en los bosques públicos de producción, también son posibles las concesiones para la conservación o para el ecoturismo, especialmente en bosques de protección.

Contrato de Concesión (forestal). Es el instrumento jurídico de carácter contractual, que celebran el concedente (el Estado) y el concesionario (empresas privadas), para el aprovechamiento o manejo sostenible de los recursos naturales de flora silvestre en áreas de dominio público por un determinado tiempo.

Concesión forestal con fines maderables. Son concesiones otorgadas por el Estado, a empresas privadas, para la explotación de los recursos netamente maderables en tierras de dominio público con bosques clasificados como BPP. Este tipo de concesiones se efectúa en unidades de aprovechamiento de 5 000 a 10 000 hectáreas y de 10 000 a 40 000 hectáreas, y por el plazo de cuarenta años renovables.

Bosque de producción permanente (BPP). Son áreas con bosque natural primario o secundario, que por sus características bióticas y abióticas son aptas para la producción permanente y sostenible de madera y otros servicios forestales; las mismas que pueden ser objeto de concesión a los particulares (empresas privadas) para su aprovechamiento preferentemente maderables. Los BPP se establecen por resolución ministerial del Ministerio del Ambiente, a propuesta del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). Los BPP como unidades de ordenamiento forestal forman parte de las zonas de producción permanente, que se establecen dentro del Patrimonio Forestal de la Nación, conforme a la zonificación forestal establecido el art. 27 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N°29763.

Posesión. Es un poder de hecho o el ejercicio fáctico que se ejerce sobre un bien, con título o sin título; con ánimo de apropiarse, o sin ella.

Posesión precaria. Es una figura jurídica de ocupar y/o poseer un bien sin título justo y legal, que acredite y garantice la posesión del poseedor.

Posesión ilegítima. Es la posesión que se ejerce sobre un bien en base a un título ilegítimo o nulo. En sentido amplio se puede decir de aquellas posesiones que se ejerce en contravención a las disposiciones legales vigentes.

Seguridad jurídica. Es la garantía dada al individuo por el Estado, de que su persona, sus bienes y derechos no serán objeto de ataques violentos, y si éstos llegaran a producirse el Estado les garantiza protección y reparación. Según la naturaleza del tema que abordamos en la presente investigación, la seguridad jurídica se concretaría con el reconocimiento de los derechos posesorios a quienes ocupan tierras en áreas forestales concesionadas; concretamente con la otorgación de títulos posesorios. Las cuales les permitirían acreditar su derecho posesorio ante las instancias pertinentes en caso sean vulnerados tales derechos.

Tutela jurisdiccional efectiva. Uno de los principios fundamentales de la función del órgano jurisdiccional consagradas en nuestra Constitución Política y demás normativas conexas; lo cual implica, que toda persona, no solo tiene derecho al acceso a la justicia, sino además de obtener una real y efectiva intervención del Estado en la resolución de un conflicto de intereses, una incertidumbre jurídica, o en la vulneración de un bien jurídico protegido; haciendo uso de sus potestades coactivas, coercitivas o punitivas.

2.5. HIPÓTESIS GENERAL

Los efectos y consecuencias jurídicas que emergen de la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, región Ucayali - referida básicamente a la ocupación de tierras con fines agropecuarios en áreas explotadas de los recursos maderables por la empresa concesionaria - lo cual involucra relaciones intersubjetivas y derechos materiales; ocasionan la inseguridad jurídica posesoria y el

desamparo de la tutela jurisdiccional para la resolución de sus conflictos sobre actos de usurpación entre particulares, en la provincia de Padre Abad, región Ucayali, 2016-2017.

2.5.1. Sub Hipótesis

Sub hipótesis A. Los poseсионarios de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, región Ucayali; no tienen y no pueden obtener un título que garantice su posesión; por ende, su situación jurídica está enmarcada en un tipo de posesión ilegítima o precaria frente al Estado.

Sub hipótesis B. El Estado no reconoce ni ampara la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, región Ucayali; por lo tanto, no cuentan con la seguridad jurídica posesoria.

Sub hipótesis C. El número de poseсионarios de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad – región Ucayali, es relativamente alto.

Sub hipótesis D. Los conflictos de relevancia jurídica que surgen de la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad – región Ucayali; son los problemas de linderos y usurpación de terrenos entre poseсионarios y terceros.

Sub hipótesis E. Los poseсионarios de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad – región Ucayali, no tienen derecho a la tutela jurisdiccional efectiva consagrado en la Constitución Política del Estado y demás normas conexas, para la resolución de los conflictos por usurpación entre particulares, porque no pueden acceder al órgano jurisdiccional.

2.6. VARIABLES

2.6.1. Variable independiente

La posesión de tierras.

2.6.2. Variable dependiente

Concesiones forestales.

2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES

CUADRO N°02

Variables	Dimensiones	Indicadores	Fuentes de verificación de información
Independiente V(x) Posesión de tierras	<ul style="list-style-type: none"> • Efectos socio-jurídicos • Consecuencias socio-jurídicos 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Posesión. ✓ Posesión precaria. ✓ Posesión ilegítima. ✓ Posesión de bienes de dominio Público. ✓ Posesión de tierras con fines agrícolas y pecuarios de aptitud forestal. ✓ Prohibición de cambio de uso de tierras de aptitud forestal con fines agropecuarios. ✓ Prohibición de otorgamiento de títulos posesorios o de propiedad en áreas de aptitud forestal. ✓ Prohibición de otorgación de otros derechos reales en áreas concesionadas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Constitución Política. - Código Civil y Procesal. - Código Penal. - LOPJ. - LFFS N°29763 y sus Reglamentos. - Reglamento de Clasificación de Tierras según su CUM. - Posesionarios de tierras en áreas concesionadas.
Dependiente V(y) Concesiones forestales	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Política económica: Capitalismo Neoliberal. ❖ Concesiones forestales con fines maderables 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Inseguridad jurídica posesoria. ✓ Conflictos intersubjetivos entre los posesionarios. ✓ Delitos contra el Patrimonio en áreas concesionadas (usurpación entre particulares). ✓ Privación de la tutela jurisdiccional. ✓ Delitos ambientales. ✓ Vulneración de la Ley N°29763 y sus Reglamentos. ❖ El capitalismo neoliberal. ❖ Concesiones forestales ❖ Concesiones forestales con fines maderables. ❖ Empresas privadas titulares de la concesión forestal. ❖ Bosques de producción permanente (BPP). ❖ Patrimonio forestal de la nación. ❖ Aprovechamiento sostenible de los recursos maderables. ❖ Superposición de predios con BPP y concesiones forestales. ❖ Exclusión y compensación de áreas de concesiones. 	<ul style="list-style-type: none"> - Carpetas fiscales sobre delitos de usurpación entre particulares en áreas concesionadas. - SERFOR. - SUNARP. - MP. - Agencia Agraria Padre Abad. - Municipalidad Provincial de Padre Abad. - Empresas Concesionarias. - FREPAMARU.

Fuente: Contenido de la presente tesis / Elaboración: El testista

Capítulo III

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

En la presente tesis utilizamos una metodología plural, entre ellos: La INVESTIGACIÓN DE CAMPO; ya que no solo se trata de describir el fenómeno social materia de estudio tal como sucede en la realidad, sino que a partir de la elaboración de hipótesis se busca comprobar en la realidad social para alcanzar el nivel explicativo; estableciendo causas, efectos y consecuencias. El INDUCTIVO - DEDUCTIVO; para la construcción de nuestra hipótesis a partir de conocimientos teóricos generales (deductivo) y del conocimiento empírico de casos particulares para generalizar a toda la población de estudio (inductivo); la cual también se aplica para las conclusiones de estudio, ya que a partir de resultados particulares de la muestra se generaliza para toda la población de estudio. LÓGICO - INDUCTIVO, se utilizó para presentar los resultados obtenidos de la realidad social a través de la técnica de la encuesta; a partir de datos cualitativos - particulares – similares, se generalizan en unidades medibles (cuantitativos). EL ANÁLISIS - SÍNTESIS; esta metodología se hace presente especialmente en el análisis documental y el desarrollo de las variables, para desglosarlos en unidades mínimas (tópicos) para un mejor análisis y, luego hacer una interpretación general nuevamente uniendo en solo conjunto; además, este método es imprescindible para llegar a las conclusiones generales a partir de los resultados particulares obtenidos en el desarrollo de la investigación. Asimismo, por la propia naturaleza de estudio que corresponde a lo socio-jurídico, se utilizó la HERMENÉUTICA JURÍDICA y/o EXEGÉTICO JURÍDICO, para el análisis en interpretación de términos jurídicos y los diferentes dispositivos legales que conforman el marco normativo de la presente tesis.

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente trabajo de investigación, por su naturaleza, corresponde al tipo de estudio **sustantivo** - descriptivo - explicativo, por cuanto describe y explica los efectos de la posesión de tierras en áreas concesionadas y las consecuencias que ocasionan esta problemática, desde una perspectiva socio-jurídica.

3.1.1. Enfoque. Metodológicamente, la problemática de estudio tiene un enfoque **holístico o mixto** (enfoque cualitativo y cuantitativo), puesto que no solamente describe y explica los efectos y consecuencias que generan la posesión de tierras en áreas concesionadas cualitativamente, sino que además, se presenta información cuantitativa a partir de datos recopilados del trabajo de campo.

3.1.2. Alcance o nivel. El presente trabajo de investigación se enmarca en el nivel de estudio **descriptivo – explicativo**; si bien es cierto, no se explica de manera amplia las causas de la posesión de tierras en áreas concesionadas, porque son obvias y corresponden al ámbito de estudio netamente sociológico; pero sí se explican los efectos y consecuencias que generan esta problemática desde una perspectiva socio-jurídica.

3.1.3. Diseño. El presente estudio tiene un diseño **No experimental** - descriptivo - simple, porque la propia naturaleza de estudio no permitió la manipulación de variables, sino solamente se observó y recabó información de hechos tal como suceden en la realidad social, para luego describir y explicar los efectos y consecuencias que surgen del fenómeno social estudiado.

Esquema del diseño de investigación

La presente investigación tiene el diseño No experimental en su variante Descriptivo Simple:



Dónde:

M = Muestra

O = Observación

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

Población. La población de estudio estuvo constituida por el conjunto de familias poseionarios en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad – región Ucayali; y las carpetas fiscales archivadas en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Padre Abad, de casos relacionados al delito de usurpación (entre particulares) en áreas concesionadas en la provincia de Padre Abad.

POBLACIÓN DE ESTUDIO

CUADRO N°03

UNIDADES DE ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN	CANTIDAD	TOTAL
Familias poseionarias en áreas forestales concesionadas de la provincia de Padre Abad.	980	1000 unidades de estudio
Carpetas fiscales archivadas en sede de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Padre Abad.	20	

Fuente: Padrón de moradores poseionarios en áreas concesionadas de algunos caseríos de la provincia de Padre Abad (en base al cual se calculó un número aproximado total de la población de estudio) / Carpetas fiscales archivados en sede de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Padre Abad.

Elaboración: El tesista.

Muestra. La muestra de estudio es de tipo **No Probabilístico**, que ha sido elegido y seleccionado a criterio del propio investigador, por ser grupos o unidades más representativas de la población total de estudio. Los cuales están conformados por los jefes de hogar de las familias poseionarias en áreas forestales concesionadas del caserío El Blanco y el caserío Nuevo Esteros, jurisdicción del distrito y provincia de Padre Abad – región Ucayali; y las carpetas fiscales archivados en la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Padre Abad, de casos relacionadas al delito de usurpación (entre particulares) en áreas concesionadas en la provincia de Padre Abad.

MUESTRA DE ESTUDIO

CUADRO N°04

UNIDADES DE ANÁLISIS DE LA MUESTRA	CANTIDAD	TOTAL
Jefes de hogar de familias posesionarias en áreas forestales concesionadas de los caseríos “El Blanco” y “Nuevo Esteros”, jurisdicción del distrito y provincia de Padre Abad – Región Ucayali.	70	76 unidades de estudio
Carpetas fiscales con archivo definitivo en sede de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Padre Abad, sobre delitos de usurpación (entre particulares) en áreas forestales concesionadas.	6	

Fuente: Padrón de moradores del caserío El Blanco y Nuevo Esteros / Carpetas fiscales archivados en sede de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Padre Abad.

Elaboración: El tesista.

3.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

3.3.1. Para la recolección de datos. Para el acopio de información secundaria de fuentes bibliográficas y de instituciones públicas y privadas, se utilizó la técnica de fichaje y, como instrumentos las fichas textuales (bibliográficas) y de resumen, las mismas que permitieron desarrollar la introducción, el marco teórico y el marco normativo respectivo; simultáneamente permitieron el logro de algunos de los objetivos específicos que no dependían de las técnicas específicas de la encuesta y análisis documental.

Para recolectar información primaria de estudio, las cuales nos permitieron el logro de nuestro objetivo general y algunos objetivos específicos, hemos utilizado las siguientes técnicas para la recolección de datos:

La encuesta. Se aplicó una encuesta asistida a los moradores posesionarios de los caseríos El Blanco y Nuevo Esteros, jurisdicción del distrito y provincia de Padre Abad; quienes se encuentran ocupando terrenos en áreas que fueron concesionadas a las empresas Von Humboldt Forest SAC. y EFASAC., respectivamente; para tal efecto, fue necesario coordinar con las

autoridades que encabezan la Junta Directiva de los mencionados caseríos, básicamente para conocer la fecha de sus reuniones de Asamblea General en su local comunal, para dar a conocer el objetivo de nuestro trabajo y pedir la autorización respectiva mediante documento. Esto con la finalidad de aprovechar la reunión de moradores para efectuar la encuesta; de otro modo no hubiera sido factible, toda vez que, la misma geografía de la zona, la lejanía entre las viviendas de los moradores, el desconocimiento de los caminos que conducen a diferentes predios y, entre otros factores, requerirían demasiado tiempo y mayor número de recursos humanos para realizar el trabajo de encuesta.

Los ítems que contiene el instrumento de encuesta fueron formulados con la finalidad de recabar información concerniente a dos dimensiones de nuestra variable dependiente: 1) Los efectos socio-jurídicos, y 2) consecuencias socio-jurídicos.

Habiendo planteado como hipótesis para nuestra primera dimensión: que los efectos socio-jurídicos que generan la posesión de tierras en áreas concesionadas es la **inseguridad jurídica posesoria**; fue pertinente formular preguntas respecto si tales posesionarios cuentan con algún documento para acreditar o justificar su derecho posesorio de las áreas que ocupan, qué tipo de documentos son las que cuentan, de donde la obtuvieron, etc., luego para hacer una apreciación del valor legal de dichos documentos y poder determinar si tales documentos le brinda o no seguridad jurídica posesoria a los encuestados y, consecuentemente para confirmar o rechazar nuestra hipótesis respecto a esta dimensión de nuestra variable dependiente. Respecto a la segunda dimensión de nuestro objetivo principal, habiendo planteado como hipótesis, que los posesionarios de tierras en áreas concesionada están privados de la tutela jurisdiccional para la resolución de los conflictos por usurpación entre posesionarios o terceros: los ítems de la encuesta estaban relacionados sobre la denuncia de tales supuestos delitos ante el Ministerio Público, y si lograron pasar el “filtro” en esta

instancia para acceder al órgano jurisdiccional respectivo para la resolución de los conflictos de esta naturaleza.

El análisis documental. Se utilizó esta técnica para el análisis de carpetas fiscales archivadas en sede de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Padre Abad, específicamente sobre delitos de usurpación entre particulares en áreas concesionadas de la provincia de Padre Abad; para tal efecto utilizamos fichas de observación como instrumento, para registrar información relevante sobre el tema; para luego determinar si los denunciantes, en su condición de poseionario en áreas concesionadas que no cuentan con un documento válido (título posesorio emitido por una autoridad competente), para acreditar su posesión, hayan logrado pasar el filtro sobre los requisitos y presupuestos indispensables de la fase de la investigación preliminar por Fiscal responsable del caso, para acceder al órgano jurisdiccional para la resolución del mencionado conflicto; es decir, si han logrado obtener la tutela jurisdiccional efectiva que nuestra Constitución y demás normas conexas garantiza.

3.3.2. Presentación de datos. Para la presentación de datos cuantitativos se utilizó los cuadros estadísticos y gráficos en columna y circulares para ilustrar los datos obtenidos de la encuesta, con sus respectivos análisis e interpretación.

Para la presentación de datos cualitativos se utilizó los cuadros categoriales con su respectivo análisis e interpretación.

3.3.3. Para el análisis e interpretación de los datos. Para el análisis e interpretación de los datos obtenidos se utilizó la hermenéutica jurídica y el deductivo inferencial, para cada una de las variables, ítems e indicadores de la información obtenida en la ejecución de la presente tesis.

Capítulo IV

4. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados del trabajo de campo en base a la información recabada con las técnicas específicas e instrumentos de recolección. Respecto a la información obtenida de la encuesta se presentan mediante cuadros estadísticos y gráficos en columna y circulares por ser datos cuantitativos. Y respecto a la información obtenida del análisis documental de las carpetas fiscales, se presentan mediante cuadros categoriales por ser datos netamente cualitativos. Ambos, con sus respectivos análisis e interpretación deductivo - inferencial.

4.1. PROCESAMIENTO DE DATOS

CUADRO N° 05

4.1.1. Cuadro de ítems de la encuesta (aplicada a los posecionarios de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad).

Ítems de la encuesta	Moradores posecionarios en áreas forestales concesionadas con fines maderables de los caseríos El Blanco y Nuevo Esteros – Padre Abad. 70
2. ¿Usted cuenta con algún documento expedido por una autoridad competente con la cual pueda acreditar el terreno que ocupa?	(Ítems para determinar los efectos socio-jurídicos que genera la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas)
3. De ser afirmativo su respuesta en la pregunta anterior, mencione el tipo de documento con la que usted cuenta y la autoridad o institución de obtuvo dicho documento.	
4. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que usted tuvo con otros posecionarios o terceros relacionados a la posesión de (sus) tierras en áreas concesionadas?	

5. En caso de que usted tuvo conflictos entre poseionarios o con terceros por problemas de usurpación de su terreno, y al haber acudido al Ministerio Público para denunciar dicho delito (usurpación); ¿su denuncia fue admitido por el Fiscal de turno en su condición de poseionario en áreas concesionadas?	(Ítems para determinar las consecuencias socio-jurídicas genera la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas)
6. Una vez admitido su denuncia, y luego de haber realizado la investigación correspondiente, el Fiscal del caso; ¿ha formalizado denuncia ante el órgano jurisdiccional correspondiente?	
7. De no haber formalizado la denuncia respectiva el Fiscal responsable del caso, ante el Juez penal correspondiente; ¿cuál ha sido su argumento para archivar la denuncia?	
8. ¿Usted cree que no pudo acceder al órgano jurisdiccional para obtener “justicia” por el delito denunciado ante el Ministerio Público, porque no cuenta con la seguridad jurídica posesoria del terreno que posee?	

Fuente: Anexo 02 (cuestionario de encuesta).

Elaboración: El tesista.

4.1.1.1. Resultados de la encuesta (aplicada a los moradores de los caseríos El Blanco y Nuevo Esteros, del distrito y provincia de Padre Abad, poseionarios de tierras en áreas forestales concesionadas con fines maderables a la Empresa Von Humboldt Forest SAC y a la Empresa Forestal el Aguja SAC., respectivamente) en cuadros y gráficos.

CUADRO N° 06

Muestra la cantidad en números naturales y en porcentaje de cuántos cuentan y los que no cuentan con algún documento para acreditar su derecho posesorio en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad.

1. ¿Usted cuenta con algún documento para acreditar la posesión de su terreno?	Respuesta de los encuestados	
	Frecuencia	%
No	62	88.57
SI	8	11.43
Total	70	100

Fuente: Anexo 02 (cuestionario de encuesta).

Elaboración: El tesista.

Gráficamente se representa de la siguiente forma:

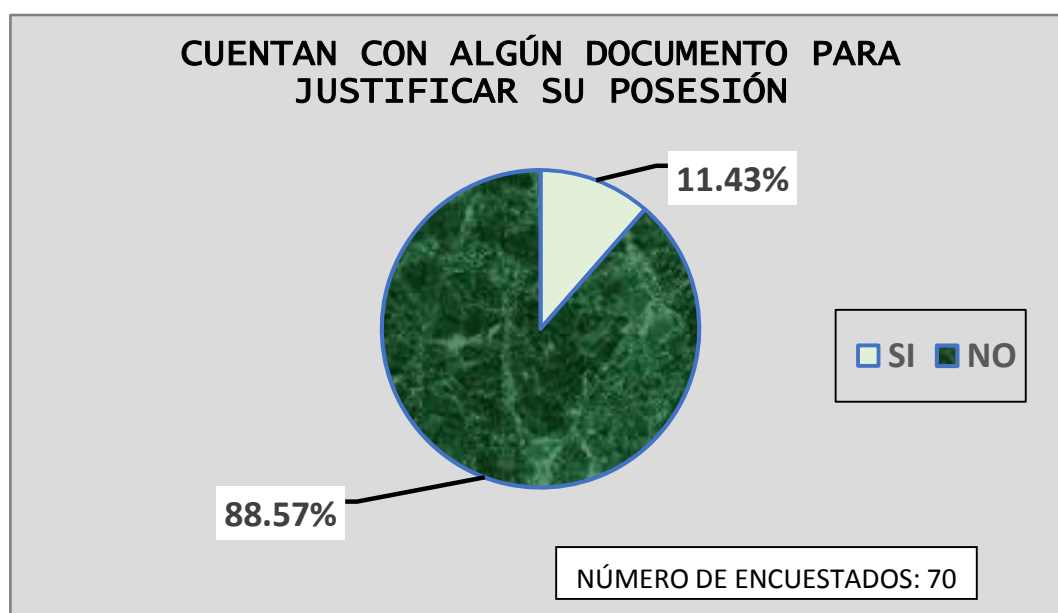


Gráfico N°01. Muestra el porcentaje de cuántos cuentan y no cuentan con algún documento para acreditar su posesión.

Análisis e interpretación. En el cuadro N° 06, observamos que solo 8 posesionarios, lo cual representa más del 11% del total de 70 encuestados, respondieron que sí cuentan con algún documento para acreditar la posesión de sus terrenos en áreas forestales concesionadas. El restante, que son 62 encuestados, lo cual representa casi el 89% del total de 70 encuestados, no cuentan con ningún documento para justificar su posesión en dichas áreas. Pero,

veamos los tipos de documentos con las que cuentan, y si tienen la calidad de títulos posesorios o de propiedad en el siguiente cuadro.

CUADRO N° 07

Muestra los tipos de documentos con las cuales cuentan los poseсионarios de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, y de donde la obtuvieron.

2. De ser afirmativo su respuesta en la pregunta anterior, mencione el tipo de documento con la que usted cuenta y la autoridad o institución de donde la obtuvo.	Respuesta de los encuestados	
	Frecuencia	%
A. Constancia de posesión expedido por el presidente del caserío.	2	2.86
B. Constancia de morador expedido por el presidente del caserío.	2	2.86
C. Acta de colindancia expedido por el Gerente de la empresa concesionaria.	4	5.71
No responden la pregunta por no contar con documento alguno.	62	88.57
Total	70	100

Fuente: Anexo 02 (cuestionario de encuesta).

Elaboración: El tesista.

Gráficamente se representa de la siguiente forma:

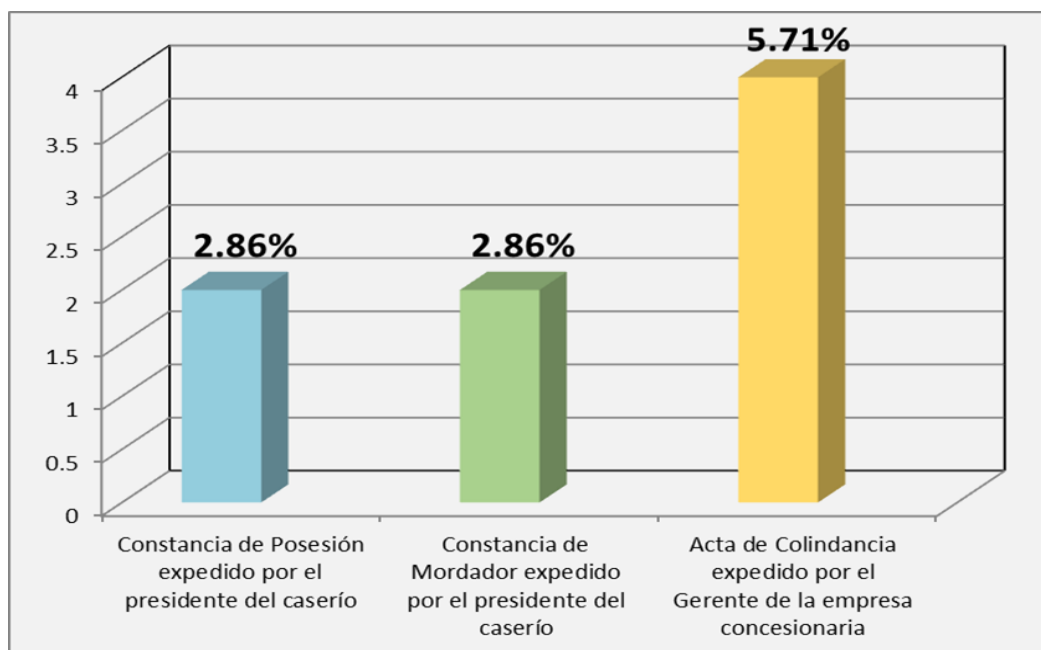


Gráfico N°02. Muestra en porcentaje los tipos de documento con las que cuentan y de dónde la obtuvieron.

Análisis e interpretación. Como podemos apreciar en el cuadro N° 07, ninguno de los documentos con las que cuentan los moradores encuestados tienen la calidad de título posesorio, por haber sido expedidas por autoridades o instituciones no competentes, toda vez que, los únicos autorizados para la expedición de títulos posesorios en zonas rurales son las Agencias Agrarias a nivel provincial y las Direcciones Regionales de Agricultura a nivel de departamento. Pero, que sobre las concesiones forestales están impedidos de otorgar algún título posesorio, puesto que los BPP donde se efectúan las concesiones con fines maderables, se inscriben en la SUNARP como bienes inmuebles de dominio del Estado, para asegurar su intangibilidad.

Además, por ser las áreas forestales concesionadas, áreas de aptitud forestal clasificadas como BPP, automáticamente forman parte de las tierras de CUM forestal, donde está prohibido el cambio de uso a fines agropecuarios y el otorgamiento de títulos posesorios o de propiedad, bajo responsabilidad de los funcionarios, según lo establecido en art. 37 de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763.

Aunado a ello, el art. 51 (párrafo quinto), de la Ley Forestal Fauna Silvestre N° 29763, establece que no se pueden otorgar otros derechos reales sobre las mismas áreas donde ya existe un título habilitante, en este caso, tal título habilitante son las concesiones forestales con fines maderables otorgadas a empresas privadas.

Razón por la cual, si bien algunos posesionarios en dichas áreas cuentan con los documentos descritos en el presente cuadro, éstos carecen de valor o son nulos de plano; no solo por haber sido expedidas por autoridades no competentes, sino, por haberse expedido posterior a la creación de BPP, sobre las cuales se establecieron las concesiones forestales con fines maderables, donde las normativas en materia forestal prohíben taxativamente la otorgación de cualquier documento de carácter posesorio sobre dichas áreas.

Además, podemos advertir que ningunos tienen un título de propiedad en dichas áreas, pese a que algunos, inclusive, son posesionarios desde antes de la creación de BPP y su posterior adjudicación en concesión a empresas privadas para la explotación de madera, ya que antes de la creación de BPP

había la posibilidad de obtener títulos posesorios o de propiedad en estas áreas; pero lo último que se preocuparon fue formalizar sus posesiones, por lo que actualmente están imposibilitados de obtener dichos documentos.

Por consiguiente, respecto a la dimensión sobre los efectos socio-jurídicos que genera la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, queda determinado que es la **inseguridad jurídica posesoria**, no solo porque no cuentan con algún documento “válido” para acreditar sus posesiones, sino además porque el Estado no garantiza la posesión de tierras en estas áreas, toda vez que, lo prohíbe a través de la ley forestal vigente mencionada *supra*.

CUADRO N° 08

Muestra los problemas más frecuentes entre posesionario o terceros relacionados a la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad.

3. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que usted tuvo con otros posecionarios o terceros relacionados a la posesión de (sus) tierras en áreas concesionadas?	Respuesta de los encuestados	
	Frecuencia	%
A. Problemas de linderos con los posecionarios vecinos.	44	62.86
B. Invasión por parte de los nuevos ingresantes a áreas concesionadas.	11	15.71
C. Usurpación.	6	8.57
D. No tuvo problemas.	9	12.86
Total	70	100

Fuente: Anexo 02 (cuestionario de encuesta).

Elaboración: El tesista.

Gráficamente se representa de la siguiente forma:

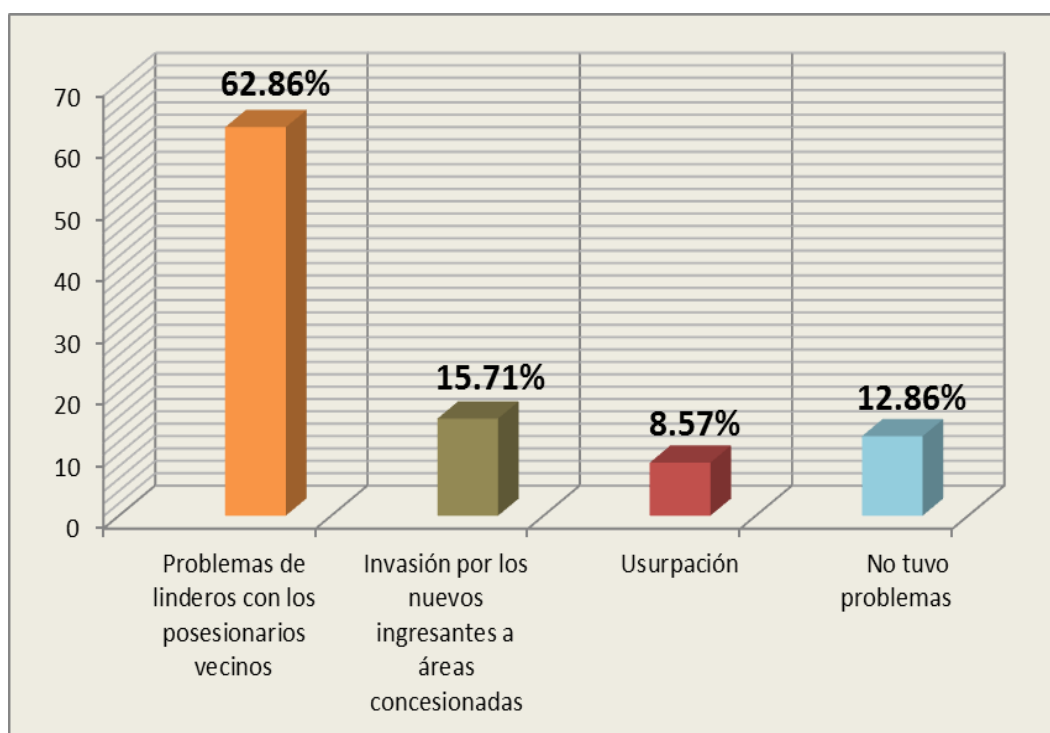


Gráfico N°03. Muestra en porcentaje los problemas más frecuentes entre poseedor o terceros (relacionados a la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad).

Análisis e interpretación. Como podemos apreciar en el cuadro N° 08; entre los conflictos intersubjetivos relacionados a la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas, el problema de linderos entre poseedores vecinos es el más recurrente; lo cual representa más del **65%** del total de los conflictos que se producen en estas áreas. Este alto índice de los conflictos de esta naturaleza, justamente, se origina por el hecho de que ninguno de los poseedores cuenta con un documento expedido por una autoridad competente. Algunos, solo cuentan con documentos posesorios expedidos por autoridades locales, los cuales carecen de georreferenciación y de los límites precisos del predio a través del sistema de coordenadas, lo que permitiera conocer a cada poseedor casi con exactitud los linderos de las tierras que poseen y esto reduciría las discrepancias sobre los linderos de cada predio vecino.

El segundo problema más frecuente que se suscitan en áreas forestales concesionadas, relacionados a la posesión, es la invasión de las tierras de los poseedores más antiguos por parte de los nuevos ingresantes a áreas

concesionadas, el cual representa más del **15%** del total de los conflictos de naturaleza posesoria que se generan en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad. Esta incidencia, se genera también, por el hecho que los posecionarios antiguos no cuentan con un documento válido para acreditar su derecho posesorio, puesto que no es posible ejercer posesión de manera fáctico sobre todo el área; ya que algunos, muchas veces, tienen acaparado grandes extensiones de tierra con bosque natural primario donde no hay evidencias del ejercicio de la posesión, por lo que parte de estas áreas son susceptibles de invasión por parte de los nuevos ingresantes a las áreas forestales concesionadas.

El tercer conflicto que se genera en las áreas concesionadas en la provincia de Padre Abad, relacionados a la posesión de tierras, es el de usurpación; el cual representa más del **8%** del total de los conflictos de naturaleza posesoria que se suscitan en estas áreas. Los actos de usurpación que se generan en estas áreas no son más que los conflictos descritos *supra*, pero por medio de la violencia y la amenaza.

Por último, solo más del **12%** de los encuestados, afirmaron que no tuvieron problemas relacionados a la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad.

CUADRO N° 09

Muestra la cantidad de denuncias ante el Ministerio Público sobre actos de usurpación entre poseionarios o terceros en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, y si tales denuncias fueron admitidas por el Fiscal de turno.

4. En caso de que usted tuvo conflictos entre poseionarios o con terceros por problemas de usurpación de su terreno, y al haber acudido al Ministerio Público para denunciar dicho delito (usurpación); ¿su denuncia fue admitido por el Fiscal de turno en su condición de poseionario en áreas forestales concesionadas?	Respuesta de los encuestados	
	Frecuencia	%
SI	6	8.57
NO	0	0
No responden la pregunta porque no tuvieron problemas de usurpación o fueron solucionadas por intermedio las autoridades locales.	64	91.43
Total	70	100

Fuente: Anexo 02 (cuestionario de encuesta).

Elaboración: El tesista.

Gráficamente se representa de la siguiente forma:

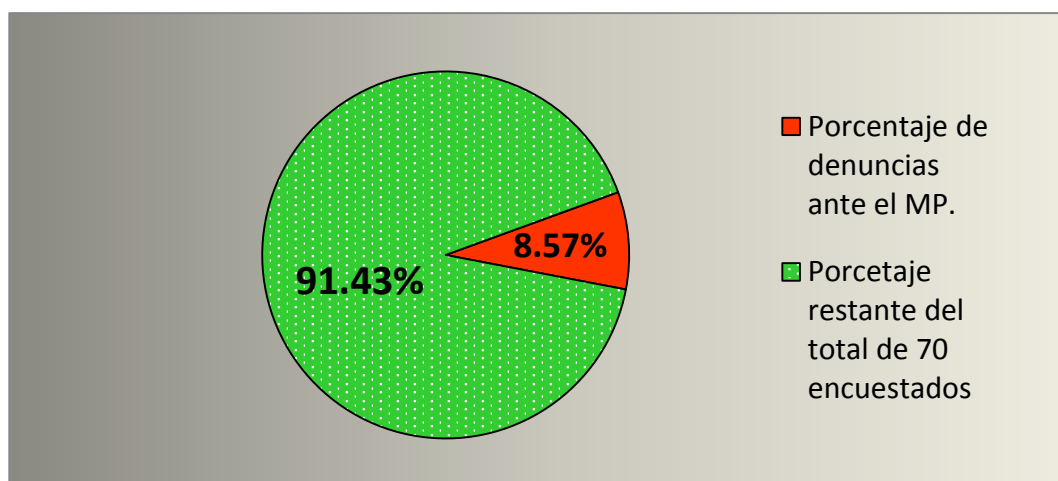


Gráfico N°04. Muestra el porcentaje de denuncias por usurpación entre particulares ante el Ministerio Público.

Análisis e interpretación. El cuadro N° 09; podemos observar que de los 70 encuestados, 6 de ellos (lo que representa **8.57%**), acudieron a la Fiscalía Penal Corporativa de la provincia de Padre Abad para denunciar sobre actos de

usurpación de sus terrenos, ya sea por otros posecionarios vecinos o terceros (nuevos ingresantes a áreas concesionadas); las mismas que todos fueron admitidas por el Fiscal Penal de turno, pese a que los hechos tuvieron lugar dentro de las áreas forestales concesionadas, donde el Estado no garantiza posesión alguna; pero que el Ministerio Público como órgano imparcial e independiente, defensor de la legalidad y de los derechos de todos los ciudadanos sin importar su condición, al admitir denuncias de esta naturaleza, solo estaría cumpliendo sus funciones, puesto que legalmente no están impedidos del conocimiento de la *notitia criminis* suscitados en estas áreas y, consecuentemente su investigación preliminar correspondiente.

CUADRO N° 10

Si el Fiscal responsable del caso - luego de haber realizado la investigación preliminar - sobre actos de usurpación en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, ha formalizado denuncia ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

5. Una vez admitida su denuncia, el Fiscal responsable del caso, luego de haber realizado la investigación correspondiente; ¿ha formalizado denuncia ante el órgano jurisdiccional correspondiente?	Respuesta de los encuestados	
	Frecuencia	%
SI	0	0
NO	6	100
Subtotal	6	8.57
No responden la pregunta porque no tuvieron denuncias ante la fiscalía.	64	91.43
Total	70	100

Fuente: Anexo 02 (cuestionario de encuesta).

Elaboración: El tesista.

Análisis e interpretación. En el cuadro N° 10; podemos apreciar que de las 6 denuncias de casos de usurpación ante el Ministerio Público -según la respuesta de los denunciadores encuestados- ninguno fue formalizado (por el fiscal responsable) ante el Poder Judicial correspondiente (Juez Penal de Investigación Preparatoria). El resto de los encuestados no corresponden este ítem, porque no tuvieron denuncias ante el Ministerio Público sobre casos de usurpación de sus tierras en dichas áreas.

CUADRO N° 11

Razones (según la percepción de los encuestados) por las que los Fiscales responsables de los casos archivaron las denuncias de usurpación entre particulares en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad.

6. De no haber formalizado la denuncia respectiva el Fiscal responsable del caso, ante el Juez penal correspondiente; ¿cuál ha sido su argumento para archivar la denuncia?	Respuesta de los encuestados.	
	Frecuencia	%
A. Nos consideran como invasores de áreas concesionadas y no tenemos derecho sobre los terrenos que poseemos.	2	33.3
B. Que, no contamos con título de propiedad, o constancia de posesión expedida por una autoridad competente, para acreditar nuestro derecho posesorio.	3	50.0
C. Desconoce los motivos.	1	16.6
Total	6	100

Fuente: Anexo 02 (cuestionario de encuesta).

Elaboración: El tesista.

Gráficamente se representa de la siguiente forma:

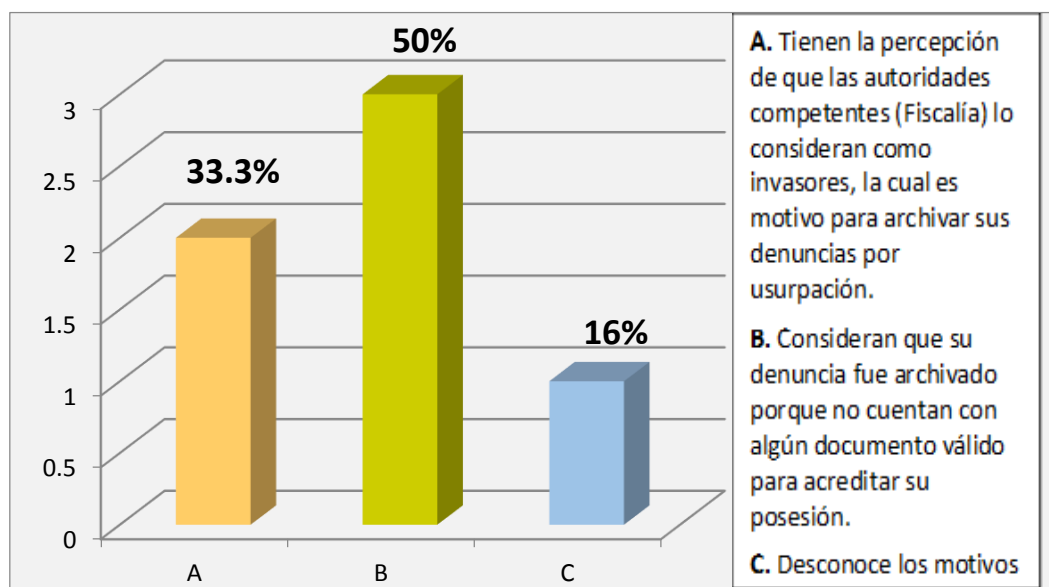


Gráfico N°05. Muestra en porcentaje las razones (según la percepción de los encuestados) por las que fueron archivadas sus denuncias.

Análisis e interpretación. El en cuadro N° 11; podemos apreciar que de las 6 denuncias interpuestas -ante el Ministerio Público- por delitos de usurpación en áreas forestales concesionadas (según las respuestas de los encuestados denunciantes), fueron archivados por las siguientes razones:

- Tres (3), lo cual representa el **50%** de las denuncias, fueron archivados porque los supuestos agraviados no tenían títulos de propiedad o constancias de posesión expedido por una autoridad competente para acreditar la posesión de su terreno presuntamente usurpado.
- Dos (2) de los denunciantes, lo cual representa más del **33%** de los 6 denunciantes, tienen la percepción de que son considerados como invasores, y por ello no tienen derecho para poseer los terrenos que ocupan en áreas concesionadas, y como tal, tampoco tienen derecho para solicitar la tutela de sus posesiones.
- Por último, solo (1) de los denunciantes (lo cual representa el **16%** del total, desconoce los motivos por las cuales su denuncia fue archivada en instancia del MP.

Por consiguiente, a la luz de los encuestados, ninguno de las (6) denuncias interpuestas ante el Ministerio Público- por actos de usurpación (entre particulares) en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad- lograron acceder al órgano jurisdiccional correspondiente para el pronunciamiento de fondo sobre el conflicto de esta naturaleza; por lo que estaría privándose de la tutela jurisdiccional efectiva consagrado en la Constitución Política y demás normas conexas. La misma que se tendrá que corroborar con el análisis de las carpetas fiscales sobre estos casos (la cual desarrollamos *infra*), para contrastar la información obtenida de la encuesta.

CUADRO N° 12

Consecuencias de no tener la seguridad jurídica posesoria de los terrenos ocupados en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad: privación de la tutela de la tutela jurisdiccional efectiva consagrada en nuestra Constitución y demás normas conexas, concretamente, por actos de usurpación entre particulares.

7. ¿Usted cree que no pudo acceder al poder judicial para obtener “justicia” por el delito denunciado ante el Ministerio Público, porque no cuenta con la seguridad jurídica posesoria del terreno que ocupa en áreas forestales concesionadas?	Respuesta de los encuestados.	
	Frecuencia	%
SI	6	100
NO	0	0
Subtotal	6	8.57
No corresponde responder la pregunta porque no tuvieron denuncias ante la Fiscalía.	64	91.43
Total	70	100

Fuente: Anexo 02 (cuestionario de encuesta).

Elaboración: El tesista.

Análisis e interpretación. En el cuadro N° 12, se puede apreciar que los 6 posecionarios quienes denunciaron los actos de usurpación de sus predios por otros posecionarios o terceros, consideran que no pudieron acceder al órgano jurisdiccional para obtener “justicia” (tutela jurisdiccional efectiva), porque no tienen la seguridad jurídica posesoria de sus terrenos que ocupan, justamente por estar ubicados en áreas forestales concesionadas. Esta inseguridad jurídica se traduce en la falta de un título posesorio o de propiedad que pueda justificar y garantizar la titularidad de sus posesiones; lo que no es posible obtener dichos documentos desde la creación de BPP (año 2002) y su ulterior adjudicación en concesión a empresas privadas para la explotación de madera; más aún, la normativa forestal vigente prohíbe taxativamente la ocupación de estas áreas con fines agropecuarios y el otorgamiento de títulos posesorios o de propiedad a todo funcionario bajo responsabilidad; de manera que de esta inseguridad jurídica posesoria ocasiona como consecuencia la privación de la tutela jurisdiccional efectiva consagrado en nuestra Carta Magna y demás normas conexas, concretamente, de los actos de usurpación entre particulares que se suscitan en estas áreas. La cual contrastamos a continuación, con el análisis de carpetas fiscales sobre tales casos.

CUADRO N° 13

4.1.2. CUADRO DE ANÁLISIS DE CARPETAS FISCALES [CON ARCHIVO DEFINITIVO DE LA FISCALÍA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE PADRE ABAD SOBRE CASOS DE USURPACIÓN (ENTRE PARTICULARES) EN ÁREAS FORESTALES CONCESIONADAS EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD (2016-2017)].

N°	N° DE CARPETA FISCAL	DELITO	CONCLUSIONES DEL FISCAL RESPONSABLE DESPUÉS DE REALIZAR LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR PARA DICTAR LA DISPOSICIÓN CORRESPONDIENTE	DECISIÓN DEL FISCAL
01	382- 2015	USURPAN	<ul style="list-style-type: none"> - El supuesto agraviado no tiene constancia de posesión o título de propiedad que permite determinar la titularidad del área usurpado. - El lugar donde se produjeron los hechos forma parte de áreas concesionadas, pero ya explotadas por la empresa concesionaria, las cuales son ocupadas por terceros sin título, entre ellos, el propio denunciante y el denunciado; quienes por tal razón no exhiben título ni constancia de posesión, por ser posecionarios precarios. - En suma, no se cuenta con los elementos de convicción necesarios para poder determinar el carácter delictivo del hecho denunciado. 	<p><u>DISPONE:</u> NO PROCEDENCIA DE LA FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA.</p> <p><u>ORDENA:</u> El ARCHIVO DEFINITIVO</p>
02	119-2015	USURPACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - El agraviado solo presenta copia simple del certificado firmado por el representante legal de la Empresa Concesionaria Von Humboldt Forest SAC. - No hay documento válido o elemento de convicción fehaciente con el cual el agraviado pueda acreditar la titularidad real y menos la posesión continua y pacífica, el mismo que debe ser expedido por la autoridad competente. - También es de advertirse del estudio de los actos de investigación, que dichas áreas son de protección del Estado, el mismo que el agraviado tenía conocimiento que las áreas que posee forman parte del Bosque de Producción Permanente (BPP). 	<p>NO PROCEDENCIA DE LA FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA</p>

03	196-2016	USURPACIÓN	<p>- Que en la presente Carpeta Fiscal no obra documento válido para adjudicarse como titular del bien por parte del agraviado y del denunciado, y más aún que dichos terrenos materia de investigación se encontrarían dentro de un área protegida por el Estado.</p> <p>- El agraviado presenta una constancia de posesión emitido por el presidente de la comunidad, quien no es competente para expedir dicho documento.</p> <p>- Coligiéndose de esta manera, que no se habría configurado delito alguno por los motivos de contar con constancias de posesión emitidas por autoridades no competentes de la zona, pues solo son competentes para expedir constancias de posesión de áreas rurales las Agencias Agrarias o Agricultura, esto conforme señala el Decreto Legislativo 1089 – Decreto Legislativo que establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales.</p>	NO PROCEDENCIA DE LA FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
04	249-2016	USURPACIÓN	<p>- Cabe señalar que los denunciantes presentaron como única prueba de cargo, el documento Acta de Acuerdo (o Acta de Colindancia), celebrado con la Empresa concesionaria, el mismo que por su contenido, no puede ser considerado como prueba idónea para acreditar el derecho de posesión.</p> <p>- El área donde habría ocurrido los hechos forman parte de Bosques de Producción Permanente, las cuales fueron concesionadas a la Empresa Concesionaria Von Humboldt Forest SAC. para la explotación de los recursos maderables, empresa que no está autorizado para expedir documentos de carácter posesorio a terceros para acreditar la titularidad de los terrenos que ocupan.</p>	NO PROCEDENCIA DE LA FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

05	168-2017	USURPACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - De las inspecciones oculares no se pudo determinar el delito de usurpación, ya que no hay evidencias de que el agraviado haya estado en posesión del área usurpado por el denunciado. Solo presenta una constancia de morador expedido por la autoridad de la zona. - Que el posesionario no cuenta con una constancia de posesión emitida por una autoridad competente, con la cual se pueda determinar el tiempo de la posesión continua, pública y pacífica del terreno y, sobre todo las coordenadas de los linderos del predio para determinar el área usurpado. 	NO PROCEDENCIA DE LA FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA
06	314-2017	USURPACIÓN	<ul style="list-style-type: none"> - De los actos de investigación recabados en la presente carpeta fiscal, se advierte que el lugar donde se habría configurado el delito materia de investigación forma parte del ordenamiento forestal, clasificados como BPP; las mismas que fueron otorgadas en concesión a la Empresa Von Humboldt Forest SAC. en el año 2002. - Que el agraviado y el denunciado manifiestan ser posesionarios del terreno en virtud de una constancia de posesión expedida por autoridades locales de la zona, la cual no demuestra el tiempo de posesión del terreno que ocupan ni tampoco establece claramente los linderos del predio. - Que los documentos presentados carecen de valor probatorio, por ser emitidas por autoridades no competentes de la zona, pues, son competentes para otorgar títulos posesorios las Agencias Agrarias y las Direcciones de Regionales de Agricultura. 	NO PROCEDENCIA DE LA FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

Fuente: Carpetas fiscales archivados de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Padre Abad (2016-2017).

Elaboración: El tesista.

Análisis e interpretación. De las seis carpetas fiscales analizadas, sobre delitos de usurpación en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, podemos apreciar que ninguno ha pasado a la segunda fase de investigación en sede del Ministerio Público: La Investigación Preparatoria; toda vez que, los Fiscales responsables, después de haber realizado las diligencias correspondientes en la fase de la Investigación Preliminar y, al no contar con los elementos de convicción necesarios para poder determinar el carácter delictivo de los hechos denunciados, decidieron dictar la Disposición que corresponde: NO PROCEDENCIA DE LA FORMALIZACIÓN Y CONTINUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN PREPARATORIA y, ordenaron EL ARCHIVO DEFINITIVO del caso.

En líneas generales, los argumentos de los Fiscales responsables de cada carpeta fiscal para emitir dicha Disposición: fueron que no han podido determinar el carácter delictivo de los hechos denunciados, porque los supuestos agraviados y los mismos denunciados no cuentan con un documento expedido por una autoridad competente que acredite su derecho posesorio y, que además, después de haber realizado el cruce de información con las instituciones correspondientes (tales como el SERFOR, Ministerio de Agricultura, la SUNARP y las empresas concesionarias) llegaron a deducir: que las áreas donde se habrían configurado los hechos forman parte de bosques clasificados como “Bosques de Producción Permanente”, las mismas que han sido otorgados en concesión por el Estado a empresas forestales para la explotación de los recursos maderables, y que los posecionarios en dichas áreas, tanto los denunciantes, los denunciados y terceros serían posecionarios precarios al no contar con un título posesorio o de propiedad de los terrenos que ocupan.

En consecuencia; los posecionarios de tierras en áreas forestales concesionadas de la provincia de Padre Abad, quienes denunciaron el delito de usurpación (entre particulares) ante la Fiscalía, no pudieron acceder al órgano jurisdiccional respectivo para obtener un pronunciamiento de fondo sobre el delito denunciado; es decir, no han logrado obtener la **Tutela Jurisdiccional Efectiva** que nuestra Constitución Política y demás normas conexas; esto, porque al ocupar áreas forestales concesionadas, **no tienen la seguridad**

jurídica posesoria; es decir, no tienen un documento válido para acreditar su derecho posesorio, siendo su situación de “precarios” frente al Estado y, como tal no pueden tener el amparo legal y el acceso a la justicia para la tutela de sus derechos posesorios vulnerados por otros particulares.

De los resultados obtenidos del análisis de las carpetas fiscales, además, permite corroborar las respuestas de los ítems de la encuesta aplicados a los posesionarios en áreas concesionadas, quienes al responder las preguntas del 5 al 7 de la encuesta (ver cuadros N° 10, 11 y 12), aseguraron que no pudieron obtener “justicia” por actos de usurpación denunciados ante el Ministerio Público, ya que Fiscal responsable del caso no había formalizado la denuncia ante el órgano jurisdiccional correspondiente, por las razones ya expuestas.

De manera que, respecto a la dimensión sobre las consecuencias socio-jurídicas que genera la posesión de tierras -de manera precaria- en áreas forestales concesionadas la provincia de Padre Abad: queda determinado que es la privación de la tutela jurisdiccional para la resolución de conflictos de naturaleza penal, concretamente de actos de usurpación entre particulares que se suscitan en dichas áreas.

Lo que gráficamente se representa de la siguiente manera:

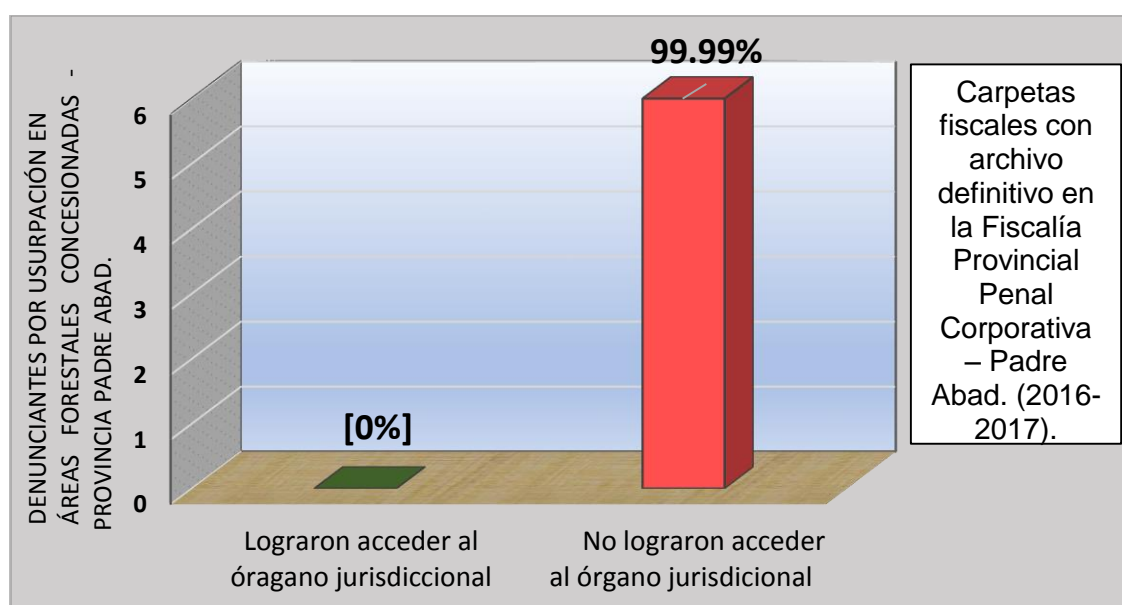


Gráfico N°06. Muestra en porcentaje de cuántos no lograron acceder al órgano jurisdiccional.

Capítulo V

5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

5.1. CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS CON LA BASE TEÓRICA

Habiendo planteado como teoría jurídica “El Positivismo Jurídico”, es necesario que la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas con fines maderables sean reguladas por el Derecho; es decir, deben ser positivados en el ordenamiento jurídico (pueden ser en la propia normativa forestal o en la normativa que regula el saneamiento físico legal de predios en zonas rurales), reconociendo la posesión de aquellos que ocupan áreas ya explotadas por el titular concesionario; priorizando a aquellos que se dedican a la agricultura de subsistencia, principalmente con productos alternativos impulsados por DEVIDA, de manera que puedan contar con la seguridad jurídica posesoria de las tierras que ocupan en estas áreas.

Respecto a las ocupaciones en áreas aun no explotadas y de aquellos que se dedican a actividades ilícitas en estas áreas, la regulación debe ser en sentido prohibitivo. Si bien la normativa forestal actual prohíbe la invasión y otras actividades conexas al cambio de uso de las tierras de aptitud forestal -al cual pertenecen las áreas concesionadas- lo hace de manera general para cualquier ocupante en estas áreas, por lo que tal prohibición no debe incluir a los posesionarios indicados en el párrafo anterior.

Respecto a los acaparadores de terreno sobre estas áreas, la regulación debe ser en sentido restrictivo, fijando un límite máximo de extensión para no propiciar el tráfico de terrenos a raíz del reconocimiento de la posesión en estas áreas.

De manera que, con una adecuada regulación de la posesión en estas áreas, estableciendo los lineamientos y condiciones para el otorgamiento de documentos de reconocimiento del derecho posesorio en estas áreas, la cual incluiría la agroforestería, las servidumbres ecológicas para cada predio reconocido consistentes en la preservación de más del 30% del área con cobertura arbórea, fuera de las franjas marginales de los

ríos, (lo que la normativa forestal vigente establece para las posesiones reconocidas con fines agropecuarios, tanto en predios privados y de dominio público); adecuar estos sistemas, como una condición para la vigencia del reconocimiento de la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, serían regulaciones saludables tanto para la preservación de los ecosistemas forestales y para los posesionarios, a quienes se le estaría brindando la seguridad jurídica posesoria.

Respecto a los titulares concesionarios, a quienes la normativa forestal vigente les garantiza la compensación de áreas excluidas de sus concesiones con otras áreas forestales de similares características; en este caso, si no es factible tal compensación, solo se exoneraría de los pagos anuales de las hectáreas excluidas que realiza a favor del Estado para mantener vigente el área otorgado en concesión.

5.2. CONTRASTACIÓN DE RESULTADOS CON LAS HIPÓTESIS

En esta etapa de la presente investigación, se efectúa el análisis y contrastación de la información recabada con las hipótesis formuladas; con la finalidad de confirmar o rechazarlos; las mismas que nos permiten verificar el logro de los objetivos establecidos. Procediéndose de la siguiente forma:

5.2.1. Contrastación con la hipótesis general. Habiendo planteado como hipótesis general: Los efectos y consecuencias jurídicas que emergen de la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, región Ucayali - referida básicamente a la ocupación de tierras con fines agropecuarios en áreas explotadas de los recursos maderables por la empresa concesionaria - lo cual involucra relaciones intersubjetivas y derechos materiales; ocasionan la inseguridad jurídica posesoria y el desamparo de la tutela jurisdiccional para la protección de sus tierras de actos de usurpación por otros particulares.

Del trabajo de campo, hemos determinado que los **efectos** de la posesión de tierras en áreas concesionadas en la provincia de Padre Abad es la **inseguridad jurídica posesoria**, ya que los posesionarios de tierras en estas áreas no tienen y no pueden obtener un título posesorio o de propiedad, toda vez después de la creación de BPP en estas áreas (que fue el 7 de enero del año 2002, mediante Resolución Ministerial N° 026-2002-AG), no es posible obtener algún título posesorio de autoridades competentes en estas áreas, puesto que están reservadas para la producción permanente y preferentemente maderable. Aunado a ello, la Ley Forestal vigente (Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763), en su Art. 37, prohíbe taxativamente el cambio de uso actual de las tierras que son de CUM forestal (al cual pertenecen las áreas concesionadas por ser BPP), a fines agropecuarios y, el otorgamiento de títulos de propiedad, certificados o constancias de posesión, bajo responsabilidad de los funcionarios que pudieran expedir tales documentos.

Si bien algunos de ellos (más del 11%) cuentan con algún documento, éstos no tienen la calidad de títulos posesorios por haber sido expedidos por autoridades no competentes, de manera que tales documentos no le brindan la seguridad jurídica posesoria.

Respecto a las **consecuencias** de la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad; de los resultados obtenidos de la encuesta y corroborados con el análisis documental de las carpetas fiscales, sobre actos de usurpación entre particulares, se evidencia, entre los argumentos de los Fiscales responsable de los casos para archivar las denuncias: fueron porque los agraviados y los propios denunciados no cuentan con algún documento expedido por una autoridad competente para acreditar su posesión sobre el inmueble (tierra) materia de usurpación, de manera que las consecuencias de la posesión de tierras en áreas concesionadas -de manera precaria- es la **privación de tutela jurisdiccional en casos de delitos de usurpación entre particulares** que se suscitan en estas áreas.

Al respecto cabe la pregunta: ¿por qué la condición de “precario” (sin título posesorio o de propiedad) de los posecionarios en áreas forestales concesionadas puede generar el desamparo de la tutela jurisdiccional en delitos de usurpación entre particulares, si bien es cierto, que la usurpación como tipo penal protege la posesión de hecho y no de derecho?

En efecto, en delitos de esta naturaleza, la investigación se centra en determinar la posesión de hecho que ejercía el agraviado sin importar si es precario o ilegítimo y, el subsiguiente despojo por parte del denunciado; por lo que sería irrelevante la discusión sobre la calidad del poseedor en dichas áreas, o, requerir al agraviado o al mismo investigado acreditar con documentos la posesión del terreno objeto de usurpación; empero, como la labor del representante del Ministerio Público en la investigación preliminar -previo a formalizar denuncia- aparte de verificar los presupuestos de procedibilidad del caso, es reunir los elementos de convicción suficientes para determinar si los hechos denunciados constituyen delito; para tales efectos, agota todas las diligencias posibles que coadyuven al logro de dicho objetivo y, entre ellas, la constatación fiscal *in situ* para apreciar la posesión de hecho que ejerce o ejercía el agraviado - sobre el área usurpado - mediante actos de usar, sembrar, criar animales, haber realizado cercos de alambrado, etc.; pero, generalmente, lo único que encuentra son evidencias del trabajo realizado por el usurpador, ya que las “invasiones” o actos de usurpación en esta zonas suelen efectuarse en bosques primarios alejados de las áreas trabajadas del poseedor agraviado (es decir, la modalidad del delito por despojo en estos lugares es parcial). Es por ello que, al no poderse determinar la posesión de “hecho” que el agraviado ejercía sobre el área presuntamente usurpado, casi por defecto, el Fiscal del caso busca otras pruebas que le permita determinar si el área despojada constituía parte de la posesión del supuesto agraviado, requiriéndole demostrar con un documento emitido por una autoridad competente (Constancia de Posesión expedido por el funcionario de la Agencia Agraria o si tuvieren el

título de propiedad) donde haga constar al sujeto titular del predio con su respectiva georreferenciación y los linderos a través del sistema de coordenadas, que permita determinar a quién pertenecía el área supuestamente usurpado; sin embargo, los documentos que suelen presentar los agraviados solo son constancias de posesión o similares emitidas por autoridades locales o por el representante de la empresa concesionaria de la zona, quienes no están facultados para expedir dichos documentos; por ende, tales documentos no son tomados en cuenta por el representante del Ministerio Público.

Además, durante la investigación preliminar, el Fiscal responsable del caso – al realiza el cruce de información con las instituciones públicas y privadas respectivas como el Ministerio de Agricultura, el SERFOR, la SUNARP y la empresa concesionaria – deduce, que las áreas donde se habría configurado el supuesto delito no pueden ser objeto de ocupación por los particulares por ser áreas forestales de dominio público clasificadas como BPP y adjudicadas en concesión a empresas privadas para la explotación de madera, las mismas que se encuentran debidamente inscritos en los Registro Públicos. Consecuentemente, y al no haberse determinado que los hechos denunciados constituyen delito: el Fiscal responsable del caso decide no formalizar y continuar con la investigación preparatoria y ordena archivar el caso de manera definitiva; dejando en desamparo a los justiciables quienes no pueden acceder al órgano jurisdiccional para la tutela de sus derechos que nuestra Carta Magna garantiza a todos.

Entonces;

Del estudio realizado, la **hipótesis general** se enuncia de la siguiente manera: Los efectos y consecuencias socio-jurídicas que emergen de la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, región Ucayali - referida básicamente a la ocupación de tierras con fines agrícolas en áreas explotadas de los recursos maderables por la empresa concesionaria - lo cual involucra relaciones intersubjetivas y

derechos materiales; ocasionan la inseguridad jurídica posesoria y el desamparo de la tutela jurisdiccional para la resolución de los conflictos por usurpación de sus tierras por otros particulares.

5.2.2. Contrastación con las sub-hipótesis

Sub-hipótesis A. Habiendo planteado como sub-hipótesis “A”: Los poseсионarios de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, región Ucayali; no tienen y no pueden obtener un título que garantice su posesión; por ende, su situación jurídica está enmarcada en un tipo de posesión ilegítima o precaria frente al Estado.

Del análisis exegético de los artículos del Código Civil, relacionados a la posesión y las variantes de posesión ilegítima y precaria, se deduce que, en nuestra legislación civil, para que una posesión sea considerado ilegítimo se requiere de la existencia de un título “viciado”; por lo que, de la presente sub-hipótesis planteada se descarta que los poseсионarios en áreas concesionadas tengan la calidad de ilegítimos. Si bien es cierto que algunos cuentan con algún documento para tratar de justificar su posesión, éstos no constituyen ni siquiera “títulos viciados”, puesto que, al ser otorgados por autoridades no competentes y en áreas donde está prohibido el otorgamiento de cualquier documento de carácter posesorio devienen en nulos de plano. Por lo que, de la presente sub-hipótesis se acepta solamente la situación jurídica de poseсионarios precarios frente al Estado.

Entonces, del estudio realizado la sub-hipótesis “A” se enuncia de la siguiente forma: Los poseсионarios de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, región Ucayali; no tienen y no pueden obtener un título que garantice su posesión; por ende, su situación jurídica está enmarcada en un tipo de posesión precaria frente al Estado.

Sub-hipótesis B. Habiendo planteado como sub-hipótesis “B”: El Estado no reconoce ni ampara la posesión de tierras en áreas

forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, región Ucayali; por lo tanto, los poseсионarios en estas áreas no cuentan con la seguridad jurídica posesoria.

Del estudio realizado se confirma esta sub-hipótesis, toda vez que las normativas en materia forestal prohíben taxativamente la otorgación de títulos de propiedad o constancias de posesión sobre estas áreas por ser de aptitud forestal, clasificadas como BPP, además la misma norma aclara que no se pueden otorgar otros derechos reales sobre una misma área donde existe ya un título habilitante otorgado, en este caso, las áreas forestales que ocupan los poseсионarios fueron concesionadas a empresas privadas para la explotación de madera.

Sub-hipótesis C. Toda vez que ninguna institución fuente, contaba con información respecto al número aproximado del total de poseсионarios en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, planteamos como sub-hipótesis “C”: El número de poseсионarios de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad – región Ucayali, es relativamente alto.

Del estudio de campo, se ha determinado que el número aproximado de poseсионarios en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad es de 1800; cálculo que se realizó en base a la información del padrón de moradores contenida en los expedientes de cada caserío para el trámite de exclusión de predios superpuestos con áreas de BPP y concesiones forestales de la provincia de Padre Abad, la cual nos facilitó los representantes del FREPAMARU.

Por lo que la sub-hipótesis “C” se enuncia de la siguiente forma: El número de poseсионarios de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad – región Ucayali, es de 1800 aproximadamente.

Sub-hipótesis D. Planteamos como sub-hipótesis “D”: Los conflictos de relevancia jurídica que surgen de la posesión de tierras

en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad – región Ucayali; son los problemas de linderos y usurpación de terrenos entre poseionarios y terceros.

De los resultados de la encuesta se confirma esta hipótesis, toda vez que, entre los problemas más frecuentes relacionados a la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, son los problemas de linderos entre los poseionarios vecinos, la invasión de tierras en parte de las posesiones de los más antiguos - quienes mayormente suelen tener acaparado vastas extensiones de tierra - por parte de los nuevos ingresantes a estas áreas (terceros), y el problema de usurpación. Este último no son más que los dos anteriores problemas, pero por el nivel de gravedad de tales conflictos que suelen efectuarse mediante la violencia y la amenaza: constituirían delitos de usurpación en la modalidad de despojo parcial, puesto que mayormente el área objeto de usurpación son áreas con bosque primario donde que el supuesto poseionario agraviado no tiene ningún trabajo realizado o evidencias del ejercicio fáctico de la posesión sobre el inmueble.

Sub-hipótesis E. Habiendo planteado como sub-hipótesis “E”: Los poseionarios de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad – región Ucayali, no tienen derecho a la tutela jurisdiccional efectiva consagrado en la Constitución Política del Estado y demás normas conexas, para la resolución de sus conflictos por usurpación entre particulares, porque no pueden acceder al órgano jurisdiccional.

Del estudio de campo realizado, de igual forma, se confirma esta sub- hipótesis (la misma que se colige de la hipótesis general), toda vez que los poseionarios de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, no pueden acceder al órgano jurisdiccional para la resolución de sus conflictos de naturaleza posesoria, concretamente por actos de usurpación entre particulares, ya que al ser denunciados ante el Ministerio Público

éstas son archivadas en esta instancia, por las razones ya descritas en el análisis de las carpetas fiscales sobre estos casos. (Ver cuadro N°09).

5.3. CON LOS OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

Habiendo planteado como objetivo general de investigación: identificar, describir y analizar los efectos y consecuencias jurídicas que emergen de la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad - región Ucayali, 2016-2017:

Podemos establecer, después de haber obtenido los resultados en la fase de ejecución del presente trabajo de investigación, que se ha logrado: identificar, describir y analizar los efectos y consecuencias jurídicas que emergen de la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad - región Ucayali, 2016-2017.

Además, podemos establecer que se ha logrado con todos los objetivos específicos planteados en el marco de la presente investigación.

CONCLUSIONES

Después de haber efectuado el trabajo de campo en la fase de ejecución de la presente tesis, se concluye:

- ✓ **Los efectos socio-jurídicos** que emergen de la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, región Ucayali: es la **inseguridad Jurídica posesoria**, toda vez que de las personas que ocupan áreas ya explotadas por la empresa concesionaria, no cuentan con un título posesorio o de propiedad - expedido por una autoridad competente - que garantice su derecho posesorio.
- ✓ **Las consecuencias socio-jurídicas** que ocasionan la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, región Ucayali: es la **privación de la tutela jurisdiccional efectiva** consagrada en nuestra Constitución Política y demás normas conexas, para la resolución de los conflictos por usurpación entre particulares.
- ✓ Los posecionarios de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, región Ucayali; no tienen y no pueden obtener un título que garantice su posesión; por ende, su situación jurídica está enmarcada en un tipo de **posesión precaria frente al Estado**.
- ✓ El Estado no reconoce ni ampara la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, región Ucayali; por lo tanto, no cuentan con la seguridad jurídica posesoria.
- ✓ El número de posecionarios de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad – región Ucayali, es de **1800 posecionarios** aproximadamente.
- ✓ Los conflictos de relevancia jurídica que surgen de la posesión de tierras en áreas concesionadas en la provincia de Padre Abad – región Ucayali; son básicamente los problemas de linderos entre posecionarios, invasiones por parte de terceros (nuevos ingresantes) en parte de las posesiones de los posecionarios más antiguos, y los actos de usurpación.

- ✓ Los posecionarios de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad; están privados de la tutela jurisdiccional que la Carta Magna garantiza a todos los ciudadanos del Estado, toda vez que no pueden acceder al órgano jurisdiccional para la resolución de sus conflictos de naturaleza posesoria, concretamente por actos de usurpación entre particulares, que al ser denunciados ante el Ministerio Público éstas son archivadas en esta instancia.

- ✓ De acuerdo con la normativa forestal vigente, para que opere la exclusión y compensación de áreas concesionadas por superposición de derechos, solo es factible con la acreditación de títulos de propiedad o de posesión emitido por una autoridad competente y con anterioridad a la creación de BPP (la cual en la en la provincia de Padre Abad y demás provincias de la región Ucayali, fue el 7 de enero del año 2002, mediante Resolución Ministerial N° 026-2002-AG); tal requisito es lapidario para todos los agricultores posecionarios en estas áreas quienes han ingresado posterior a la creación de BPP, y su ulterior adjudicación en concesión a empresas privadas con fines maderables. Igual suerte corren algunos posecionarios que vienen ocupando estas áreas desde antes de la creación de BPP, pero que no formalizaron sus posesiones; de manera que actualmente se encuentran imposibilitados de obtener algún título posesorio o de propiedad.

RECOMENDACIONES

- Para superar los efectos y consecuencias descritas sobre la problemática estudiada, se requiere de acciones conjuntas por las instituciones públicas afines al sector forestal; especialmente, la Autoridad Nacional Forestal (SERFOR) y la Autoridad Regional Forestal (ARFFS), en cooperación de las demás instituciones del Estado y con la participación de los representantes inmediatos de los posecionarios en áreas forestales concesionadas; se debe entablar una mesa de diálogo, con la finalidad de implementar políticas sociales y proyectos normativas de acuerdo a la realidad social de esta parte de la región. Toda vez que, la mayoría de los posecionarios en estas áreas son familias que se dedican a la agricultura de subsistencia, otros se dedican a la ganadería en pequeña escala, además de cultivos de productos alternativos impulsados por DEVIDA, para mejorar y cambiar sus condiciones y formas de vida.
- Los lineamientos ejes que la autoridad Nacional y Regional Forestal y de Fauna Silvestre deben tomar en cuenta - para excluir las áreas ocupadas por posecionarios dentro de las concesiones forestales ya explotadas por el titular concesionario, las que posteriormente permitirán el otorgamiento de títulos posesorios por la autoridad competente y por ende la seguridad jurídica posesoria- son los siguientes:

Primero: Se debe crear una comisión *ad hoc* para el censo de las personas que se encuentran ocupando las áreas forestales concesionadas ya explotadas por el concesionario, para determinar el número de familias posecionarios y para acreditar la explotación económica a las que someten las áreas que ocupan.

Segundo: En base a la información recabada, la Autoridad Regional Forestal y de Fauna Silvestre (que son los Gobiernos Regionales), previa opinión vinculante de la Autoridad Nacional Forestal y de fauna silvestre (SERFOR) y el Ministerio del Ambiente, en un acto de voluntad política, conforme a sus atribuciones establecidas en el Art. 3º de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales: debe emitir la Ordenanza

Regional excluyendo las áreas que se encuentran ocupadas por posesionarios con fines agropecuarios en áreas forestales concesionadas ya explotadas por el titular concesionario.

Tercero: Posteriormente, se debe solicitar al Ministerio de Agricultura para que, por intermedio de sus Agencias Agrarias de la provincia de Padre Abad, pueda realizar el trabajo de levantamiento catastral de cada predio, y si reúnen los requisitos, debe otorgar las Constancias de Posesión respectivas a cada posesionario; documento que permitirá tramitar el Título de Propiedad respectiva ante la autoridad competente.

En cuanto a los titulares concesionarios que resulten afectados por la exclusión de las áreas de su concesión, si bien no es factible la compensación que el Art. 73 del Reglamento para la Gestión Forestal (Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763) establece, solamente se debe dispensar del pago anual por hectárea que realiza a favor del Estado (para mantener vigente el derecho otorgado) de las áreas excluidas de su concesión.

- Respecto a los nuevos posesionarios que ingresen ocupar áreas forestales concesionadas después de haberse desarrollado el trabajo de exclusión y otorgación de títulos posesorios de oficio por las instituciones mencionados *supra*, el trámite debe ser a solicitud de parte, para lo cual -el ejercicio fáctico de la posesión de manera continua, pacífica y pública del terreno que ocupa por más de (1) año, conforme lo prevé el Art. 12 del DECRETO SUPREMO N° 032-2008-VIVIENDA, Reglamento del Decreto Legislativo N° 1089- debe ser requisito suficiente para solicitar de manera extraordinaria a la Agencia Agraria la otorgación de la Constancia de Posesión, previa constatación *in situ* y el levantamiento del plano catastral, por parte de profesional competente.
- Para que el reconocimiento de la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas, no implique fomentar el cambio de uso del suelo de manera indiscriminada, que ponga en peligro la preservación de los ecosistemas forestales: el marco normativo que regule el reconocimiento

de la posesión en estas áreas, debe establecer como condición para mantener vigente el título otorgado, las prácticas de agroforestería, las servidumbres ecológicas para cada predio reconocido consistentes en la mantención de más del 30% del área con cobertura arbórea, aparte de las franjas marginales de los ríos, (lo que la normativa forestal vigente ya establece para las posesiones reconocidas con fines agropecuarios). Adecuar estos sistemas en la regulación del reconocimiento de la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, serian alternativas de solución saludables tanto para los ecosistemas forestales y para los poseionarios que vienen ocupando dichas áreas de manera precaria.

Con ello, se superaría los efectos socio-jurídicos que genera la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad: que es la inseguridad jurídica posesoria y; eventualmente, también se superaría las consecuencias socio-jurídicas que genera la posesión de tierras en las áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad: que es la privación de la tutela jurisdiccional efectiva para la resolución de los conflictos por usurpación entre particulares que se suscitan en estas áreas. Puesto que, con el reconocimiento de la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas, mediante la otorgación de títulos posesorios, se brindaría la seguridad jurídica posesoria a los ocupantes de tierras en dichas áreas; y, eventualmente, en mérito de tal título, pudieran solicitar la tutela de sus derechos posesorios - si son vulnerados - ante cualquier autoridad competente.

REFERENCIAS Y CONSULTAS BIBLIOGRÁFICAS

- Alvarado, S.S. y Reátegui J.J. (2014). *Análisis situacional de las Concesiones Forestales de las provincias de Coronel Portillo y Padre Abad de la Región de Ucayali, Zafra 2002-2010*. (Tesis pregrado). Universidad Nacional de Ucayali, Pucallpa, Perú.
- Andaluz, C. (2013). *“Manual de Derecho Ambiental”*. Edt. Iustitia, 4ta edición, Lima, Perú.
- Andaluz, C. (2006). *Manual de Derecho Ambiental*. Edición Proterra, Lima – Perú.
- Arias, M. (1991). *“Exégesis del Código Civil Peruano, Tomo IV, Los derechos reales”*. Edt. Librería Studium. Lima – Perú.
- Castillo, M. E. y Loja, M. K. (2004). *“La violencia ejercida contra el bien como medio comisivo para la configuración del delito de usurpación en la modalidad de despojo, vulnera el principio de ultima ratio del Derecho Penal”*. (Tesis pregrado) Universidad de la Amazonia Peruana, Iquitos – Perú.
- Campbell, Tom (s. f). *El sentido del positivismo*. Universidad Nacional de Australia. Recuperado de:
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/10145/1/doxa25_09.pdf
- Cisneros, G. (2000). *Teoría del Derecho*. Edit. Trillas, 2da edición, México.
- Comte, A. (1830-1842). *Curso de filosofía positiva (La Ley de los tres estados)*. Recuperado de: https://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_los_tres_estados
- Galarza, E. y La Serna, K. (2005). *“Las concesiones Forestales en el Perú: ¿Cómo hacerlas sostenibles? En: La política forestal en la Amazonía andina. Estudio de casos: Bolivia, Ecuador y Perú”*. En Serie Diagnóstico y Propuesta, Lima – Perú.
- Gonzales, B. Gunther (2003). *Curso de Derechos Reales*. Edt. Jurista Editores, Lima-Perú.

- FAO. (2009). *Situación de los bosques del mundo 2009*. Roma: FAO.
Recuperado de: <http://www.fao.org/docrep/pdf/011/i0350s/i0350s.pdf>
- Fuente, M. E. y Barkin, D. (2011). "*Concesiones forestales, exclusión y sustentabilidad. Lecciones desde las comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca*". Recuperado de:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-050X2011000300007
- Hidalgo, J. (s. f). *Estado de la Situación Forestal en el Perú*. Recuperado de:
<http://infobosques.com/portal/wp-content/uploads/2016/08/Copy-of-Per%C3%BA-pdf.pdf>
- Hinostroza, M. A. (2007). *Comentarios al Código Procesal Civil*, Tomo I. Edit. Gaceta Jurídica, Lima Perú.
- Kelsen, H. (1934). *Teoría pura del Derecho*. Recuperado de:
<https://cvperu.typepad.com/files/libro-teoria-pura-del-derecho-hans-kelsen.pdf>
- Lama, H. (2007). "*La posesión y la posesión precaria*". Edt. Grijley, Lima – Perú.
- Malleux, R. H. (s. f). *Tenencia de los bosques en el Perú*. Auspiciado por la FAO.
Recuperado de: <http://www.fao.org/forestry/download/17195-0fb06a577bfa399fcadef97baaf6a835d.pdf>
- Pautrat, L. y Lucich, I. (2006). *Análisis preliminar sobre gobernabilidad y cumplimiento de la legislación del sector forestal en el Perú*. Recuperado de:
<http://www.keneamazon.net/Documents/Publications/Virtual-Library/Marco-Normativo/66.pdf>
- Rodríguez, E. J. (2014). *¿Posesión precaria es una posesión ilegítima?* Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (Tesis de maestría). Lambayeque – Perú.
- Rousseau, J. J. (1762). "*El contrato social*", Fondo Editorial Cultura Peruana, 1era edición, setiembre 2002, Lima – Perú.
- Sánchez, M. (2008). "*El ocupante precario. Doctrina y jurisprudencia*", Edit. Jurista Editores, 2da edición, Lima.

Taborga, J. (2005). *El Manejo inadecuado y la explotación irracional de bosques*. (Tesis de maestría). Universidad Mayor de San Andrés – Bolivia

Taller internacional: *¿Cuál es el futuro de las concesiones forestales y modelos alternativos de asignación para la gestión de los bosques públicos?* Porto Velho, Brasil, 13–16 de septiembre de 2016, (informe: Roma, octubre de 2016). Evento organizado por la FAO y el Servicio Forestal Brasileño (SFB), otras instituciones y ONGs afines en materia forestal. Recuperado de: <http://www.fao.org/forestry/45547-057add54c52511be19a4cefe129f11cd.pdf>

Torres, A. (2006). *Derechos Reales*, Tomo 1. Edt. IDEMSA.

Torres, A. (2009). *Posesión precaria*. Recuperado de: <http://blog.pucp.edu.pe/blog/seminariotallerdpc/2009/11/03/posesion-precaria-anibal-torres-vasques/>

Vázquez, A. (2011). *Derechos Reales Tomos I y II*. Edit. San Marcos, 4ta edición, Lima – Perú.

Normas legales de referencia:

- Constitución Política del Perú, (1993).
- Código Civil, (1984).
- Código Procesal Civil, (1992).
- Código Penal, (1991).
- Ley Orgánica del Poder Judicial, (1993).
- Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763 y sus Reglamentos, (2015). Recuperado de: <https://www.serfor.gob.pe/wp-content/uploads/2016/03/LFFS-Y-SUS-REGLAMENTOS.pdf>
- Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 27308, (2000).
- Ley N° 26821. Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, (1997).

- DECRETO-LEY N° 22175. Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo Agrario de la Selva y de Ceja de Selva, (1978).
- DECRETO LEY N°21147, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, (1975).
- ORDENANZA REGIONAL N° 010-2018-GRU-CR.
- DECRETO SUPREMO N° 017-2009-AG. Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor.
- DECRETO SUPREMO N° 032-2008-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N°1089 - Decreto Legislativo que Establece el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales.
- DECRETO SUPREMO N° 014-2001-AG. Aprueba el Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 27308.
- DECRETO SUPREMO N° 0062/75-AG. Reglamento de Clasificación de Tierras.
- Resolución Ministerial N° 0147-2015-MINAGRI.
- Resolución Ministerial N° 026-2002-AG.
- Resolución Ministerial N° 0586-2004-AG.
- Resolución Ministerial N° 0670-2005-AG.
- Resolución Ministerial N° 0434-2006-AG.
- Resolución Jefatural N° 297-2008-INRENA.

ANEXOS

MATRIZ DE CONSISTENCIA (Anexo 01)

TITULO: “LA POSESIÓN DE TIERRAS EN CONCESIONES FORESTALES EN LA PROVINCIA DE PADRE ABAD, REGIÓN UCAYALI, 2016-2017”

Tesista: Bach. José Antonio Morales Rivera

Asesor: Dr. Félix Ponce e Ingunza

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	OBJETIVOS	HIPÓTESIS	VARIABLES Y DIMENSIONES	INDICADORES
<p>Problema General ¿Cuáles son los efectos y consecuencias jurídicas que emergen de la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, región Ucayali, 2016-2017?</p> <p>Problemas específicos A. ¿Cuál es la situación legal de los poseedores de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, región Ucayali, 2016-2017? B. ¿El Estado reconoce y ampara la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, región Ucayali, 2016-2017? C. ¿Cuál es el número de poseedores de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, región Ucayali, 2016-2017? D. ¿Cuáles son los conflictos de relevancia jurídica que surgen de la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, región Ucayali, 2016-2017? E. ¿Tienen derecho a la tutela jurisdiccional efectiva - los poseedores de tierras en áreas forestales concesionadas - para la resolución de los conflictos sobre actos de usurpación entre particulares, en la provincia de Padre Abad, región Ucayali, 2016-2017?</p>	<p>Objetivo General Identificar, describir y analizar los efectos y consecuencias jurídicas que emergen de la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad - región Ucayali, 2016-2017.</p> <p>Objetivos específicos A. Diagnosticar, analizar y determinar la situación legal de los poseedores de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad - región Ucayali, 2016-2017. B. Determinar si el Estado reconoce y ampara la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad - región Ucayali, 2016-2017 C. Calcular el número de poseedores de tierras en áreas concesionadas a empresas forestales en la provincia de Padre Abad - región Ucayali; 2016-2017. D. Identificar los conflictos de relevancia jurídica que surgen de la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad - región Ucayali, 2016-2017. E. Deducir y determinar si los poseedores de tierras en áreas forestales concesionadas tienen derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para la resolución de sus conflictos sobre actos de usurpación entre particulares, en la provincia de Padre Abad, región Ucayali, 2016-2017.</p>	<p>Hipótesis general. Los efectos y consecuencias jurídicas que emergen de la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, región Ucayali - referida básicamente a la ocupación de tierras con fines agropecuarios en áreas explotadas de los recursos maderables por la empresa concesionaria - lo cual involucra relaciones intersubjetivas y derechos materiales; ocasionan la inseguridad jurídica posesoria y el desamparo de la tutela jurisdiccional para la resolución de sus conflictos sobre actos de usurpación entre particulares, en la provincia de Padre Abad, región Ucayali.</p> <p>Sub hipótesis A Los poseedores de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, región Ucayali; no tienen y no pueden obtener un título que garantice su posesión; por ende, su situación jurídica está enmarcada en un tipo de posesión ilegítima o precaria frente al Estado.</p> <p>Sub hipótesis B El Estado no reconoce ni ampara la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad, región Ucayali; por lo tanto, no cuentan con la seguridad jurídica posesoria.</p> <p>Sub hipótesis C El número de poseedores de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad – región Ucayali, es relativamente alto.</p> <p>Sub hipótesis D Los conflictos de relevancia jurídica que surgen de la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad – región Ucayali; son los problemas de linderos y usurpación de terrenos entre poseedores y terceros.</p> <p>Sub hipótesis E Los poseedores de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad – región Ucayali, no tienen derecho a la tutela jurisdiccional efectiva consagrado en la Constitución Política del Estado y demás normas conexas, para la resolución de los conflictos por usurpación entre particulares, porque no pueden acceder al órgano jurisdiccional.</p>	<p>VARIABLE INDEPENDIENTE (X) La posesión de tierras</p> <p>DIMENSIONES ❖ Efectos socio-jurídicos. ❖ Consecuencias socio-jurídicas.</p> <p>VARIABLE DEPENDIENTE (Y) Concesiones forestales.</p> <p>DIMENSIONES • Política económica: capitalismo neoliberal. • Concesiones forestales con fines maderables</p>	<p>❖ Posesión. ❖ Clases de posesión. ❖ Posesión de bienes de dominio Público. ❖ Posesión de tierras con fines agrícolas y pecuarios de aptitud forestal. ❖ Prohibición de cambio de uso de tierras de aptitud forestal con fines agropecuarios. ❖ Prohibición de otorgamiento de títulos posesorios o de propiedad en áreas de aptitud forestal. ❖ Prohibición de otorgación de otros derechos reales en áreas concesionadas. ❖ Inseguridad jurídica posesoria. ❖ Conflictos intersubjetivos entre los poseedores. ❖ Delitos contra el Patrimonio en áreas forestales concesionadas (usurpación entre particulares). ❖ Privación de la tutela jurisdiccional. ❖ Delitos ambientales. ❖ Vulneración de la Ley N°29763 y sus Reglamentos. • El capitalismo neoliberal. • Concesiones forestales. • Concesiones forestales con fines maderables. • Empresas privadas titulares de la concesión forestal. • BPP. • Aprovechamiento sostenible de los recursos maderables.</p>



CUESTIONARIO DE ENCUESTA (Anexo 02)

(Aplicado a los poseedores en áreas forestales concesionadas de la provincia de Padre Abad)

Título de tesis: **“Posesión de tierras en concesiones forestales en la provincia de Padre Abad, región Ucayali, 2016-2017”.**

Tesista : **José Antonio Morales Rivera.**

Introducción: La presente encuesta tiene como objetivo recolectar información sobre los efectos y consecuencias socio-jurídicas que generan la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas en la provincia de Padre Abad; para luego proponer alternativas de solución sobre este fenómeno social, de manera que, las autoridades pertinentes puedan implementar políticas sociales y normativas concordante con la realidad social de la zona, las cuales permitirán superar esta problemática dentro del marco de Estado de Derecho moderno e inclusivo.

Instrucciones: Marque con una “X” la respuesta que considere la más adecuada o correcta en preguntas con alternativas; y escriba su respuesta en las preguntas abiertas. La encuesta es anónima y la información obtenida es para el uso exclusivo del tesista. Gracias por su valiosa contribución en el presente trabajo de investigación socio-jurídica.

Ítems para determinar los efectos socio-jurídicos que genera la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas:

1.- ¿Usted cuenta con algún documento expedido por una autoridad competente con la cual pueda acreditar el terreno que ocupa?

SI

NO

2.- De ser afirmativo su respuesta en la pregunta anterior, mencione el tipo de documento con la que usted cuenta.

.....
.....

3.- Mencione la institución o autoridad de donde obtuvo dicho documento.

.....
.....

4.- ¿Cuáles son los problemas más frecuentes que usted tuvo con otros poseedores o terceros relacionados a la posesión de (sus) tierras en áreas forestales concesionadas?

.....

.....

Ítems para determinar las consecuencias socio-jurídicas que genera la posesión de tierras en áreas forestales concesionadas:

5.- En caso de que usted tuvo conflictos entre poseсионarios o con terceros por problemas de usurpación de su terreno, y al haber acudido al Ministerio Público para denunciar dicho delito (usurpación); ¿su denuncia fue admitido por el Fiscal de turno en su condición de poseсионario en áreas forestales concesionadas?

SI

NO

6.- Una vez admitido su denuncia, y luego de haber realizado la investigación correspondiente, el Fiscal del caso; ¿ha formalizado denuncia ante el órgano jurisdiccional?

SI

NO

7.- De no haber formalizado la denuncia respectiva el Fiscal responsable del caso, ante el órgano jurisdiccional correspondiente; ¿cuáles fueron sus argumentos para archivar la denuncia?

.....

.....

.....

8.- ¿Usted cree que no pudo acceder al órgano jurisdiccional para obtener “justicia” por el delito denunciado ante el Ministerio Público, porque no cuenta con la seguridad jurídica posesoria del terreno que posee? Si fueron otros los motivos marquen “NO”.

SI

NO

9.- De haber formalizado la denuncia el Fiscal (representante del Ministerio Público), como titular de la acción penal, ante el juez penal correspondiente (representante del Poder Judicial); ¿ha obtenido “justicia” (tutela jurisdiccional) por el delito denunciado?

SI

NO

10.- De ser negativo su respuesta en la pregunta anterior, ¿usted cree que no pudo obtener “justicia” por el delito denunciado, porque no cuenta con la seguridad jurídica posesoria del terreno que posee? Si fueron otros los motivos marquen “NO”.

SI

NO

FICHA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL (Anexo 03)

N°	N° DE CARPETA FISCAL	CASO	CONCLUSIONES DEL FISCAL RESPONSABLE DESPUÉS DE REALIZAR LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR PARA DICTAR LA DISPOSICIÓN CORRESPONDIENTE.	DECISIÓN DEL FISCAL
01				
02				
03				
04				
05				
06				